

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(PROVISIONAL)
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Período 131°

4° Reunión - 2° Sesión especial – 17 y 18 de abril de 2013

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **Amado Boudou**,
de la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz **Rojkes de Alperovich**, y
del señor vicepresidente del H. Senado, senador **Juan Carlos Marino**
Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Juan Horacio Zabaleta**
Prosecretarios: señor D. **Luis Borsani**, señor D. **Mario Daniele** y
señor D. **Santiago Eduardo Révora**

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
 2. Convocatoria a sesión especial.
 3. Homenaje a las víctimas de las inundaciones.
 4. Homenaje a víctimas del Holocausto. (S.-1.321/13.)
 5. Nota del señor secretario del Cuerpo.
 6. Manifestaciones.
 7. Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura. (O.D. N° 22/13.)
 8. Creación de Cámaras Federales y Nacionales. (O.D. N° 21/13.)
 9. Apéndice
 - I. Convocatoria a sesión especial.
 - II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
 - III. Actas de votación.
 - IV. Inserciones.
-

- *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 39 del miércoles 17 de abril de 2013:*

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por Río Negro Pablo Verani a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- *Puestos de pie los presentes, el señor senador Verani procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

2

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente. – Se incorporará al Diario de Sesiones la nota de varios señores senadores por la que se solicita esta convocatoria a sesión especial y el respectivo decreto dictado por la Presidencia.¹

3

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del Orden del Día 22, Expediente PE.-5/13...

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una publicación periodística y un pedido de explicación por escrito que se formuló al secretario parlamentario, informe que luego fue remitido a todos los bloques. Si estamos de acuerdo, le solicito al señor secretario que le dé lectura para conocimiento de toda la Cámara.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente del bloque del Frente para la Victoria y también le pido al Cuerpo que, a modo de homenaje a la memoria de las víctimas de las inundaciones de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires, hagamos un minuto de silencio.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – De acuerdo con lo manifestado por los senadores Pichetto y Cano, solicito que se incorpore a la sesión de hoy el homenaje por el 70 aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia. Solicito que por Secretaría se pueda rendir el homenaje a las víctimas del Holocausto.

Sr. Pichetto. – Me parece totalmente aceptable la propuesta del senador Giustiniani. Es un homenaje que tenemos que rendir a la memoria de las víctimas y estamos totalmente de acuerdo en nuestro bloque. También lo estamos con el pedido que ha hecho el senador Cano de hacer un minuto de silencio.

Sr. Presidente. – Entonces, propongo que hagamos un minuto de silencio.

- *Puestos de pie los presentes, se realiza un minuto de silencio.*

4

¹Ver el Apéndice.

S.-1.321/13

HOMENAJE A VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO

Sr. Presidente. – Propongo que hagamos ahora el homenaje, señor secretario.

Sr. Secretario (Estrada). – El texto del proyecto de homenaje que lleva el número 1.321 del año en curso dice lo siguiente: “1 Senado de la Nación resuelve: rendir homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse el 19 de abril el 70° Aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto de homenaje.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución, por unanimidad. Se procederá en consecuencia.¹

(...)

¹ Ver el Apéndice.

6

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero.

Sra. Montero. – Señor presidente: lo que voy a expresar viene un poco a colación de lo informó el secretario Estrada aquí.

Nuestro bloque cree que es de absoluta relevancia que celebremos una sesión ordinaria para el tratamiento de todos estos temas. Estamos llegando tarde como Estado. Y esta anulación del Congreso para el debate y el tratamiento de los temas que son de absoluta sensibilidad para todo el cuerpo social de la República Argentina, la verdad que nos deja afuera.

O sea, la tragedia de Once se cobró 51 muertos; las inundaciones de La Plata, otro tanto, y miles de familias que lloran. Sin embargo, no hemos podido celebrar ese debate aquí la semana pasada, porque tuvimos que realizar una sesión en minoría, donde ni siquiera teníamos los medios públicos que normalmente están contratados los días de sesión para transmitir las iniciativas que nosotros estábamos volcando al Poder Ejecutivo en ese momento.

Nosotros teníamos la intención de debatir para contribuir, con un espíritu positivo y de ayuda, a sortear las dificultades, dado que en ese momento era absolutamente necesario solucionar los problemas que estaban viviendo muchos ciudadanos de La Plata. Lamentablemente, no pudimos celebrar esa sesión.

Este domingo, Jorge Lanata expuso el resultado de una investigación periodística. Esas investigaciones, además, han tenido la iniciativa de partidos de la oposición. Y debo reconocer que el ARI en esto ha tenido muchísimas iniciativas –y también, por Santa Cruz–, pero no llegan a tener el tratamiento y el esclarecimiento necesarios.

Nosotros hemos presentado una serie de proyectos de resolución, porque estamos citando a diversos funcionarios. En ese sentido, en el marco del artículo 71, queremos que venga el ministro de Justicia Alak. Y también queremos que venga, aunque sea a instancias de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la procuradora Gils Carbó, porque entendemos que tiene que promover el accionar de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses ciudadanos, como dice la Constitución, aunque la verdad es que la vemos mucho más comprometida y vinculada con las acciones del Poder Ejecutivo que orientada a resolver este tipo de problemas. Creo que le podría dar tranquilidad al secretario Estrada si se investigara como corresponde y no se anularan los procesos de investigación.

También tenemos proyectos de comunicación, que justamente le comunican al Poder Ejecutivo que nosotros necesitamos como cuerpo colegiado, como Senado de la Nación, que se movilicen todos los organismos que están disponibles para los procedimientos de investigación –o sea, a la AFIP y a la Unidad de Investigaciones Financieras–.

Todos estos proyectos, que voy a hacer circular para su lectura y para que los tengan en cuenta para el tratamiento en la próxima sesión, ya están ingresados.

Más allá de esto, hay también otros proyectos que solicitan informes –como por ejemplo, al Ministerio de Planificación, para que informe acerca de cómo se van ejecutando los fondos–; y otros, también de esta naturaleza, que apuntan sobre todo a lo que se ha estado manejando en inversión de obra pública en Santa Cruz, respecto de lo cual también ayer la presidenta del ARI de la provincia de Santa Cruz, en distintos programas, ha dejado en evidencia cómo se maneja la obra pública en Santa Cruz, cómo está comprometido Lázaro Báez y su vinculación con el kirchnerismo. Los proyectos son el S.-1.527; S.-1.530; S.-1.529; S.-1.526; S.-1.525 y S.-1.528.

Quiero decirles, particularmente al señor presidente de la Cámara y también al presidente del bloque oficialista, que no podemos dilatar más estos debates en la Argentina. Sinceramente, el precio que se está pagando es muy caro y nosotros tenemos la responsabilidad desde el Estado; cada uno, en el rol que le corresponde. El Poder Ejecutivo tendrá que asumir lo propio; pero nosotros, como Congreso de la Nación, como representantes del pueblo y de las provincias, no podemos estar ausentes en estos temas que son gravísimos; y gravísimos porque la corrupción también mata.

Los fondos que no se destinan apropiadamente, que se destinan a la corrupción, son fondos que no se dan para atender asuntos de vivienda, de salud, de educación, que no se dan hacia acciones de protección social de la población más vulnerable, que hoy también está negada. Insisto siempre con que la presidenta de la Nación vino acá a decir que la pobreza es del 6 por ciento. La pobreza es mucho más del 6 por ciento. Y a estos problemas nos tenemos que abocar.

Con esto –y sin pretender extenderme mucho más– quiero pedir que, por favor, si es posible, hoy tratemos estos temas que nos parecen de absoluta relevancia; de lo contrario, fijemos una fecha para el tratamiento de una sesión ordinaria donde podamos dar vigencia a todos estos proyectos presentados por la oposición en los asuntos que he mencionado: las inundaciones y en el que ha disparado o debería disparar procesos de investigación por parte del Estado y requerir el tratamiento adecuado y el compromiso del Congreso de la Nación, a fin de no dejar flotando el problema de la corrupción sin respuesta.

Y también hay otros proyectos que son de sumo interés, como los relacionados con la hemofilia –cuyo tratamiento se realizó ayer en la Comisión de Salud– y con la fertilización asistida. Son temas pendientes, que requieren una respuesta inmediata, que nosotros nos hagamos cargo y que, como legisladores de la Nación, promovamos todas las leyes que pongan en funcionamiento al Estado en forma eficiente para poder actuar en todos estos asuntos mencionados.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Señor presidente: sin ánimo de extenderme en lo planteado por la senadora Laura Montero, que claramente es la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, entendemos que la agenda actual del gobierno pase por los temas que hoy y mañana vamos a abordar en el recinto. No obstante, consideramos que hay acontecimientos que realmente deben formar parte de la agenda de la política, sin hacer acá discreción de si uno forma parte del oficialismo o de la oposición.

Nosotros pretendíamos considerar –y hemos presentado proyectos en ese sentido– los hechos que ocurrieron en pleno siglo XXI y cerca de cumplirse treinta años de democracia en la Argentina: ha muerto gente como consecuencia de las inundaciones, ya no en la zona del interior profundo del país, sino en los centros urbanos, en un país que ha tenido un crecimiento económico importante. Sin entrar a hacer juicios de valoración sobre las responsabilidades, creo que la dirigencia política en general tiene responsabilidades sobre estos hechos, pues no ha sido capaz de fijar una agenda común.

Pretendemos que la presidenta de la Nación convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas, convoque a los bloques parlamentarios de la oposición y, de alguna manera, tengamos un relevamiento de aquellas áreas vulnerables en todo el país. Digo esto, porque hemos tenido otra tragedia de situaciones similares en Tartagal no hace mucho tiempo; seguramente, las contingencias climáticas en algunas otras provincias podrían provocar hechos similares a los que ocurrieron en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

Independientemente de los resultados electorales, hay muchas obras que requieren distintas provincias de la Argentina. Por eso, nos parece que este es un buen momento para convocar a ese marco de diálogo, y que las obras postergadas formen parte de la agenda política y, fundamentalmente, del presupuesto del año próximo.

Repito, independientemente de los resultados electorales, pedimos que la respuesta de la política a este tipo de hechos sean políticas de Estado. Ese es el ánimo que mueve al bloque de la Unión Cívica Radical ante estos hechos lamentables, que son absolutamente prevenibles y que –como les decía– es una cachetada a toda la dirigencia política que en pleno siglo XXI en nuestro país sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

La segunda cuestión también tiene que ver con la ausencia del Estado; en este caso, con la ausencia del Estado por negligencia, por no entender que estos son temas prioritarios que todos debemos abordar. Me refiero a la ausencia del Estado por complicidad.

Entendemos que cuando existen hechos de corrupción, cuando *a priori* existen denuncias periodísticas, que obviamente la Justicia tendrá que investigar, cuando existe la posibilidad de que haya lavado de dinero, cuando existen personajes que no tienen ningún problema en ostentar públicamente su riqueza –que muchas veces también los vemos en nuestras provincias– y nadie se explica de dónde sale esa riqueza, la AFIP debería actuar y no perseguir a quienes se manifiestan en contra de un funcionario o a aquellos medios

periodísticos que no tienen la línea editorial que el gobierno plantea, sino que debe actuar en su rol para evitar que haya personajes que ostentan riqueza y que no la pueden explicar.

Para nosotros es muy difícil explicar –y lo venimos diciendo– que una persona como Lázaro Báez, que era un empleado bancario, que tuvo un ascenso con la primera gobernación de Kirchner, hoy sea uno de los empresarios más exitosos y más ricos del país. Entonces, sería muy importante que venga De Vido, que sepamos efectivamente cuántas obras hicieron las empresas vinculadas a Lázaro Báez, de qué manera se le adjudicaron, si esas obras están realmente hechas en los términos que se planteaban en las licitaciones o en las contrataciones directas. Es decir que vengan los funcionarios que deban venir, que la procuradora explique por qué no actúa la Procuraduría Adjunta de Criminalidad y de Lavado de Activos que se creó en el ámbito del Ministerio Público, que casualmente está para estas cosas, y que no nos enteremos por investigaciones periodísticas de cuestiones que muchos, a veces, sospechamos y que manifestamos en el recinto. Está bien que el periodismo investigue, pero me parece que hay resortes institucionales del Estado que acá no funcionan.

Nosotros tenemos una denuncia penal en mi provincia por el Plan Más Cerca que plantea el ministro, faltándole al respeto a los gobernadores de las provincias, pues convoca a los intendentes para hacer óbice, y donde presupuestaron obras que, en algunos casos, hace diez años fueron inauguradas en la provincia de Tucumán, es decir que ya están hechas.

Entonces, señor presidente, independientemente de que la agenda del gobierno pase por los temas que hoy vamos a abordar, me parece que la clase política, sea oficialismo u oposición, se aleja de la gente cuando acá discute cuestiones que no tienen que ver con la realidad que plantea la sociedad o que a ella le preocupan.

En consecuencia, nos parece un punto importante. Hoy pretendíamos realizar una sesión ordinaria para abordar estos temas que consideramos de una trascendencia absoluta y sobre los cuales cada uno defenderá su posición, al igual que pretendíamos considerar otros asuntos donde hemos logrado un grado de consenso importante con el oficialismo, como es el caso de los pacientes con enfermedades como la hemofilia y el tema de fertilización asistida, que es un tema pendiente en el Congreso de la Nación.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – En primer lugar, la sesión que ha sido convocada tiene...

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – El senador Giustiniani pide la palabra y después usted cierra.

Sr. Pichetto. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde el Frente Amplio y Progresista, también queremos señalar que sería necesario abordar en una sesión estas temáticas planteadas, sin demoras, en función de la emergencia que existe en muchos lugares del país, es decir, por las inundaciones que ocurrieron en la ciudad de La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires y en lugares del conurbano.

No obstante, en el interior de nuestro país, en Santa Fe, también padecemos precipitaciones muy grandes. Hemos presentado proyectos respectivos, de todas las bancadas, para que la asistencia nacional que se anunció se haga extensiva a distintos lugares del país, en función de estos requerimientos. Nos debemos un debate –lo hemos

convocado desde la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable– acerca de lo que hoy significa el cambio climático en nuestro país y en el mundo. Abordar estas cuestiones desde el Congreso nos parece fundamental.

Creo también que debemos encarar el debate que hoy se está dando en el país, en los medios de comunicación, acerca de la necesaria transparencia que debe existir en todo lo que hace al funcionamiento del desarrollo de las obras públicas, todo lo que hace a una relación de lo público con lo privado desde hace muchísimos años. Desde el socialismo del Frente Amplio Progresista hemos planteado que la transparencia es fundamental en el ejercicio de las acciones del Estado y, en determinadas oportunidades, también hemos planteado –como cuando sucedió la tragedia de Once u otras en el país– que la corrupción mata.

Hemos dicho muchas veces en este recinto ante distintos jefes de Gabinete que expusieron acá que era necesaria la transparencia en el ejercicio de los fondos públicos, que las denuncias penales existentes en el país a los ex secretarios Jaime y Schiavi expresan esa necesidad de transparencia en el ejercicio de lo público. Por lo tanto, nos parece que este debate es importante; y creemos que es necesario que el Congreso se aboque a estos temas. Por eso apoyamos que estas iniciativas sean abordadas desde este recinto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.

Sr. Artaza. – Señor presidente: para una interrupción al senador Giustiniani.

El presidente de mi bloque ha sido claro con las prioridades que estamos planteando; también, la senadora Laura Montero. Además, a lo que decía el senador Giustiniani sobre las inundaciones, quería sumar la necesidad de tratar una política estratégica en las zonas ribereñas.

En Corrientes, nosotros estamos sufriendo esta situación en localidades como Perugorria, Bella Vista, Santa Rosa y, sobre todo, en Goya y en Santa Lucía. En Goya, se está necesitando el trabajo conjunto del Estado para los presupuestos para la defensa de la segunda ciudad, donde podemos volver a vivir tragedias como las que vivimos en 1998 y después. Así que es necesario, y vuelvo a puntualizar, el tratamiento de una estrategia para las inundaciones, no solamente en los distintos lugares en donde se han producido ahora, esta tragedia enorme, sino también en las provincias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy breve. El aspecto formal de la convocatoria de hoy y de la de mañana me exime de comentarios. No hay ninguna posibilidad de incorporar otros temas que no sean los planteados para las dos sesiones especiales que vamos a tener hoy y mañana.

De todas maneras, el bloque está dispuesto a analizar y debatir, el miércoles que viene, en una sesión ordinaria, los distintos temas que se han planteado. De forma especial, nos interesa –y es un compromiso de nuestro bloque, que nunca tuvo una posición negativa– un abordaje más serio y más ordenado sobre el tema de fertilización asistida. Creemos que hay que hacer un trabajo en Comisión para poder abordar este tema el miércoles que viene. Lo mismo acerca del tema de la hemofilia, sobre el que la Comisión de Salud ha trabajado muy bien y estamos dispuestos a tratar.

Estamos dispuestos también a analizar algunas de las cuestiones que hoy forman parte de la agenda y a darle debate en el plano político. Coincido en que la corrupción mata, pero también la impericia, la incapacidad, la desidia de algunos gobernantes que tienen a su

cargo ciudades como ésta, la Ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades que tiene mayor ingreso per cápita del mundo, uno de los lugares donde el ABL ha aumentado el 200 por ciento en el término de un año y no ha habido ninguna voz que se haya levantado en el marco de la Legislatura para cuestionar esto, una ciudad que tiene recursos propios y en la que no se hacen obras que son fundamentales para los porteños. En fin, estamos dispuestos a dar este debate.

Estamos dispuestos también a analizar la fortuna de muchos en la Argentina, hecha al amparo de la obra pública, de las dictaduras, y me refiero a nombres de prestigio de hoy. Porque pasa como sucedió también en la época de la ley seca en los Estados Unidos. Es muy interesante como se reconvierten las figuras: de un padre mafioso, contrabandista, a constituir una familia honorable.

Me parece que es interesante este abordaje. No tenemos temor de hacerlo. Así como lo que significa el club de la obra pública. Hay muchos temas para hablar y para discutir. Cómo se funciona en las provincias. Cómo funcionó la dictadura, cuando muchos de estos que hoy defienden la República estaban al servicio de la dictadura y se quedaban callados.

Y si hablamos de una Justicia independiente –que es la voz que hoy clama en la ciudadanía; en algunos sectores están declamando tanto por la República como por la Justicia independiente–, dejemos también que los organismos respectivos, los distintos poderes funcionen, que la Procuración General se haga cargo de las tareas de las que tiene que hacerse cargo.

Estamos dispuestos a dar este debate la semana que viene. Y hay algunos otros temas, como el ingreso de jueces. Así que mi compromiso, el compromiso del Frente para la Victoria es discutir todos estos temas el miércoles que viene, en una sesión que, de por sí, ya la dejamos programada, la abrimos. Ese es el compromiso que asumimos.

Y estamos dispuestos también a avanzar sobre temas que hacen a la salud, que son un reclamo de muchas familias que no pueden tener hijos. En fin, nosotros no somos malos, nos ponen el rótulo. Pero, a veces, tenemos que ordenar algunas cuestiones que tienen que ver con la previsibilidad del Estado, con la posibilidad de que las cosas se hagan bien, que podamos funcionar correctamente. Y no ha habido un gobierno que haya avanzado tanto en la temática de ampliar derechos y, fundamentalmente, reconocimientos.

Con el senador Cano, que ha tenido a cargo la Comisión de Salud, hemos sancionado leyes muy importantes de común acuerdo en este Parlamento, avanzando en legislaciones protectivas hacia los ciudadanos. Así que estamos dispuestos a dar el debate desde lo político y, también, a incorporar en la agenda del miércoles temas que son de trascendencia social.

Mi compromiso es que nos aboquemos ahora a iniciar el debate sobre el Consejo de la Magistratura, como primer tema, y el de Casación después. La propuesta que voy a hacer es que discutamos sobre los dos temas en general y, después, pasemos a votar cada tema en particular, como corresponde. Esto si es que estamos de acuerdo; si no hay acuerdo, por supuesto, no.

Los miembros de mi bloque que van a fundar sobre los dos temas son los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Repartirían el tiempo e informarían sobre el Consejo y sobre Casación, si es que acordamos discutirlos en general en forma conjunta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar, para hacer un reconocimiento, porque nos constan, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, las gestiones que viene realizando el presidente del bloque del Frente Para la Victoria para que, efectivamente, podamos avanzar en la sanción del proyecto de ley sobre fertilización asistida. Esto lo venimos conversando en labor parlamentaria desde hace bastante tiempo. Y me parece muy importante, trascendente, que finalmente el Senado pueda abordar el tratamiento de este tema.

En segundo lugar, creo que el senador no lo dijo, pero habíamos acordado que íbamos a incorporar el tema de la hemofilia en la próxima sesión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero oponerme a que se debatan en forma conjunta los dos temas de la sesión de hoy, atento a la falta de debate en comisión y atento a la negativa a escuchar otras voces en comisión. Me parece que son dos temas diferentes y muy importantes. La ciudadanía tiene derecho a escuchar el debate de cada tema por separado y a saber cuáles son las razones por las que se apoya o rechaza cada uno de estos proyectos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en el mismo sentido de lo planteado por la senadora por Salta quiero expresar que tenemos un trámite exprés. El país está conmocionado por esto. Es un cambio de reglas en el Senado increíble, innecesario y que no responde a ninguna de las tradiciones de esta Cámara. El senador Pichetto ha sido un custodio permanente de la jerarquía de este Senado.

No hemos tenido debate. Antes de reunirse la comisión ya nos dijeron que no habría cambios ni modificaciones en el dictamen. No se habían reunido aún y ya estaban firmando en la sala de al lado el dictamen de la comisión.

Entonces, lo menos que podemos pedir para que se nos respete es que se trate cada tema por separado y con la mayor amplitud de debate, de tal forma que podamos enmendar el error que se ha cometido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: siguiendo una suerte de norma no escrita, cuando algún bloque o señor senador no está de acuerdo con la metodología, y lo que se busca es dar garantías de debate, lo que acaba de plantear el bloque del Peronismo Federal amerita que lo escuchemos.

Sí pido que tratemos primero el tema del Consejo de la Magistratura porque me da la impresión de que muchas de nuestras posturas vinculadas a la Justicia en general van a ser agotadas en ese proyecto, y luego cuando pasemos al proyecto relativo a la casación podremos ganar tiempo para que la sesión sea más rápida.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: no voy a abrir una discusión sobre lo que pasó. No quiero herir a nadie. El debate estuvo abierto.

Respetuosamente digo que fue un error la ausencia. Las ideas hay que sostenerlas en el ámbito de los espacios legislativos. Aun cuando no triunfen por el número, esas ideas después pueden ayudar a cambiar la opinión pública y consolidar alternativas electorales. Es el triunfo del debate de las ideas. Las mayorías siempre son circunstanciales y varían. Los cuerpos colegiados siempre resuelven por mayoría y minoría.

El vacío es el peor de los escenarios. No ha sido culpa nuestra que no hayan estado. Pero no quiero hacer un desarrollo de este punto. Lo que digo es que en aras de hacer un debate transparente, y por lo que dijo recién el senador Sanz, estamos de acuerdo en que primero se debata el proyecto del Consejo de la Magistratura y se vote y luego que se trate el relativo a las cámaras de casación. Mañana trataremos el proyecto sobre cautelares, un debate realmente apasionante e interesante. Estamos elaborando algunas propuestas relacionadas con lo que se discutió ayer.

No queremos de ninguna manera enturbiar el proceso de discusión política.

Sr. Presidente.- Entonces, primero se tratará un proyecto, se votará y luego pasaremos al segundo proyecto.

7

O.D. N° 22/13

**MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA**

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 24.937, de creación del Consejo de la Magistratura

En consideración general.

Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: siempre hemos dicho que los frutos de la democracia no se dan graciosamente, no a la manera de frutas silvestres que caen de los árboles. Los frutos de la democracia son producto de una profunda historia de luchas nacionales por la emancipación. Los frutos de la democracia hay que ganarlos. Los frutos de la democracia son, precisamente, aquellos objetivos que nos convocan independiente de banderas políticas, independiente de apasionamientos.

Cuando la señora presidenta de la Nación manifestó ante la Asamblea Legislativa la intención de remitir al Congreso de la Nación un conjunto de medidas para democratizar el Poder Judicial, acompañadas también con iniciativas que hacen a la modificación de los códigos de derecho sustantivo en la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial y la elaboración del anteproyecto de reforma del Código Penal, era sabido que estas iniciativas iban a encontrar la resistencia y oposición que encontraron.

Toda vez que se expanden derechos y se intenta poner límites a privilegios, aquellos sectores que consideran que esos privilegios pueden verse afectados se abroquelan y, a veces, de manera despiadada. Es nuestra historia, es nuestra memoria y son nuestros mártires la más clara expresión de ese abroquelamiento.

Democratizar el Poder Judicial no es ni más ni menos que saldar ese déficit democrático de origen. Es decir, cuando leemos en la historia cómo se conformaron los procesos emancipadores en América latina, su regionalidad, sus banderas de resistencia contra la colonia conformadas no solo por rioplatenses sino también por tupizanos y tarijeños, cuando se compara cómo es el proceso de independencia y revolución en Estados Unidos, encontramos ese primer punto de diferenciación que va a explicar cuál ha sido la conformación cultural e interpretación que los sectores dominantes en la Argentina han tenido de lo que debe ser el Poder Judicial.

La Revolución Americana es anterior en el tiempo a la Revolución Francesa, pero su legislación es posterior a los horrores, al terror y a las movilizaciones de lo que llamaban las turbas enloquecidas en las calles. ¿Por qué planteo esto? Porque debemos recordar precisamente que en ese encuadre regional de nuestra conflictividad por la independencia – más allá del reconocimiento a figuras como el Almirante Brown y otros extranjeros al servicio de las juntas, el crucero La Argentina y Bouchard– las guerras de la independencia en América latina nunca tuvieron una vinculación directa con potencias extranjeras. Por el contrario, en Estados Unidos debemos recordar la presencia masiva de fuerzas francesas peleando al lado de los americanos por la independencia americana en el marco de los conflictos de guerra intereuropeos.

En esta presencia y cercanía –La Fayette, nobles, aristócratas franceses, camaradas de armas, que una vez que se produce la Revolución Francesa, y en el refugio americano, en agradecimiento a los servicios prestados a la revolución transmiten las experiencias y los horrores que como clase les provocó la Revolución Francesa– surge el temor a las multitudes.

Y ese temor a las multitudes, en esa conformación institucional, genera el concepto de contramayoría. Es decir, había que tener cuidado de las asambleas populares para que no avancen sobre los privilegios y prerrogativas de clase que tenían los sectores dominantes al momento de la independencia. Esta tradición se transmite en los esquemas culturales dominantes a los cuales se ha tributado durante tanto tiempo en la Argentina.

¿Por qué digo esto? Porque este debate, presuntamente fallido, estuvo condicionado por esos intereses. Sin ánimo de ofender, como bien dijo mi jefe de bloque, recuerdo que antes de que se tomara conocimiento de los proyectos de ley que la señora presidenta, en pos de este objetivo de democratizar la Justicia, remitiera a este cuerpo la oposición ya había tomado partido en su inmensa mayoría. Es decir, se opusieron sin siquiera conocer sus textos.

¿Qué significa esto? Significa que ese condicionante del marco del debate ya había sido dado previamente por esos intereses corporativos. Esa conducta que señalábamos, de temor a la expresión de la voluntad popular, esa conducta histórica de temor a la soberanía política, que no es más ni menos que el voto del pueblo, fue instrumentada mediática y concisamente a través de los medios hegemónicos de información de nuestro país.

Por otra parte, respecto de la academia, entre comillas –aquellos que gozan de ese prestigio académico en función del seguimiento de todo este sistema de doctrinas– el otro día traje un solo ejemplo; me tomé la molestia de ver que los magistrados superiores deben ser autorizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para viajar al exterior y en el mismo período de tiempo que se autorizó a viajar a ocho magistrados superiores a la República Federativa del Brasil, nuestro principal socio comercial, económico y político no sólo de la región, sino del mundo, también se autorizaron 82 viajes a los Estados Unidos.

Uno se pregunta: ¿A estudiar qué? ¿La seguridad en las escuelas? ¿Los niveles de vida en Harlem? Lo digo con todo respeto. ¿O directamente opera un sistema de *lobby* activo y permanente con respecto a lo que se denomina la “judicatura de las Américas”? No es un tema menor dónde se abreva, qué se concibe y qué se piensa porque esto hace al centro del debate. Hoy no estamos discutiendo solamente aspectos de legislación o propuestas de reformas, sino que estamos discutiendo la soberanía popular, el voto popular.

¿Qué pretende esta reforma? Partiendo de la base de ese déficit democrático de origen, en la medida en que nuestro sistema constitucional garantiza la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y la soberanía popular, fuente, justificación y dirección de todo nuestro sistema, es que se propone, como núcleo central de esta reforma del Consejo de la Magistratura, la elección de los miembros componentes del mismo mediante el ejercicio de la soberanía popular expresada en el voto.

Tengo aquí los datos del sistema de elección que se pretende renovar. Respecto del escrutinio provisional de la elección del Consejo de la Magistratura del 15 de septiembre de 2010, los votantes en total fueron 685 magistrados. Y ocho en la Cámara Federal de apelaciones de Bahía Blanca, lista mayoritaria y minoritaria, donde está desgranado el universo electoral. Con relación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, los que eligen a los consejeros en representación de la abogacía, había 39.980 habilitados para votar y votaron 9.856 de ese universo. En el padrón electoral de las elecciones del 23 de octubre de 2011 había 28.916.000 electores hábiles. Esta es la primera cuestión que tenemos que discutir.

No existe en ningún lugar del texto constitucional, el cual no sólo defendemos, sino que pretendemos la realización plena de sus artículos 1º, 22, 33, 37 y 38, donde el fundamento de nuestro sistema reside en la soberanía popular, un solo párrafo que establezca que la elección de los representantes estamentarios que van a conformar el Consejo de la Magistratura deba ser hecha exclusivamente por su estamento. No hay un solo párrafo que haga mención a eso. Es más, si nos desenvolvemos en la estructura constitucional, estamos planteando el desarrollo del mayor marco de participación posible que la Constitución Nacional establece. Es decir, esta reforma tiene como sustento fundamental el concepto de soberanía popular.

La crisis terminal de 2001, en este *racconto* histórico para entender el momento que estamos discutiendo, se lleva puesto a la totalidad del sistema político argentino. Recordemos este Congreso y los señores senadores y diputados saliendo a escondidas, los insultos, la vergüenza, los muertos en la Plaza de Mayo, las movilizaciones y la expresión acabada del hastío del “que se vayan todos”. Es esta crisis la que interpela severamente a nuestro sistema político y explica el desembarco y las modificaciones que se producen a partir de 2003 con la llegada de Néstor Kircher al gobierno y posteriormente de la presidenta Cristina Fernández.

En ese sentido, la renovación de los cuadros y metodologías de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la propuesta de políticas inclusivas y la serie de extensión de derechos que hemos logrado participando activamente desde el Senado responde a las demandas de una sociedad que cada día legítimamente exige más. Eso no sucede con el Poder Judicial. Es este déficit democrático de origen, con una natural tendencia a conductas sociológicas corporativas de encierro, que lo convierte en garante, ante ese avance de extensión de derechos y limitación de privilegios, de esos sectores conservadores que se abroquelan dentro del mismo.

Recordemos que desde la creación de la Corte Suprema de Justicia, conforme el modelo que describíamos –americano–, es con motivo del golpe de Uriburu que la Corte institucionaliza y legitima por primera vez en la Argentina –y se aparta de la doctrina americana, que estaba exenta de las cuestiones políticas– el golpe militar contra el

gobierno popular de Yrigoyen. Posteriormente lo hace contra el gobierno popular del general Perón.

No sólo se limita a eso sino que legitima la derogación de la Constitución que expresó el nivel de conciencia colectivo más elevado del pueblo argentino, que fue la Constitución del 49. No solamente realiza eso sino que la deroga directamente por un decreto o bando militar, y la Corte lo convalida.

Convalida el golpe de Onganía. Recuerdo la ingenuidad de los años en que estudiábamos en La Plata, cuando se había impuesto la pena de muerte por el general Onganía. Entonces, alguno tuvo la idea de ir a la sala de profesores a entrevistar al rector – doctor Iriarte se llamaba–; hombre ya puesto por Onganía después de la Noche de los Bastones Largos.

Van los alumnos del Centro de Estudiantes. Me acuerdo que estaba el compañero Fredy Storani, que era el presidente del Centro de Estudiantes, compañero de Franja Morada. Ante la pregunta, ante la alarma que le formuláramos al señor decano, el mismo nos manifestó con serenidad y tranquilidad: “Queden tranquilos: la pirámide jurídica está intacta”. Es ese concepto de ritual, de formalismo, donde a partir de cualquier engendro que puedan inventar en nombre de Kelsen, generan estos pensadores ese concepto del derecho.

Porque esa es la vieja pugna; cáscara, forma por un lado, contenido y sustancia por el otro. ¿Y cuál es el contenido y la sustancia de la democracia? Es la soberanía popular, es la participación del pueblo. Eso es irrenunciable, y eso es la base constante de toda lucha nacional por esa expansión de derechos y garantías y la limitación de privilegios.

Es decir, esta conducta de ese Poder Judicial que transitó alegremente, que no tuvo empachos en jurar por los estatutos de la revolución que fuera, donde sinceró de manera más que clara el magistrado Recondo en la entrevista que otorga al “Diario Perfil”, cuando manifiesta: “Los gobiernos van y vienen. La Justicia es permanente”. Y omitió decir que también hay otro poder permanente, que son los poderes fácticos y económicos. Esto es lo que comenzamos a discutir a partir de la remisión de estos proyectos que la señora presidenta efectuara.

Modificaciones a la actual legislación que tiene como núcleo de reforma cinco puntos. Establecimiento de mecanismos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura que expresen más fielmente la voluntad popular, fuente de toda soberanía y legitimidad democrática –lo cual ya ha sido explicado–.

En segundo lugar, garantizar y perfeccionar el equilibrio de los diferentes estamentos y su composición

La ampliación del número es el número mínimo posible, atento que al subsanar el déficit de democratización estamos dando participación a las minorías. Por lo tanto, no puede haber menos que los miembros que se introducen en la reforma. Ampliar el número a seis académicos e incorporar un abogado más, lo cual va a permitir dos abogados por mayoría, un abogado por minoría; cuatro académicos por mayoría, dos académicos por minoría.

Otro tema central en esto. Esa conducta corporativa, permeable, funcional a esos intereses económicos y fácticos. La experiencia nos muestra, los diarios lo señalan. Tenemos cinco años –el senador Sanz estuvo un tiempo ahí– y con el senador Cimadevilla estamos ahora. Hemos llegado a un punto de parálisis de la actividad del Consejo de la

Magistratura. Porque precisamente en cuanto a esa actitud corporativa, se garantiza por la ley la conformación de una mayoría agravada.

¡No hay un solo renglón, un solo centímetro en el texto constitucional que diga que las decisiones del Consejo de la Magistratura no pueden ser tomadas por simple mayoría!

Aquellas cuestiones que hacen a mayorías agravadas están expresamente establecidas en la Constitución Nacional. No hay ninguna que manifieste esa limitación.

Se creyó en su momento, en la primera reducción de miembros, que la dinámica la iba a lograr el equilibrio entre el estamento político con legitimación democrática de la representación parlamentaria y el sector corporativo.

La experiencia ha demostrado que se torna imperioso modificar ese límite, que es un privilegio que la corporación se asegura para el sector corporativo de magistrados y abogados para evitar avanzar, tanto en las denuncias en el juzgamiento de conductas como en la selección de magistrados.

Traigo a memoria la funcionalidad a las corporaciones con el concurso 258, que iba a cubrir el juzgado donde un poderosísimo grupo mediático económico, prácticamente un poder fáctico en la Argentina, tenía un interés concreto de paralizar esa designación. Un concurso que transcurrió –y no voy a entrar en polémica, simplemente voy a dar un solo dato– y en el cual no he encontrado respuesta de ninguno que cuestione ese concurso. Cerca de tres años de tramitación, sin ninguna observación. Con la erogación y los gastos que al Estado le genera. ¡No hubo una sola impugnación! ¡Pero eso no es lo más grave! ¡No hay dos líneas escritas de aquellos consejeros que se opusieron, en función corporativa, a ese concurso justificando su oposición! Vayan a ver el estado del expediente: ¡no hay dos renglones escritos! ¡No hay un solo escrito que justifique eso!

Es decir, corporación judicial con la designación de subrogancias arbitrarias, en violación de la ley de subrogancias; con magistrados jubilados sin ningún tipo de responsabilidad, sin tener que rendir cuenta a nadie. Esa corporación bloqueó la designación del juez de la Constitución que iba estar al frente del juzgado, y fundamentalmente estableció un mecanismo de rotación que aseguraba, precisamente, el interés de esa corporación.

Para el senador que quiera, tengo acá recopilados los datos desde el momento en que el juez Carbone, jubilado, toma conocimiento, hasta el día de hoy; están todos los antecedentes. El que quiera, lo tiene a su disposición.

Es decir, equilibrio de la composición estamentaria. Elección por el voto popular de los miembros que conforman el Consejo.

Esto es bueno aclararlo, además, porque en este grado de confusión al cual alegremente batió parche esa prensa, no estamos eligiendo jueces para ejercer jurisdicción. Estamos eligiendo por el voto popular a los representantes en el organismo político-institucional que es el Consejo de la Magistratura.

Y se preserva el principio de independencia absoluta, de división de poderes e independencia del Poder Judicial. De ninguna manera se incorpora nada que sea lesivo a ese equilibrio y a las garantías constitucionales.

El tercer punto, y a los efectos de extender la democratización, es la morigeración de las exigencias para ser consejero, de suerte tal que, por vía formal, se evite la participación. Siempre digo que ese fue el eje conductivo del conflicto. Forma y cáscara por un lado, y sustancia por el otro.

El cuarto elemento es garantizar mecanismos ágiles de toma de decisiones que eviten esa paralización.

El quinto es establecer las condiciones que garanticen al Consejo de la Magistratura como administrador del Poder Judicial.

El otro día veía que un miembro de la Corte, no categoría sub 20 precisamente, recomendaba, en torno a la inquietud que manifestaba en cuanto a que se avanzaba peligrosamente sobre las atribuciones de administración de los recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia, que leyéramos la Constitución. Pero yo le voy a recomendar a ese magistrado que lea el artículo 114 donde la administración de los recursos del Poder Judicial está determinada por el texto constitucional y no por ley. La iniciativa que se trae a debate no invade ni viola ni contradice ningún texto constitucional. Es la reforma posible dentro de la manda constitucional que puede garantizar la mayor participación y legitimación democrática en la conformación de ese cuerpo.

Entonces, esa ampliación de la base democrática no solamente va a permitir la elección de ese consejero sino, fundamentalmente, que la sociedad tome conocimiento de quiénes son, qué proponen, cómo conciben la administración de justicia. La administración de justicia no es una cuestión que atañe simplemente al mundo jurídico; no es una cuestión que tenga que ver solamente con abogados y jueces. La administración de justicia es una cuestión que incide cotidianamente todos los días en la vida de todos los argentinos.

Estamos convencidos de que no son estas reformas las que por sí solas van a solucionar esa cotidianeidad y ese reclamo de justicia eficaz y rápida que exige la sociedad. Sin embargo, estamos convencidos de que no hay solución sin incluir precisamente las reformas enviadas.

Estas reformas, de ninguna manera, vulneran las condiciones de representación estamentaria. Se incorporan académicos no del mundo jurídico, precisamente, en función de lo interdisciplinario y complejo en que se han convertido nuestras sociedades, y, fundamentalmente, se armoniza con ese mandato de nuestra Constitución.

Reformar, democratizar y poner la administración de justicia al servicio de nuestro pueblo es el objetivo en conflicto, precisamente, de ese concepto de asepsia o del horror.

¿Cuándo comenzó el horror en la presentación del tema? Se decía que se iba a contaminar la Justicia con la política; es decir, la Justicia y la política, tanto en la Argentina como en el mundo, son seres que viven en un *tupper* y esta reforma las va a contaminar. Pero como eso rápidamente nadie lo puede creer se recurrió a la otra imagen: al miedo, al terror. Guarda que vienen por todo. Guarda que te van a abrir la caja de caudales y le van a llevar el vaso con la dentadura a tu abuelita de la mesa de luz. Es que ya es maldad. Y se llegó al grado de sostener que el proyecto apunta a una Justicia permeable y adicta al poder. O sea, una Justicia permeable y adicta al poder que, una vez que nos vayamos del poder nos siga cuidando. Esto es lo que se llama un contrato a futuro. Adicta y favorable al poder. Cambió el poder y, entonces, cambió la Justicia. Eso es lo que no queremos precisamente con la presente reforma.

Queremos los equilibrios permanentes de esa Justicia, y esa es una responsabilidad de la clase política. Esos equilibrios se dan desde la política. Esto es fundamental. Que los magistrados resuelvan las cuestiones que tienen que ver con las garantías y los derechos de los argentinos. Pero no que se utilice, como lo ha hecho la política, a la Justicia para prolongar sus conflictos. Lo que no se resuelve en la votación, en el debate y en las

elecciones generales se quiere resolver en la Justicia. Es prolongar la política por otros medios. Este es un pecado del cual somos responsables en gran medida los que integramos el cuerpo político. Es decir, el gobierno de los jueces.

Qué mayor tranquilidad para todos que saber quiénes son, qué piensan, tener las informaciones de sus estados patrimoniales y sus relaciones. ¿O alguno cree que once mil o doce mil cautelares en un solo juzgado se da porque sí y no por las relaciones con estudios jurídicos? ¿Alguien no sabe cómo funciona la relación corporativa, la presencia del interés económico?

Entonces, qué mejor para todos que conocer quiénes somos, qué queremos y qué pensamos. No se interviene el contenido de sentencias. No se habla de la independencia del magistrado a la hora de fallar. Se discute que se quiere corregir lo que no es así.

Se quiere corregir el hecho de que, ante un conflicto, el señor magistrado viaja con los gastos pagos a Miami durante quince días para fallar en una cuestión donde el *lobby* en cuestión corre con los gastos. La mujer del César no sólo debe ser honesta, debe parecerlo.

Estas son las cuestiones que se comienzan a zanjar. La declaración de bienes, declaraciones juradas, poder saber, el acceso a la Justicia de parte del personal sobre la base de mecanismos transparentes y no, simplemente, como una extensión de una escribanía o estudio jurídico propio.

Vean ustedes el origen del conflicto formal del Concurso N° 258; un magistrado que creía que era un feudo.

Se trata de dinamizar a la Justicia. ¿Es posible que un magistrado federal tenga que, a su vez, administrar su juzgado? ¿Pensar cuánto papel necesita? Es decir, hay una serie de cuestiones que deben ser analizadas. Sin embargo, este debate, necesario e imperioso, en la medida en que conmueve y conflictúa poderosos intereses, ha sido severamente condicionado precisamente por esos intereses.

Para cerrar, se trata de estas cuestiones. La democracia presupone la alternancia. La democracia, en la medida en que se generan propuestas alternativas superadoras, genera dialécticamente una mejora no solamente en los contenidos de la propia política sino, fundamentalmente, en aquellos sujetos encargados de llevarla adelante.

En la medida en que los sectores de oposición no edifiquen agenda autónoma que sean funcionales a esos grupos y corporaciones, no solamente se irá en detrimento de la propia organización política que lo hace sino del conjunto.

Nuestro sistema establece que son piedra angular los partidos políticos. La soberanía popular se expresa a través de los partidos políticos.

La reforma introduce el hecho de que los consejeros deben ser electos en el marco de las elecciones generales a presidente y vicepresidente de la Nación y, por una única vez, en esta elección intermedia. Ese vehículo de los partidos políticos no es un capricho. Es el único mecanismo que nuestro sistema legal establece para la expresión del voto popular. De ahí que resulta imprescindible.

En cuanto a observaciones que legítimamente han hecho los señores senadores, debo decir que la participación de la mujer en el marco del cupo está garantizada por el régimen armonioso de la Ley Electoral Nacional y del Código Electoral.

La técnica legislativa recomienda no cargar el texto con cuestiones contempladas por el resto del conjunto del marco general. El plexo normativo se interrelaciona con las garantías necesarias existentes.

Para ratificar estas garantías, para acogernos al espíritu de nuestra Constitución y, fundamentalmente, para ser coherentes con el mandato de la expresión del voto, como la expresión acabada de la soberanía popular, es que nuestro bloque va a acompañar las reformas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. – Hay una lista de oradores que se daría por cerrada...

Sr. Pichetto. – ¿Hay alguien más para anotarse?

Sr. Presidente. – Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada). – La lista estaba encabezada, obviamente, por el señor senador Fuentes, que acaba de hablar, y siguen los senadores Sanz, Negre de Alonso, Juez, Monllau, López, Borello, Pérez Alsina, Artaza, Romero, Vera, Morandini, Escudero, Naidenoff, Basualdo, Estenssoro, Di Perna, Cabanchik, Cimadevilla, Linares, Morales, Fernández y cierran los señores senadores Giustiniani, Rodríguez Saá, Cano y Pichetto.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se va a dar por cerrada la lista de oradores.

–Asentimiento

Sr. Presidente. – Esta es la lista de oradores.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: le quiero solicitar que se autoricen las respectivas inserciones para todos los señores senadores que deseen hacerlo.

Sr. Presidente. – Se van a autorizar al final.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: la estructura del discurso del señor senador preopinante, que desde luego es un senador cuya formación intelectual respeto así como su pertenencia de origen al modelo de poder que gobierna la Argentina, motivo por el cual siempre escucho con especial interés sus alocuciones, no ha traído nada nuevo en términos de estructura y, con todo respeto, me animo a decir que podría haber sido una estructura que desde la convocatoria que hace podría haber sido de utilidad en otras épocas.

Decir que desde el oficialismo se asumía la representación del progresismo para avanzar sobre los sectores conservadores, monopólicos y oligárquicos, es decir, los malos, era una convocatoria que quizá todos podíamos llegar a acompañar. Y también se podría haber dicho en aquellas épocas que si la oposición no acompañaba –hablo de hace varios años–, como se ha escuchado hoy, que era una oposición obnubilada que terminaba siendo condicionada por los oscuros intereses de los malos.

Pero sucede que han pasado varios años en este país y escuchar hoy estas cosas suena como que desde el oficialismo se pretende convencer con la boca mientras que, en la práctica, con las manos hacen cosas totalmente diferentes. Y a esta altura del partido, después de tantos años, tantas batallas, entre comillas, parlamentarias y políticas, no estamos en condiciones ni con ganas ni ánimo de aceptar ningún convite desde la convocatoria de la boca. Es que estamos hartos, como la sociedad argentina, hastiados, de que estén triunfando en la Argentina no los que hacen discursos con la boca sobre el progresismo sino los que con las manos se refugian en el más puro y duro conservadurismo.

La sociedad está hastiada de eso, al igual que nosotros. Y como estamos hastiados de eso, no vamos a aceptar el convite del oficialismo en la boca del senador preopinante y

vamos a rechazar, oponernos, enfrentar y debatir todos los proyectos que han ingresado por el Senado y hoy comienzan a discutirse.

Es más. Hasta dejo una reflexión. En algún momento, en los años que vienen, habremos de reivindicar a los que, legítimamente, con la boca y con la cabeza han pretendido defender en estos años una transformación en la Argentina. Pero, lamentablemente, van a perder una batalla contra los que no les importa ni lo de la cabeza ni lo de la boca; les importan las manos, lo que se hace con ellas.

No voy a hablar de los proyectos en particular. Hay muchos senadores de mi bloque y de otros bloques de la oposición que, seguramente, van a desmenuzar con mucha inteligencia y precisión cada una de las iniciativas. Es más. Pretendo hacer una suerte de introducción de lo que piensa nuestro bloque sobre todo el proceso de la reforma del Poder Judicial.

Lo primero que quiero decir es que este debate se enmarca dentro de una época de profundos retrocesos. Retrocesos a los que no escapan los proyectos que se discuten hoy, más allá de que se los pretenda vestir bajo el ropaje de avances, modernizaciones, democratizaciones y de cualquier otra palabra que pueda servir para el *marketing* de la presentación y que pueda llegar a confundir a cualquier ciudadano no demasiado entendido o comprometido en entender de qué se habla. A nosotros ninguno de esos títulos nos va a hacer modificar nuestra postura.

Hoy le toca a la Justicia en el marco de estos retrocesos. Pero, en verdad, hace rato que discutimos, quizá desde hace tres, cuatro o cinco años –algunos lo ubican desde 2006, otros desde el conflicto del campo y otros un poco más–, sobre retrocesos.

Fíjense que algunos retrocesos son de épocas pasadas; retrocesos de conquistas de muchos años previos; de conquistas de procesos democráticos, jamás de supuestos avances, que nunca fueron tales, de gobiernos no democráticos. Decía conquistas de las democracias en la Argentina. Otra vez estamos hablando de retrocesos –fíjese qué paradoja– en el marco de diez años, la década como le gusta analizar al oficialismo, de avances logrados por este mismo gobierno y modelo, sobre todo, en sus primeros años. Si no, veamos algunos de los rubros. Por ejemplo, en materia económica. Se retrocede hoy en avances que hubo en lo que hace al superávit fiscal. Y, por haber perdido el superávit fiscal, hoy estamos hablando de lo que hablamos en materia de economía, porque hace rato que el gobierno se refugia en cajas artificiales. Cuando perdió el superávit, se empezó a refugiar en la ANSES; cuando ya no pudo más, se refugió en el Banco de la Nación, en la Reserva del Banco Central, y cuando no pudo más, empezó a refugiarse en la maquinita de hacer billetes; inclusive, ni siquiera le alcanzó la maquinita oficial de la Casa de la Moneda, sino que tuvo que ir a estatizar una empresa privada como Ciccone. Y así estamos, con un superávit que se fue haciendo tiempo.

Lo mismo ocurre con el superávit de la balanza comercial. Resulta que ahora se muestra como que hay un superávit cuando, en realidad, todos sabemos que con fórceps están forzando esos números a partir de distintos cepos: a las importaciones y a lo que es el funcionamiento normal de la economía.

Hay un retroceso en el tipo de cambio competitivo que supo poner de pie a la industria y que, más allá de las razones artificiales de lo que supone salir de una devaluación o no, en algún momento constituyó una herramienta de competitividad de la economía; hoy ya no lo es más.

Hay economías regionales que están clamando para que alguien se haga cargo de lo que es hoy un problema que pone en riesgo sus propias subsistencias. Esto sucede en las economías regionales de todo el interior del país.

También se produjo un retroceso en términos de generación de empleo. Porque, aunque el gobierno pretende mostrar algunas cuestiones aisladas, en algún punto se está perdiendo empleo genuino en la Argentina. Estos datos corresponden a índices oficiales del INDEC.

Hay un retroceso en términos de confianza y de seguridad, lo que genera una fuga de divisas. En los últimos tiempos, ochenta mil y pico de millones de dólares se han fugado

Hay caída de inversiones y retrocesos en toda la economía. Hay retrocesos en materia de energía: de haber tenido autoabastecimiento hasta 2010 –es decir, incluyo los primeros años de este modelo–, hoy estamos importando combustible y gas, las dos cosas que tenemos debajo de nuestro territorio. Porque no es que no los tengamos, los tenemos. Pero, no obstante, estamos importando por 15 mil millones de dólares. Si alguien quiere saber qué es lo que está pasando en la economía, que empiece a buscar por allí las razones de todo lo que está impactando en ella, los cepos y demás.

Hay retrocesos en materia de educación donde, a pesar del enorme esfuerzo institucional como política de Estado y de haber puesto mucha plata, no se logra revertir la pérdida en los índices de evaluación de calidad. Esto es así más allá del índice que tomemos e, incluso, más allá del debate que existe sobre esos índices. Lo cierto es que en la Argentina, la educación ha perdido calidad. En muchos de esos casos, se retrocede desde lugares o posiciones que había logrado este mismo gobierno.

Ahora bien, hay algunas otras áreas de la vida pública de la Argentina que a veces merecerían debates mucho más profundos y no solamente tocarlas así, como al pasar. En algunos de esos casos, ni siquiera podemos hablar de retrocesos estableciendo una comparación con algún momento de este gobierno sino que en ellos se producen directamente declives, una permanente caída.

No podemos hacer comparaciones pensando que en algún momento se registró algún avance. Estoy hablando de la inseguridad y del combate contra el narcotráfico y la droga. Allí uno no advierte que en el pasado haya habido avances. Por el contrario, la Argentina es un país que en estos temas viene en declive, en una caída peligrosa que nos acerca al abismo. Me estoy refiriendo al narcotráfico, a la droga, a la inseguridad y a la violencia.

En todos esos casos, el problema es esencialmente de gestión. En cualquier momento, con cualquier gobierno, el problema es de gestión. Uno podría decir que hablando de gestión, en algunos de esos temas, el problema es por ausencia de gestión. En el ámbito económico, hoy, la Argentina es pendular: después de haber pasado por tener superministros de Economía, hoy no tiene ninguno o, mejor dicho, tiene varios. Y así funciona la economía actualmente; o sea que se registra una ausencia de gestión.

En otros casos, como en el energético –al que me acabo de referir–, el problema es por defecto de gestión. ¿Cómo es posible que los responsables de haber perdido el autoabastecimiento, de haber perdido la oportunidad histórica de haber intervenido en la matriz energética en los años de bonanza, cuando sobraba la plata, hoy sean los mismos que manejan las estructuras de la energía desde el Estado y que no hayan podido, ni hayan sabido, ni hayan querido explicar a la gente por qué pasamos del autoabastecimiento a 15

mil millones de dólares de importación en materia de combustibles, lo que a esta altura ya deberían haber explicado?

Pues bien, si estos retrocesos en las áreas de gestión representan dramas, el drama es peor cuando el retroceso se produce en el ámbito institucional, es decir, en el diseño de nuestras instituciones. Porque en esto no tiene que ver la mayor o menor capacidad de gestión. Ni siquiera tiene que ver quiénes están a cargo de la gestión, si son mejores o peores. De lo que estamos hablando aquí –y el debate de hoy corta transversalmente esta discusión– es de cosas permanentes, de cosas no coyunturales, de cosas que exceden a los gobiernos de turno. La existencia de los tres poderes del Estado, el principio de la división de poderes y la relación de esos poderes entre sí es una cosa permanente, no coyuntural.

Desde luego que uno puede analizar esto en la historia, como lo ha hecho el miembro informante. Cada uno de nosotros tiene derecho a analizar cuál ha sido la historia que ha acompañando ese proceso. Pero el principio de división de poderes, la existencia de tres poderes –que es el pilar de una República democrática– no está ni debe estar a tiro de cualquier coyuntura.

Por eso, cuando se pretende reformar la esencia, es algo que se hace a través de una reforma constitucional. Ese es el camino. Reformar la Constitución es reformar la esencia y eso no tiene que ver con cuestiones coyunturales. Eso hicimos en 1994. La última reforma, la última convocatoria, lo que pedía recién el miembro informante, fue una respuesta madura, racional y comprometida de la política.

A veces, cuando escucho hablar desde el oficialismo de las convocatorias a la política, pienso que tienen una visión tan sesgada que creen que la política solamente es el espacio del oficialismo. El 94 dejó una enseñanza más allá de las intenciones de algunos protagonistas. El tema no fue si se trataba solamente de procesos electorales, de reelecciones o si, en definitiva, había otras intenciones: el resultado final fueron 300 y pico de convencionales votando por unanimidad –entre ellos, la actual presidenta de la Nación, el anterior presidente de la Nación y algunos senadores que hoy están sentados en estas bancas–, obteniendo así un logro de la política.

En la reforma constitucional de 1994, se tocaron estructuras y se discutió sobre esencias. En esa época, en aquel momento, se había advertido que uno de los tres poderes del Estado –el Poder Ejecutivo– había caído peligrosamente en un defecto que rompía el equilibrio con los otros dos. Si esa reforma tuvo una característica fue, precisamente, la de dotar al sistema institucional de un esquema de atenuación del presidencialismo, fortaleciendo al Poder Legislativo en su esquema de equilibrios y asegurando la independencia del tercer poder –el Poder Judicial– con herramientas y mecanismos modernos.

Seguramente, algunos dirán que fueron traídos de esquemas parlamentarios europeos y que, en algunos casos, pueden haberse quedado a mitad de camino y, en otros, pueden no haber resuelto las situaciones para los que fueron planteados. Por ahí, uno de esos ejemplos puede ser la Jefatura de Gabinete. Pero lo cierto es que también existía la definición de incorporar los decretos de necesidad y urgencia con carácter excepcional para establecer un límite; ello, a fin de que el Poder Ejecutivo no se atribuyera facultades del Poder Legislativo ni actuara como legislador.

Además, existía una cláusula en el artículo 76, que establecía la prohibición de las facultades delegadas. Así se prohibió la delegación de facultades por parte del Congreso y

se determinó la creación de la Auditoría General de la Nación, con un fuerte componente de la oposición para controlar.

El Consejo de la Magistratura incorporaba nada más ni nada menos que un nuevo concepto en la selección y en la destitución de jueces. Antes, estaba totalmente diseñado para el manejo de la política, que era la que elegía los jueces directamente a través del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Senado los convalidaba. Se intentó traer un esquema donde, además de la participación de la política, hubiera un componente técnico específico de procedimientos diferentes.

Sr. Pichetto. – ¿Me permite, senador?

Sr. Sanz. – Le daré una interrupción al final, senador, así no pierdo el hilo. Lo digo con todo respeto. Sabe que siempre le doy interrupciones.

Ahora, ¿qué pasó en todos estos años? Porque no es que estemos hablando ahora de estas cuestiones. No es que ahora se nos haya ocurrido hablar de la reforma del 94.

Recién se me quedó en el tintero el tema del federalismo de concertación. Me refiero a la ley de coparticipación y a todos los principios federales.

Hoy se habla de que con esta legislación se pretende reformar la Constitución. Quiero notificar a todos los que dicen eso que es algo que ya se hizo en estos veinte años, desde el 94 hasta hoy. El año que viene, vamos a cumplir veinte años. Ya hicieron la contrarreforma en los últimos años. No sé si alguien no se dio cuenta; nosotros, sí. Si no, revisen las versiones taquigráficas de cada uno de esos debates.

Se reformó cuando los decretos de necesidad y urgencia dejaron de ser excepcionales y se transformaron en habituales; cuando la prohibición de delegación de facultades se transformó en los superpoderes; cuando la Auditoría General de la Nación dejó de ser un organismo de control, donde tenía peso la oposición para que hoy, de siete miembros, cuatro oficialistas traben absolutamente todas las investigaciones que se hacen contra el Estado. Solamente por la valentía de los otros miembros –el presidente y dos más, todos de mi partido–, los hechos se dan a publicidad y algunos de ellos avanzan. Puedo mencionar el caso de los trenes: ante 51 muertos, los jueces determinaron que lo que había dicho la Auditoría acerca de que existía una asociación ilícita de tres patas era verdad. Pero claro, en el medio hubo 51 muertes.

El Consejo de la Magistratura, como dije, arrancó en el 94 siendo un organismo técnico independiente, con participación de la política y de los demás estamentos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Ni siquiera puedo hablar de una contrarreforma que esté consolidada. Hicieron la contrarreforma en 2005 modificando la composición de los miembros para hacerle perder el equilibrio y ahora van por otra más, pero todas ellas contrarias al espíritu de la Constitución y a lo que dice el artículo 114. Ya se va a hablar de esto hoy todo el día, por supuesto. ¿Dónde quedó el federalismo de concertación del 94? Es un federalismo de sometimiento, de humillación, de cooptación. Ese es el federalismo que rige hoy. Miren si no es una contrarreforma constitucional.

Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿fue positivo eso? ¿Sirvió a la sociedad? ¿Podemos decir que todas estas cosas sirvieron a la sociedad? ¿Cuál ha sido el concepto sobre el que ha sido pivotado este modelo? Recuperar poder para el Estado. Lo he escuchado en el discurso de recién y en cada uno de los demás. Se transforma en una suerte de mantra del oficialismo: recuperar poder para el Estado. En realidad, el verdadero concepto –esta es la discusión de fondo en la Argentina– es que lo que han recuperado,

construido y acumulado no es poder para el Estado sino para el gobierno, que es otra cosa. El verdadero debate en la Argentina –cuando pase el tiempo y se pueda hacer una visión retrospectiva de estos años se verá– va a ser esa cuestión: la diferencia entre Estado y gobierno; cuánto se ha hecho en favor del Estado y cuánto a favor del gobierno en la Argentina.

Esa confusión es la que hoy está generando estas divisiones en este debate. Pero, dado que las confusiones son como las mentiras –no duran por siempre–, de a poco se va descubriendo qué hay detrás de toda esa fachada del *marketing* y e la propaganda. Por eso insisto en que no vamos a aceptar el convite del miembro informante y no nos vamos a colocar el sayo de una oposición obnubilada que defiende oscuros intereses, no. Defendimos toda la vida lo mismo.

Cuando hablé recién de los proyectos y sugerí que fueran a ver las versiones taquigráficas es porque en esos años, cuando nosotros defendíamos estas cosas, ustedes eran socios de los malos y, desde el poder, contribuyeron a acrecentar el poder de los malos. Mientras nosotros estábamos acá, defendiendo las mismas cosas que estamos defendiendo ahora. ¡Así que el sayo de que nosotros defendemos a los malos pónganselo a otros y no a nosotros! Defendemos las mismas cosas que defendíamos hace cinco, seis o siete años; y las seguimos defendiendo hoy.

Entonces, ¿qué es lo que hay en esta confusión de gobierno y Estado? Cuando la fachada y el telón empiezan a descubrirse, aparece un gobierno gordo, poderoso, empachado de poder y, enfrente, un Estado débil, flaco y vulnerable frente a las demandas y los reclamos sociales. Si no veamos los ejemplos.

El gobierno es el INDEC; el Estado es la economía que pierde productividad, empleo y la moneda, que se desprecia. El gobierno es la caja multimillonaria del Ministerio de Planificación; el Estado son los argentinos que se mueren en los trenes y en las inundaciones. El gobierno es el que vimos por televisión por estas horas, donde los billetes no se cuentan sino que se pesan y se los saca del país rumbo a paraísos fiscales; en cambio, el Estado son los argentinos indignados víctimas del cepo cambiario, de la presión fiscal exorbitante y de las extorsiones permanentes desde organismos del Estado. El gobierno –es el último ejemplo que doy– es el aparato de medios de comunicación más grande, más caro y abusivo que se recuerda en la historia; el Estado es Juan Miceli, el conductor del noticiero del canal público, crucificado por preguntar más de la cuenta.

Ese es el debate hoy en la Argentina y, en este contexto, ustedes pretenden que les creamos que quieren mejorar la Justicia, hacerla más eficiente, más rápida y más accesible a los sectores desprotegidos. ¡Ojalá tuvieran ese sano propósito y no hubiera diferencias entre la boca y las manos! Pero ya estamos curados de espanto y quemados en todos estos años. Por eso, no creemos un milímetro que detrás esté el propósito de mejorar la Justicia, de hacerla más rápida y eficiente.

Digo “ojalá” porque la Justicia necesita reformas. ¿Quién puede estar hoy en la Argentina conforme con el servicio y la estructura de la Justicia? Nosotros mismos –los invito nuevamente a que lean las versiones taquigráficas de los debates de los últimos seis o siete años– hemos sido acá los principales críticos respecto de una Justicia que no cumple el mínimo estándar que reclama la ciudadanía sobre estos conceptos de rapidez, eficiencia, ligereza, etcétera. La Justicia es lenta y burocrática; no es popular sino elitista. Los

humildes tienen dificultades para acceder a ella. Nadie con buena fe y sentido común podría negar la necesidad de reformarla.

Hoy podríamos estar discutiendo –si realmente esa fuera la intención del oficialismo– cómo bajar los costos de los litigios; cómo favorecer las legitimaciones colectivas, que hoy son una herramienta de acceso a la Justicia ya no individual sino de colectividades que están en dificultades frente a un mismo problema; cómo eliminar formalismos, rituales exasperantes, casi monárquicos; cómo meter mano a los procedimientos.

Me hace gracia cuando hablan de los códigos de fondo porque en este país tenemos colgado, escondido en algún cajón desde 2007, un Código de Procedimiento Penal que haría a la Justicia Penal mucho más rápida, más eficiente y más accesible. La convocatoria para ello surgió del ex presidente Néstor Kirchner y tuvo entre los miembros de la Comisión Redactora al senador Pichetto, a mí, a diputados y a destacados juristas que trabajamos durante un año y medio para que esté por ahí, adentro de algún cajón.

Ayer escucharon todos ustedes a la Asociación de Abogados Laboralistas. ¡Ojo! No los laboralistas que defienden a las empresas en los juicios laborales sino los que defienden a los obreros, a los trabajadores; los que tratan que esos obreros y trabajadores tengan un legítimo acceso a la Justicia y una respuesta por parte de ella. Fueron más críticos que Verbitsky y que muchos de los críticos de la oposición. Ahí está el papel de tres hojas que dejaron. Los invito a que lean lo que dijeron los abogados laboralistas en general y de las cautelares en particular.

Hoy podríamos estar debatiendo, si es que realmente hubiera una intención de mejorar la Justicia, por qué a la justicia penal de la Argentina le cuesta tanto investigar y avanzar en los casos de corrupción que involucran al poder. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué las pruebas de la corrupción las consiguen los periodistas y no los fiscales? ¿Qué clase de país es este, donde las pruebas de los actos de corrupción las ponen en conocimiento de la sociedad los periodistas y no los fiscales? ¡Algún fiscal que conteste esto, por el amor de Dios!

¿Por qué hay funcionarios plagados de denuncias de corrupción sin resolución que se ríen en la cara de los ciudadanos? ¿Por qué la UIF –la Unidad de Información Financiera–, que tendría que estar vigilando los casos de lavado, de blanqueo de dinero, no da cuenta de su accionar? ¿A quién investigó en todos estos años el señor Sbatella? ¿A quién persiguió la UIF? ¿A quién denunció? Estas son las preguntas que nos haríamos si se quisiera mejorar la Justicia.

Entonces, no es cierto que con estas leyes vaya a haber impunidad. No soy de los que se anota dentro de aquellos que no conocen la situación y dicen que con estas leyes va a haber impunidad. No; la impunidad ya existe hoy en la Argentina. Lo que van a hacer estas leyes es consagrarla; y esto es lo que se quiere. Ninguno de los tres proyectos que están en debate apuntan en la dirección de mejorar, de hacer más rápida, más eficiente o de democratizar, si ese es el término elegido.

La ley de Consejo, que es la que nos ocupa –muy rápido; no me voy a meter en el texto– engorda al gobierno en desmedro del Estado. Engorda al gobierno en desmedro del Estado: a éste y a cualquier gobierno. El problema es que éste la quiere aprovechar rápidamente. La conjunción de la nueva composición de miembros, la forma de elección y

el cambio de mayoría de dos tercios a mitad más uno solo se dirige a establecer en la Argentina un nuevo paradigma.

La verdad es que me gustaría que en esas bancas estuviera sentada, como lo estuvo hace un tiempo, la hoy diputada y entonces senadora Diana Conti porque sinceraba y sincera el debate. Me gustaría escuchar acá lo que yo le escuché decir a ella: qué es este cambio de paradigmas. El cambio de paradigmas en la Argentina es que a partir de estas leyes, el que gana una elección se lleva todo y tiene derecho a gobernar los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En términos de sinceridad, la felicito porque a partir de ahí nos hace más fácil el debate; también, a la gente que nos está viendo, escuchando o que puede, después, leer nuestros comentarios.

El Poder Ejecutivo siempre fue el espacio del que gana; está claro y eso no está en discusión. Por supuesto, no absolutista; no creyéndose que es dueño de todo. Para esto están los organismos de control, para eso funcionan los organismos de control.

El Poder Legislativo siempre fue para nosotros el ámbito del equilibrio; de las minorías; del debate parlamentario escuchando las diferencias, las divergencias y, por supuesto, al final resolviendo con mayorías y minorías emergentes de la voluntad popular.

Por su parte, el Poder Judicial siempre fue contramayoritario. Ahora, no contramayoritario con la mirada histórica que el miembro informante le ha dado, que yo comparto respecto de los orígenes y comparto no solamente en cuanto a esto sino también en cuanto a la conformación de sectores sociales que, obviamente, han utilizado la Justicia en muchas épocas de la vida de la Argentina para defender sus privilegios y sus intereses y no los de la comunidad. Pero eso no nos puede hacer perder de vista, más allá de los momentos históricos, que el Poder Judicial es contramayoritario. Significa que no está a tiro de las mayorías circunstanciales porque lo que tiene que hacer es controlar esas mayorías. Pero ahora, con el nuevo paradigma, el que gana se lleva todo y también se lleva la selección y la destitución de los jueces, con lo que significa eso en la presión de los jueces. Va a dominar y direccionar la Justicia para donde quiera.

Cuando uno habla de esto de la selección y la destitución de los jueces, lo cierto es que algún día tendremos que sincerar los debates en el sentido de que esto no pasa por oficinas en el Consejo de la Magistratura, hay operadores judiciales que presionan a los jueces. Se habla de estudios jurídicos que defienden los intereses de los poderosos. ¡Claro que los hay! Acá, en la Capital Federal, vaya si los hay. Últimamente, están apareciendo algunos otros estudios jurídicos nuevos.

Ayer, tenía ganas de parar al secretario de Justicia para ver si él compartía la idea: los estudios jurídicos de chicos jóvenes que de golpe, de rompe y raja, empiezan a manejar los poderes de todas las empresas del Estado. Al lado de los estudios jurídicos tradicionales –esos de doble apellido, presidente– que uno conoce, ahora están apareciendo otros estudios jurídicos. ¡Mire qué casualidad! Y también, hay estudios jurídicos que tienen que ver con la Justicia penal –¡claro que sí, que tiene que ver!– y que no están en el Consejo de la Magistratura, ni en un despacho acá en el Congreso, ni presentan declaraciones juradas, ni están a tiro de cualquier periodista, ni tienen que rendir cuentas ante sus votantes, pero que manejan por debajo ese proceso –que no está escrito en ningún lado– del humor de la Justicia, de las decisiones de la Justicia. ¡Hablemos de eso también! Porque, ¿saben qué? En los últimos años, esos *bunkers* no tienen nada que ver con los opositores. Esos *bunkers* son todos oficialistas; esos operadores son todos oficialistas.

Sr. Pichetto. – Hay también radicales.

Sr. Sanz. – Pero al servicio...

Sr. Rodríguez Saá. - ¡El peronismo federal no tiene ninguno!

Sr. Presidente. – Senador Sanz: continúe en el uso de la palabra.

Sr. Sanz. – Me la dejó picando, senador.

Mire, le voy a contar una anécdota personal. Lamento que no estén aquí presentes la senadora Riofrío y el senador Irrazábal, porque ellos fueron protagonistas. Yo fui consejero en el Consejo de la Magistratura y, como se dice en la jerga, me “cargué” un juez federal corrupto. Lo digo así, en estos términos, no por vanidoso sino porque lo hicimos con la ayuda de muy poca gente y con la barrera del oficialismo que no quería, que lo quería proteger. Porque además, era un juez que tenía vinculación con los servicios de inteligencia y, además de todo esto, con un estudio jurídico que sí tiene razón él, de origen radical, ex funcionario radical pero que también lo protegía. O sea, ahí había una sociedad entre el oficialismo y ese estudio jurídico. Pero así y todo, le pudimos meter hacia adelante, a pesar de las operaciones de los servicios de inteligencia que me calumniaron e injuriaron no solo a mí sino también a los otros miembros.

Nos hicieron mil operaciones con algunos medios de comunicación de los que reciben millones de pesos del oficialismo. Seguimos adelante y ¿saben cómo logramos los resultados? La senadora Riofrío y el senador Irrazábal estaban sentados en ese jurado, como el senador Marino aquí. Logramos destituirlo siete a cero porque descubrimos que, entre las cosas que hacía ese señor, estaba quedarse con la cosecha de soja de un campo acá nomás, en la provincia de Buenos Aires, que era de la Dirección del Menor y la Familia. Tendría que haber ido a cubrir el alimento de los chicos y él se quedaba con esa plata, así que imagínense ustedes. Pero recién me la dejó picando el senador Pichetto.

Para terminar, vuelvo a la Justicia contramayoritaria; también, a la confusión entre Estado y gobierno; entre legitimación democrática con legitimación electoral. Tengo muy en claro que la legitimación democrática, aunque no provenga de una elección popular, la dan precisamente las instituciones que han sido votadas, creadas, articuladas por la democracia, por los organismos de la democracia y por los representantes del pueblo elegidos en una convención constituyente, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados.

¡Ojo con esta confusión de legitimación democrática con legitimación electoral! Porque si ustedes quieren desde el oficialismo discutir sobre legitimación electoral, en vez de llenarse la boca con la legitimación electoral del Consejo de la Magistratura, díganme por qué pasan por arriba de la legitimación electoral de los gobernadores y de los intendentes que no son del palo, que tienen tanta legitimación electoral como el gobierno nacional, o como cualquier gobernador, o intendente oficialista. ¿Cómo es la vara para medir la legitimación electoral en la Argentina? Resulta que quien se somete a las urnas, gana y es del palo tiene legitimación y, por lo tanto, le damos todo. Ahora, el que gana una elección en una provincia o en un municipio pero no es del palo, a ese no, ese un paria. ¿Cuál es el criterio? ¡Díganmelo! O díganse a la gente. ¿Cuál es el criterio de la legitimación electoral que tanto declaman?

En mi provincia, Mendoza, lo denuncié públicamente, hay cuatro intendentes radicales que están marginados absolutamente de la obra pública, de las ayudas y de todo. ¿Por qué? Porque son radicales. Podría poner ejemplos a patadas. Estoy seguro de que aquí hay senadores que podrían decir muchas más cosas. Yo solo denuncié lo que ocurre en mi

provincia de Mendoza. ¿Y qué? ¿No tienen legitimación electoral esos intendentes? ¿No ganaron las elecciones acaso?

No se puede seguir mintiendo en nombre de los ideales que nos emocionan. Claro que nos emocionan la democratización, la reformulación de la Justicia, el progresismo, el desarrollo, la modernización y la transparencia. Todas estas cosas nos emocionan. Pero la verdad, vuelvo al punto inicial: dichas con la boca, a esta altura del partido, ya ni nos emocionan, ni nos conmueven, ni tampoco nos convocan. ¡Nos indignan! Y por eso vamos a votar en contra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: escuché con mucha atención al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, miembro informante, y la verdad es que si este discurso lo hubiéramos escuchado la semana pasada, creo que se habría desnudado cuál es la verdad y a lo que apuntan los proyectos que estamos tratando; en especial, el referido al Consejo de la Magistratura.

Ha dicho cosas que no dice ni siquiera el mensaje de elevación de la presidenta de la Nación. Ha sido muy claro en lo que ha dicho. Por eso, me animo a afirmar lo que creía que era una conclusión pero considero una premisa: es una gran oportunidad perdida la del oficialismo hoy.

– *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos Marino.*

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: hace varios años estoy escuchando que toda la culpa la tienen las corporaciones. Allá por el 2003, el 2004 y el 2005 escuchábamos que eran las corporaciones de los bancos. Escuchábamos que era la corporación del Fondo Monetario Internacional, aunque a propuesta del oficialismo, aquí se votó una capitalización para seguir perteneciendo a la entidad.

Escuchamos también que la valija de Antonini Wilson también era culpa de las corporaciones. Escuchamos que el tema de la ley de medios era para luchar en contra de las corporaciones. Escuchamos que había corporaciones de empresarios. Escuchamos hablar de la corporación de la soja; también, de las corporaciones económicas. Hace poco, escuchamos que eran las corporaciones de las agencias de turismo las que provocaban la fuga del dólar y, entonces, iba la AFIP sobre esas agencias. Escuchamos que eran las corporaciones de los que más tienen, que viajaban al exterior y hacían subir el dólar en perjuicio del resto. La verdad que les faltó decir que fueron culpa de una corporación las inundaciones. No sé a quien le van a echar la culpa, aparte de que hay un presupuesto del 89 por ciento....

– *Desde las galerías del recinto, cae un cartel sobre las bancas.*

Sra. Negre de Alonso. – ¿Qué pasó?

Sr. Presidente (Marino). – A ver, personal de seguridad, por favor: pido si se puede retirar esa bandera.

Ya está interviniendo el personal de seguridad. Adelante, señora senadora, continúe...

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: usted sabe bien que hemos cuidado siempre este espacio para permitir el ejercicio de la libertad de cada senador de exponer. Nunca ha ocurrido esto...

Sr. Presidente (Marino). – Señor senador Pichetto: para su tranquilidad, esta Presidencia le informa que la persona encargada de la seguridad, el señor Daniele, ya se está ocupando del tema. No es responsabilidad nuestra: quédese tranquilo.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece que el espacio del recinto hay que cuidarlo. Entonces, habría que avisar a la Policía Federal que ponga seguridad.

Sr. Presidente (Marino). – Eso vamos a hacer. Al señor que se ocupa de la seguridad no lo nombré yo, señor senador.

Sr. Pichetto. – No le estoy haciendo un reproche. Usted está circunstancialmente ocupando la Presidencia...

Sr. Presidente (Marino). – Le agradezco...

Sr. Pichetto. – Lo que estoy diciendo es que es una garantía para el conjunto de los senadores. La verdad es que no me interesa qué decía el cartel. Lo que ocurre es que no puede haber carteles aquí...

Sr. Presidente (Marino). – Señor senador: quédese tranquilo, que ya el señor Daniele se está ocupando.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señor presidente.

Solo faltaba que dijeran que las inundaciones fueron culpa de la corporación, cuando en el presupuesto nacional los gastos corrientes son el 89 por ciento, mientras que solo un 11 por ciento corresponde a inversión. Y ahora creo que nos queda, nada más, luchar contra las corporaciones de los molinos de viento. Porque la verdad, ya no sé dónde se pueden seguir inventando corporaciones para esta lucha épica.

Señor presidente: nosotros no fuimos los que dijimos que estábamos en contra cuando la presidenta anunció este tema de la democratización. Por el contrario, dijimos “vamos a ver qué es”. Siempre hemos estado a favor de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. En nuestro caso, con respecto a una de las leyes que hay en la Cámara de Diputados, los empleados van por concurso. Así que no nos sentimos involucrados en esas palabras.

Pero quiero decir que, en realidad, el miembro preopinante se ha tomado el trabajo de controlar estadísticamente cuántos abogados votan y por qué, cuántos empadronados, etcétera. Mire, yo le recuerdo que el presidente Kirchner ingresó con el 22 por ciento de los votos. Así que no es argumento alguno la cantidad de empadronados o la cantidad que vota. No es argumento para fundamentar este tema.

Luego, habló el miembro informante de un déficit de la soberanía del Poder Judicial. ¿De qué soberanía me están hablando? Se habló de los sectores conservadores. Ayer, casualmente, estaba una jueza acá y dijo: “Mis padres, los dos, eran obreros. Trabajaba en una fábrica”. Nombró otro juez muy importante, el doctor Rivera, que hoy ya no está en el Poder Judicial. Su papá era policía. Así que no sé de qué sectores estamos hablando.

Tampoco me siento involucrada ni apoyada en la pirámide jurídica de Kelsen. Al contrario, es el oficialismo el que muchas veces fundamenta sus posiciones en la teoría kelseniana. Nos encontramos muy lejos de la teoría kelseniana: *lex dura lex*. ¡Muy lejos!

Señor presidente: me parece que lo que estamos haciendo es legislar para la patología. Que existen hechos de corrupción, existen; que existe morosidad judicial, existe. Ahora, el senador mencionó que era un Consejo corporativo, funcional a los intereses económicos y a las corporaciones; que había errores en los concursos. Hizo mención a un concurso, lo describió. Y bueno, señor presidente: no podemos legislar para la patología. Debemos ir con las herramientas que corrijan la patología.

Pero en realidad, al hablar de la soberanía del Poder Judicial, hay algo que ha quedado al desnudo. La verdad es que lo ha dicho tan claramente el senador Fuentes que ha quedado al desnudo que el meollo o el núcleo duro de esto es cambiar el sistema institucional argentino. Si lo hubieran dicho desde el principio, otro hubiera sido el debate. Lo que todos presentábamos lo acaba de decir el senador. Como siempre digo: cuando se tratan temas que se van a debatir en las comisiones en el Senado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en la Cámara de Diputados, yo sigo atentamente las declaraciones del senador Fuentes y de la diputada Conti porque son las dos versiones oficiales de los que van a llevar adelante el debate y los que van a presidir esa comisión tan importante. Así que, en verdad, a mí me ha quedado claro. Vamos a cambiar el sistema institucional de la República Argentina.

Ahora, yo me pregunto lo siguiente: el sistema republicano, representativo y federal viene de la Constitución del 53. En el 94 reformamos la Constitución y todavía no podemos terminar de poner en marcha esa reforma constitucional. Tenemos deudas pendientes, como la ley de coparticipación federal. Recientemente, el pueblo de la República Argentina concurre a las urnas y ratificó el artículo 1° de la Constitución. No se modificó el artículo 1°. La triada –que aunque parezca antigua– de la teoría de Montesquieu fue ratificada por el pueblo argentino. ¡Ahí está la base de la soberanía, de la organización institucional de nuestra patria! ¡La acabamos de ratificar, presidente! Ahora, si la quieren cambiar, bueno, avancemos por otra dirección. No es este el medio para cambiarla.

Ese sistema que tenemos implica reparto de órganos y de funciones; la vieja teoría de Montesquieu –conservadora me podrán decir–, es decir, la teoría de los equilibrios, de los pesos y de los contrapesos. En realidad, el objetivo de esta organización en nuestra Constitución es para que un poder controle a los otros para evitar los excesos de autoridad que llevan a la tiranía, al gobierno de dictadores; en definitiva, para resguardar la libertad de todos los argentinos. Y esto tiene un eje: primero, independencia de los poderes entre sí; segundo, limitación de los poderes entre sí; y tercero, el control final de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial.

Los tres poderes tienen funciones: administrativas, judiciales, legislativas; pero hay una zona de reserva que tiene cada poder. El Poder Legislativo tiene su zona de reserva para dictar la ley; el Poder Ejecutivo tiene su zona de reserva para administrar; y el Poder Judicial tiene su zona de reserva exclusiva y excluyente para ejercer el acto jurisdiccional, para dictar justicia.

¿Cómo está organizado el Poder Judicial? Esto también es fruto de la reforma constitucional del 94: la Corte, los tribunales inferiores, los tribunales de apelación y también están incluidos dentro del Poder Judicial el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. La característica que tienen los primeros es la de imparcialidad y de independencia. Esto, presidente, también se plasma en el sistema federal y en la

organización judicial de la Argentina. Los jueces federales por una parte, los jueces provinciales por la otra, las cortes provinciales, la ciudad de Buenos Aires...

El artículo 108 establece que la función del Poder Judicial es la de administrar justicia –ejercicio del Poder Judicial– y posteriormente habla de su conformación. Y acá tenemos que detenernos. El miembro informante nos decía que es una corporación, cerrada, no democrática. Como sabemos, esto fue promovido por el ex presidente Alfonsín. En el Núcleo de Coincidencias Básicas, él insistió muy mucho con el ingreso del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Y estas instituciones no responden a un sistema presidencialista, sino a un sistema parlamentario.

En ese sistema parlamentario...

– *Murmillos en el recinto.*

Sra. Negre de Alonso. – Cuando terminen de resolver el tema de seguridad...

Sr. Presidente (Marino). – Por favor, hagan silencio para escuchar a la oradora. Sé que están hablando del hecho que sucedió recién. Ya tenemos identificada a la persona. No es nada grave. Ya está corregido. Así que, hagamos silencio y respetemos a la oradora.

Adelante, senadora.

Sra. Negre de Alonso. – En realidad, no es que no exista, porque esto también sucede en Francia y en Italia, y la elección de los miembros es corporativa.

¿Y qué es lo que estableció el constituyente del 94? Estuve releendo las actas de la Convención Constituyente y había posiciones disímiles sobre esto. No todos concordaban con las incorporaciones, algunos querían hacer una u otra modificación. Pero a lo que se llega es al artículo 114 que habla de un equilibrio entre los poderes elegidos por la voluntad popular y un equilibrio de representación de los otros estamentos que lo componen y que, como sabemos, son los sectores de los jueces, de los abogados y de los académicos.

¿Qué se pretende con este proyecto que promueve el Ejecutivo? ¿Democratizar y mejorar? Creo que no. Por eso, vuelvo a insistir: creo que es la oportunidad perdida. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiéramos hablado de democratizar y habláramos de la representación, podríamos haber incorporado pluralidad de pensamientos y de posiciones con el Sistema D'Hont. No. En la forma de elección, en la proporcionalidad se incorporan mayoría y minoría. O sea que todo el resto del pensamiento queda absolutamente fuera de esta reforma.

Fíjese otra cosa, presidente, que desnuda la realidad del proyecto. Si hablamos de democratizar, si hablamos de que entre la soberanía popular y la legitimidad popular –como se ha dicho acá– al seno del Consejo de la Magistratura, curiosamente no se permite formar asociaciones políticas para presentar listas al Consejo de la Magistratura. Y curiosamente no se permite realizar alianzas electorales para llevar la lista para el Consejo de la Magistratura. Esto es un cercenamiento absoluto de la libertad ciudadana y de la libertad política. ¡Se da absolutamente de bruces con la democratización que proclaman! Si no admitimos el pensamiento diferente, si no alentamos la participación y, además, le negamos y le prohibimos a los sectores minoritarios que se puedan unir para proponer y participar, ¿de qué democratización me están hablando? ¿De qué legitimación popular para la participación en el Consejo de la Magistratura me están hablando?

No se puede oficializar más de un cargo por agrupación y no se pueden unificar las agrupaciones. Además, deben presentar el 0,5 por mil de avales de cinco distritos electorales. ¡0,5 por mil de cinco distritos electorales! ¡Está tan claro que únicamente el

partido que tenga estructura nacional y fuerte puede llegar a ocupar estos lugares! Además, los partidos minoritarios no nos podemos unir ni participar. Por eso, cuando escucho a algún representante de un partido pequeño que sale a apoyar este proyecto, pienso “bueno, participa de la mayoría silenciosamente”, porque no puedo entender que siendo de partidos pequeños puedan apoyar esto que expresamente cercena la participación política. La herramienta constitucional natural le cercena el derecho a asociarse y a apoyar todos a una misma lista.

Y después vamos a la mayoría. Entonces, acá el miembro informante dice que no hay ningún artículo en la Constitución que hable de la mayoría de los dos tercios. Creo que por ahí se equivoca el miembro informante. La ley actualmente habla de dos tercios de los miembros presentes. Y ahora vamos a mayoría simple.

Fíjese, presidente, que el artículo 115 de la Constitución remite al artículo 53. “Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53...”, y este artículo dice que serán acusados el presidente de la Nación, el vicepresidente, los ministros, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y que se les formará causa con la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Entonces, él dijo que no hay ninguna mayoría en la Constitución que lleve a que no podamos modificar los dos tercios. Sí, presidente, porque en realidad la interpretación que se ha hecho es que el artículo 53, que se aplica para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se aplique también para los miembros inferiores de la justicia federal. Entonces, sí hay una mayoría constitucional establecida expresamente, que este proyecto pretende borrar. Ni en la ley 24.937, ni en la 26.080 se tocó esta mayoría. De ninguna manera se tocó esta mayoría.

Después el proyecto habla de la no discriminación, de que no hay que discriminar. Reconozco que el proyecto tiene un punto a favor, que es un pedido que se ha hecho siempre por parte de aquellas personas que no tienen su origen en el Poder Judicial y que venían del ejercicio profesional, que iguala en los antecedentes al abogado de la matrícula a quien está ocupando un cargo en el Poder Judicial. Ahora bien, para hablar de no discriminación, tenemos que hablar de una razonable igualdad de circunstancias. Entonces, yo me pregunto, si vamos a hacer el examen de un juez y vamos a interpretar o le vamos a preguntar al juez cómo interpreta las causales para ir con un recurso extraordinario, las causales para ir con un recurso de casación, cómo interpreta la arbitrariedad... No podemos hablar de no discriminación de profesiones cuando hay profesiones que están preparadas para una materia y otras que están preparadas para otra materia. Me pregunto si podrá ir un profesional, a lo mejor especialista en derecho laboral, un médico, y le podrá preguntar qué opina de las discapacidades. Ahora, no le podrá preguntar sobre las arbitrariedades constitucionales. Entonces, no podemos hablar de no discriminación cuando no hay razonabilidad en la comparación, cuando no hay situaciones iguales. La no discriminación se hace frente a situaciones iguales, no frente a situaciones distintas. Puede ser un podólogo, puede ser un veterinario... ¿Qué le puede preguntar un veterinario, con todo respeto, a un magistrado, para acceder? ¿Cómo puede valorar una persona que no tiene conocimientos del derecho la función del juez o el ejercicio correcto o incorrecto de sus funciones?

Otra cuestión, presidente, que me ha llamado la atención es que se eliminan las universidades privadas. Sólo se admiten las universidades públicas, en cuanto a los

antecedentes y al ingreso. Y fíjese en otra cosa, presidente, porque el proyecto dice que van a tener prelación y preeminencia las carreras que se cursaren en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, yo me pregunto, y la CONEAU ¿para qué la tenemos? Porque, en realidad, nosotros tenemos en plena vigencia la ley que establece la CONEAU, que está dentro del ámbito del Ministerio de Educación, que es la que acredita y habilita las carreras. Y resulta ser que le transferimos –digamos– la preeminencia y prelación a los cursos que se dicten en el Ministerio de Justicia cuando, en realidad, es el Ministerio de Educación, a través de la CONEAU, el que se encuentra habilitado para acreditar carreras y para habilitar títulos y antecedentes en ese sentido.

O sea, lo que posiblemente se discute son tres o cuatro puntos de la reforma, pero, hilando fino, son muchos más los puntos que este proyecto de ley va modificando, en contra del régimen legal vigente que se puede modificar. Entonces, dejemos de lado la CONEAU, porque era como un gran logro de esta institución que habilitara las carreras, que les diera calificación. Además, no sólo las habilita, sino que vuelven a acreditarse cada cuatro o cinco años para revalidar la calidad académica de las carreras. El proyecto las deja de lado.

Quiero referirme al manejo del presupuesto. En realidad, el Consejo de la Magistratura le saca el manejo de todo el presupuesto del Poder Judicial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá también hay otro artículo de la Constitución que le quiero mencionar al miembro informante, el artículo 113, que dice exactamente que la Corte nombrará a sus empleados. Y este proyecto de ley dice que ahora la Corte no va a nombrar a sus empleados, que todas las direcciones técnicas administrativas que tenga el Poder Judicial de la Nación van a pasar al Consejo de la Magistratura; que todo lo que sea administración va a estar a cargo del Consejo. Éste va a fijar los sueldos, va a nombrar a los empleados, va a decir si le da papel, o si no se lo da, a los jueces para que trabajen, va a decir si les paga los sueldos o no, si les cubre el personal, si les a traslada el personal, les va a cubrir los secretarios, todo lo va a hacer el Consejo. Ahora, la República Argentina es grande, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, presidente, y estamos hablando de la justicia federal. No nos equivoquemos, estamos hablando de la justicia federal. Y nosotros, que somos del interior, nosotros, los justiciables de la República Argentina, vamos a estar sometidos a que nuestros jueces federales puedan trabajar si ese órgano elefantiásico que están creando, y que fue uno de los argumentos para derogar y modificar la ley, en el año 2006... Y recuerden que, en San Luis, en Jujuy o en Tierra del Fuego, hay un juez que necesita empleados, a quien se le rompen las computadoras, que no tiene la tinta para la impresora, que no tiene papel, que se le enfermaron los empleados y necesita nuevos empleados, que no tiene para tomar las audiencias. ¡Es una locura! Realmente, es una demostración del poco respeto al federalismo que tiene este gobierno. Quiere que todos los jueces federales de primera y segunda instancia del país dependan de un órgano que está en Buenos Aires para comprar una resma de papel. Así es muy fácil hacer caer al juez en un incumplimiento.

Es absolutamente irrazonable esta reforma. Es antifederal. Además, presidente, en el año 2005, el presidente Kirchner, por decreto, le pasó competencias del Consejo a la Corte Suprema de Justicia, a la que también transfirió fondos. Y dentro del presupuesto del Poder Judicial le asignó un monto determinado para el manejo exclusivo y excluyente de la Corte,

aparte de lo que manejaba el Consejo de la Magistratura. Ahora se lo sacan, no le van a dejar nada a la Corte.

Me pregunto por la movilidad, cuando necesiten trasladarse de un lado a otro. La verdad es que los argumentos del senador Fuentes sobre no sé cuántos magistrados fueron a un lugar, no sé cuántos funcionarios fueron a Brasil, son tan pequeños para hacer una reforma de tamaño magnitud. Dice que 81 magistrados viajaron a Estados Unidos. ¿Qué problema hay? Que vayan a Estados Unidos. ¡¿O también queremos cercenar el pensamiento y únicamente pueden ir a Venezuela?! A mí no me interesa ir a Estados Unidos a hacer un curso. No lo he hecho nunca ni me interesa hacer un curso allí. Ahora bien, ¿y la libertad? ¡Por favor! Entonces, queremos cercenar para que no vayan a universidades americanas. Entonces: ¡vamos por el Poder Judicial!

El argumento que se ha dado es tan trivial y tan demostrativo del avasallamiento que se quiere hacer. Es la oportunidad perdida. ¿Sabe todo lo que podríamos hacer, presidente, para democratizar el Poder Judicial? Ya se lo voy a decir.

En el año 53 José Benjamín Gorostiaga, que era uno de los autores de la Constitución, redactor y partícipe de la Convención decía: No hay poder sin recursos ni Estado sin tesoro. Además, el fundado de nuestro movimiento decía: no hay soberanía política sin independencia económica. Si saco los recursos a la Corte, ¿por qué voy? Voy por la soberanía y la independencia de la Corte y del máximo tribunal de la Nación y de todos los tribunales federales.

Hay otro tema muy grave desde nuestro punto de vista. Usted sabe que el artículo 11, inciso 7), dice que el Consejo de la Magistratura puede reajustar partidas del presupuesto nacional y que simplemente va a notificar al jefe de Gabinete. En primer lugar, ¿quién es el que vota y fija las partidas del presupuesto nacional? El Congreso de la Nación. ¿Está autorizado un miembro del Consejo de la Magistratura para hacer eso? No. En realidad, se invoca –por eso digo que es tan grande la desprolijidad– la ley 11.672. Esa ley autorizaba al presidente de la Corte para reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional. Pero esa ley 11.672 es anterior a la reforma constitucional. Ustedes recordarán que este Congreso, en cumplimiento de la cláusula transitoria que decía que debíamos tratar la delegación de facultades anteriores a la Constitución, fue prorrogando la delegación por varios años hasta agosto de 2010, si mal no recuerdo. En agosto de 2010, después del vencimiento de la comisión, luego de un año de trabajo, como no se ratificó nada más, cayó toda la legislación que tenía facultades delegadas anteriores a la reforma de la Constitución Nacional. Entonces, modifican una ley derogada y vuelven a delegar facultades, pero ya no al Poder Ejecutivo, ni siquiera a la Corte, sino a un miembro del Consejo de la Magistratura, ¡señores!

Se arrojan las facultades legislativas y se la dan a un órgano del Consejo de la Magistratura. ¡También van por el Congreso! ¡¿O no nos dimos cuenta de eso?! Ya ni siquiera dicen que delegan al Ejecutivo, que en realidad acá se ha venido votando siempre y lo hemos denunciado permanentemente. En la ley del Fondo Monetario Internacional también delegaron facultades. Pero ahora el que vote esta ley va a delegar a un órgano mixto –¿de qué estamos hablando?– para que modifique las partidas presupuestarias votadas por el Congreso de la Nación. ¿Qué somos? Somos un poder del Estado. Tenemos que hacernos respetar

Esta ley que muchos dijeron que era tan perfecta que no se podía modificar demuestra que el Poder Ejecutivo nacional lo tiene al Congreso de la Nación de adorno, con las mayorías que conocemos y que es fruto de la voluntad popular. Pero el fruto de la voluntad popular –el senador Fuentes dijo que los frutos de la democracia se construyen– no da derechos al avasallamiento a las minorías ni tampoco da derechos a arrogarse el Poder Ejecutivo facultades del Congreso y dárselas al Consejo de la Magistratura, en violación claras a las normas constitucionales.

Hemos llegado a una falta de respeto tan grande, que no solo nos dicen que no servimos, si total no vamos a debatir nada y está todo hecho perfectamente en el Poder Ejecutivo, que no solo hay declaraciones que no se dan cuenta que van en desmedro del propio cuerpo, que erosionan ante la ciudadanía, que son nuestros mandantes, nuestro prestigio; sino que además lo ponen por escrito. Sacan una ley que está derogada –decidimos no aprobar más esta prórroga– y se la dan a un miembro del Consejo de la Magistratura.

Entonces, ¿qué es democratizar? Los proyectos que están en la Cámara de Diputados les llamo “cazabobos” porque en realidad quién no va a estar de acuerdo con un montón de iniciativas que plantean. El núcleo duro de esta reforma es este proyecto que estamos tratando. Todos hablan de la morosidad, de la demora, de la falta de justicia para el ciudadano. Pero esto no es democratizar.

Si el Poder Ejecutivo quisiera democratizar hubiera hecho otra cosa. Hubiera establecido plazos para que los jueces dicten sentencia en plazo. Ayer estaba el presidente de una ONG que se llama Será Justicia y dijo: un juicio de daños y perjuicios, que es el juicio que cualquier ciudadano puede tener por un accidente de tránsito o una indemnización laboral, lleva 55 horas de trabajo en un juzgado. Pero el juicio dura cuatro años como mínimo. Además, se trata de juicios de protección de la salud, de indemnizaciones. Esto demuestra que son otras las cosas que hay que atacar. Hay que poner plazos, con pérdida de jurisdicción automática y, además, con causal de destitución objetiva y automática cuando se produzcan dos o tres vencimientos de plazos en un año. Eso es democratizar y hacer que la justicia esté al servicio del pueblo.

Hay que darle una participación plural en el sistema democrático, no mayorías y minorías. Hay que darle más participación a las minorías; hacer que los jueces rindan concurso, que demuestren que siguen teniendo capacidad para ejercer la función. Eso es democratizar la justicia.

Cuando vienen estos proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales yo escucho las voces de los presidentes de la comisiones, que son las voces oficiales de la mayoría. Aquí hizo referencia el senador Sanz a las declaraciones de la diputada Conti, y pido permiso para leer. Dijo: la mayoría debe gobernar los tres poderes.

La Constitución dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Entonces, si quien gana las elecciones debe gobernar los tres poderes, y va a gobernar el Poder Judicial, a confesión de parte, relevo de prueba –lo dijo la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación–, esto significa que no es una simple queja de los sectores corporativos, como se los ha llamado aquí, o de los

medios porque si tienen que gobernar los tres poderes, tienen que gobernar el Poder Judicial. Y la cláusula operativa de mayorías para destituir y nombrar jueces es lo que hace, valga la redundancia, operativo el gobierno del Poder Judicial, cualquiera sea quien esté en el gobierno.

Ayer se decía que los jueces iban a pasar a comisión. Sí, fíjense el apuro que entran rápido en las elecciones de ahora y además no esperan a que cesen los mandatos, sino que siguen todos juntos los mandatos. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a nombrar y destituir! Aquí se han nombrado jueces con nombre y apellido. También se ha cuestionado por qué los jueces van a los Estados Unidos. ¿Qué le están enseñando? El “Gran Hermano” ya les está quedando corto.

Al principio algunos teníamos la gran esperanza de que fuera un proyecto realmente democratizador y transformador del Poder Judicial, pero cuando lo sacaron tan rápido pensé que tal vez querían ocultar los muertos por las inundaciones porque, en general, al gobierno no le gusta que muestren el dolor y el sufrimiento. Y cuando se cumplía un mes de los muertos en Once apareció el fallo sobre el aborto. Todo el mundo hablaba del aborto y nos olvidamos de la tragedia de Once. Ahora, cuando estamos con el tema de las inundaciones, aparece esto.

Habrá sido en parte así pero después que vi el programa del domingo quedé azorada y pensé que los servicios deben haber tenido noticias de lo que se iba a publicar. Entonces el apuro es la impunidad. No es una hipótesis probable. No se quiere democratizar el Poder Judicial porque hay muchísimas herramientas para hacerlo, que ni siquiera se han propuesto, ni siquiera nos han querido escuchar para que las propusiéramos. El gobierno quiere garantizarse rápidamente que el Poder Judicial también le responda y que el resto de los ciudadanos no tengamos adónde ir en busca de protección de nuestras garantías constitucionales. Y, como dijo la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, la mayoría debe gobernar los tres poderes del Estado.

Señor presidente, esto no está en la Constitución Nacional. ¡Esto es un golpe de Estado constitucional!

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Juez.

Sr. Juez. – Señor presidente: en esta oportunidad me toca hacer algunas consideraciones generales sobre el proyecto que el orden del día establece como número 22 y, en representación del espacio del Frente Amplio Progresista, quiero adelantar nuestro criterio inicial. Para que quede claro: nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acompañar este proyecto. La verdad es que nos hubiese encantado poder tener otro discurso el día de hoy porque, como lo hemos escuchado al señor senador Sanz o la senadora Negre de Alonso, cuando se habla de términos tan interesantes, tan motivantes y tan convocantes como la democratización de la justicia, uno no tiene menos que entusiasmarse.

Debo decirle, a riesgo de ser un ingenuo absoluto, usted piense lo que quiera de mí, que esto me pasó el 1° de marzo cuando escuché a la presidente hablar de la democratización de la justicia. Entendía, como muchos de los que aquí estamos sentados, que se abría una oportunidad maravillosa, que, como dijo claramente la senadora Negre de Alonso, ha sido absolutamente desperdiciada, no solamente porque no nos convocaron a discutir, sino que –no quiero ofender a nadie– hasta dudo que hayan sido convocados algunos legisladores oficialistas para discutir un tema tan importante, tan trascendente y tan dirimente para el futuro de la República.

Usted me ha escuchado decirlo en muchas oportunidades: soy un abogado litigante y hoy me toca no ejercer la profesión porque tengo la responsabilidad de ser senador de la Nación en representación de los intereses del pueblo de mi provincia. Así que conozco la justicia de los dos lados. No me gusta la autorreferencia pero he sido fiscal anticorrupción en mi provincia y toda mi vida he sido litigante. Peregriné por todas las barandillas de tribunales buscando justicia para mis clientes. Así que del tema conozco y no me lo tienen que contar.

Si usted pregunta y averigua, porque usted es un senador que conoce y que pregunta, puede preguntar en Córdoba, no debe haber un tipo que interpele más a la justicia que quien les habla. Usted dirá: ¡Bueno, usted es Juez! ¿Por qué se calienta si no lo van a mover de ninguna manera con este Consejo de la Magistratura de Cristina ni con el que va a venir? Yo estoy exento del juicio de los magistrados y créame que por mi apellido a mí no me mueven. Conozco la justicia la he enfrentado y la enfrento todos los días.

Entonces, se escuchan discursos maravillosos y motivantes de que hay que terminar con esta justicia de puertas cerradas, de olor nauseabundo y de jueces poco comprometidos. Lo conozco y es cierto. Hay que terminar con esta justicia de los negocios de algunos señores magistrados. En mi provincia se hicieron infinitamente ricos con el corralito utilizando hasta el hartazgo las medidas cautelares. ¿Cómo no me voy a entusiasmar? Sin embargo, ¿esta es la mecánica, esta es la forma? ¡De ninguna manera! Esta no es la forma – el pomposo título de democratización de la justicia– como el Estado puede llegar a darle a la justicia lo que los argentinos necesitamos: justicia. Es decir, no el aditamento de justicia independiente, sino justicia. Lo decíamos recién con la senadora Morandini cuando hablábamos de la justicia: si no es independiente no es justicia.

He dicho hasta el hartazgo en más de una oportunidad que si en vez de tener 49 años tuviera 10 más seguramente mi madre hubiese caminado por la Plaza San Martín con algún pañuelo en la cabeza. Pero tengo 49 y no tengo las contradicciones de otra generación. No tengo la posibilidad de tener que reparar siempre en el pasado para justificar mis desaguisados del presente. No tengo por qué hacerlo y no lo voy a hacer.

El miembro informante habla con un nivel de posesión –no lo quiero calificar– interesante augurando una revolución: porque llegamos nosotros y la revolución viene con nosotros. Tengo que decirle que esta no es la forma. Lamentablemente, uno tiene ganas de acompañar estos títulos, uno siente que la historia le pasa por al lado y uno no puede hacerse el zongo y quedarse en el andén esperando que el tren vuelva a pasar, porque seguramente no vuelve a pasar. Y cuando se escriban los libros de historia seguramente me van a preguntar cuál fue mi conducta, cuál fue mi actitud, dónde estuve y qué intereses defendí.

– Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Juez. – Debo decirle que de ninguna manera venimos a defender la corporación judicial, sino que venimos a defender los intereses de los vecinos y de los ciudadanos que necesitan justicia. No es poniéndole una pechera partidaria, ni saliendo a reclutar magistrados en listas partidarias. Como en una época en este Senado, y en todos los parlamentos provinciales, se discutió el cupo femenino, hoy estamos discutiendo el cupo judicial. En todas nuestras boletas va a haber un cuadradito donde vamos a incorporar a partir de hoy el cupo judicial. ¡Vengan, señores magistrados, pónganse la camiseta del

Frente Cívico en Córdoba y acompañenlo al doctor Juez! ¡No se la sacan más! Porque a partir de ahí, en vez de deberle obediencia, respeto y subordinación a la Constitución Nacional, empiezan a deberle subordinación y respeto al partido que lo propuso.

Por eso, es una torpeza, este es un tema que debe debatirse con profundidad. Lo dijo con una claridad meridiana el senador Sanz, que me encanta cuando habla en estos temas en particular. No quiero ofender a nadie, si algo podemos todavía rescatar de la década del 90 fue ese nivel de consenso que se logró en la Convención Constituyente de 1994.

Y este tema en particular se discutió. Muchos integrantes de acá fueron constituyentes nacionales. En representación de mi provincia, algún integrante de la Corte Suprema fue constituyente, y este tema en particular se discutió hasta el hartazgo, porque entendíamos en aquella oportunidad –y se entendía– que había que arrebatarse a la partidocracia la posibilidad de tomar estas decisiones, porque el Poder Judicial debería y debía ser independiente. Pero se dio un debate importante, y me atrevo a decirle que la discusión particular del Consejo de la Magistratura fue uno de los temas que más apasionamiento despertó; y no solamente en los hombres con corbata, saco y matrícula de abogados, ya que era una discusión importante. Pero es cierto que en la medida en que fueron transcurriendo los años, nos hemos encargado de ir haciendo la contrarreforma a cada rato; y particularmente, en estos temas tan centrales.

Digo que a nosotros nos entusiasma la idea de democratizar la Justicia, de llenarla de transparencia, de darle objetividad. ¿Cómo me voy a oponer a que haya concurso, si vengo peleando hace veintisiete años contra la “sagrada familia judicial” de mi provincia, donde por juzgado hay quince familiares? ¡Te peleás con el pibe de la barandilla y te termina enculando el presidente de la Cámara! Y vos decís, “¿Pero por qué...?” “No, porque era el yerno”, “Uy, ¡qué cagada!”

¿Cómo me voy a oponer a que el patrimonio de los magistrados esté en Internet, si hace años que vengo diciendo que en el caso de todos los que recibimos un salario por parte de los contribuyentes nuestro patrimonio tiene que estar exhibido públicamente? Pero como dijo la senadora Negre de Alonso, ¿ese es el núcleo duro de la reforma? ¡No, es el Consejo de la Magistratura! ¡Y es la idea de quedarse para siempre con este poder!

Por el cariño que le tengo al senador Fuentes –y porque lo noto un militante terrible–, creo que con esta idea de “donde radica la soberanía popular”, si le colocamos una pechera a un juez y permitimos la incorporación de los partidos políticos a la designación, al manejo, a la modificación y a la suspensión de los magistrados, se acabó.

Es cierto, la Justicia está jaqueada, está mal. Es cierto que me hubiese encantado encontrar al presidente de la Corte –lo he dicho por todos lados y en cuanto micrófono me han puesto–, y escucharlo al doctor Lorenzetti defendiendo y no escondiéndose atrás del privilegio procesal de que “no puedo adelantar criterio porque, en el supuesto caso de que venga un proceso de inconstitucionalidad voy a tener que emitir una opinión y ya la he adelantado”.

Éste es el momento para poner la cara. Han mostrado mucho más coraje los empleados judiciales que quien debería defender la cabeza del poder. Sé que pueden decir “¡Ah, no te metás con el presidente de la Corte!” No tengo nada con él. La verdad es que me parece un tipo bárbaro. Pero creo que estos son los momentos en donde hay que decir las cosas. Porque dentro de dos años, cuando debatamos la inconstitucionalidad, que seguramente se va a discutir, ya es tarde. ¡Estos son los momentos en los que a la

ciudadanía se la convoca a participar, a debatir, a aportar, a enriquecer, a contradecirse, a pelearse, a discutir! Pero no pasó nada de eso. Así como vino, así se va.

No hay forma de que acompañemos esto, presidente. No hay ninguna posibilidad; más allá de la voluntad o de la decisión. Estamos convencidos, y créame que el día de mañana, la Historia nos va a asignar la razón. Porque hoy, este es un traje a medida para este gobierno, pero mañana lo será para el que venga.

Entonces, me habrá escuchado en soledad, por ahí con la senadora Morandini, plantear que ¡nosotros de ninguna manera vamos a legitimar proponiendo integrantes del Consejo de la Magistratura cuando esta ley esté en vigencia y se ponga en funcionamiento! Porque después, en este país donde lo provisorio es para siempre, donde lo que es por un rato se queda de por vida, este traje a medida que hoy le sirve al kirchnerismo, mañana le va a servir, en 2015, a quien le toque gobernar esta Argentina. Y en definitiva, el ciudadano, el destinatario final, si es cierto que nosotros estamos acá por nuestros vecinos, por nuestros contribuyentes, para resolverles sus problemas, para aliviarles su vida y su complicada situación, ese ciudadano que –como todos los que estamos acá– lo único que necesita y el último resquicio que le queda es el rincón de la Justicia, no la va a tener. Porque vamos a tener una justicia independiente... Porque es el sueño del pibe gobernar con jueces amigos. ¿Quién no quiere?

Lo digo por experiencia. Venimos de provincias con justicias dependientes, venimos de provincias con una Justicia genuflexa con los poderosos, con el poder político. Terriblemente inflexible con los que nada tienen, con los que más reclaman, con los que más la necesitan. Así que conocemos del tema.

Seguramente nada de lo que digamos ahora va a engordar los importantes discursos que hemos escuchado hasta ahora. Por eso, debo decirle que no hay ninguna posibilidad de que desde el Frente Amplio Progresista acompañemos este proyecto. Con bronca lo digo, con lástima, con dolor. Porque, por la especificidad del trabajo y la tarea que uno desempeña en su vida, dice “ojalá que una vez, cuando me toque estar en algún lugar legislativo, se trate un tema específico que tenga que ver con lo que yo hago toda mi vida”. Esto es de lo que vivo; con esto alimento a mi familia, con esto le he dado futuro a mis hijos, con esto la peleo todos los días; y la verdad es que me hubiese encantado poder acompañar y debatir toda esta cuestión, porque es un tema que lo venimos reclamando.

Sí, claro, es cierto, quiero decirle que el diagnóstico que por ahí el gobierno plantea inteligentemente... Por eso la frase maravillosa del senador Sanz: “una cosa es lo que se dice con la boca y otra es lo que se hace con la mano”; es cierto que lo que se dice con la boca, por ahí, tiene mucho rasgo de sinceridad, de razón. Es cierto, por eso quiero reiterar: ¡no vengo a defender a la corporación judicial; de ninguna manera! ¿Es cierto que esta Justicia necesita ser *aggiornada*? Sí, es cierto. Lo que no es cierto es que esta sea la mecánica, que este sea el camino.

¡Esta partidización de la Justicia bajo el pomposo título de “soberanía popular”, el día de mañana les va a tocar padecerlo a ustedes, a los que hoy gobiernan. ¡Y en este país del revanchismo, les va a ir muy mal! ¡Como seguramente a los que opinamos como opinamos hoy, nos va a ir muy mal! ¡Pero la Justicia es todo lo contrario! ¡Solamente en las tribus la justicia del revanchismo tenía lugar! ¡En los países serios, la Justicia tiene un lugar de equilibrio entre los poderes de la República!

Y la verdad, con todo dolor, con la absoluta convicción como probablemente no la haya tenido... Yo me entusiasmo. ¡Hasta el día de hoy, presidente, en mi provincia, me castigan por haber acompañado algún proyecto del oficialismo! ¡Porque yo quiero salir de la lógica esa de “estás acá o estás en contra”! Yo quiero pararme en el medio, y quiero examinar y quiero decir con convicción, porque para eso me eligió la gente: “esto es bueno, che, ¿por qué no lo puedo acompañar, porque viene del gobierno nacional?” “Esto es malo, ¿por qué no lo puedo criticar, porque vienen un montón de leguleyos a contarme y a venderme una historia que yo conozco que es distinta?” Quiero tener la posibilidad de un equilibrio importante. Muchas veces lo consigo; la mayoría de las veces lo pierdo.

Esta posibilidad, y lo digo con sinceridad, de discutir seriamente la Justicia que le garantice a nuestros hijos tranquilidad, futuro y paz, y por qué no prosperidad, nos entusiasmó enormemente al bloque del Frente Amplio Progresista. Pero este no es el mecanismo, esta no es la forma. Por eso, termino diciéndole, presidente, que el desafío que planteamos queremos que se extienda; que se extienda a cuanto dirigente que hoy plantea que este mecanismo es perverso, partidario y de chaquetas partidarias que va a permitir el manejo del Consejo de la Magistratura, tenga también el coraje de no convalidar esta herramienta, este instrumento, proponiendo luego integrantes para el Consejo de la Magistratura.

Dejo planteado el tema. ¡Porque no vaya a ser cosa que dentro de un par de meses, muchos de los que hoy nos oponemos, estemos armando listas para el Consejo de la Magistratura, a ver cuántos amigos ponemos en ese botín precioso que, como decía la senadora Negre de Alonso, va a manejar un presupuesto increíble, arrebatándole la posibilidad del manejo de su propia autoridad al propio Poder Judicial!

¡Es cierto que hay que cambiar la Justicia; es cierto que tenemos jueces miserables, tipos que no se merecen tener la posibilidad de administrar justicia y estar en el lugar de la Magistratura! ¡Es cierto que tenemos tipos cobardes, que son incapaces de promover una acción penal!

Pero créame que digo esto con la misma voluntad y con la misma vehemencia con que en su momento le preguntamos a la por entonces candidata a la Procuración General, la doctora Gils Carbó, concretamente: usted, cómo va a actuar en el supuesto caso de que le toque investigar un hecho de corrupción del gobierno; dijo: con la misma conducta y la misma vehemencia que lo hice toda mi vida. A mí, particularmente, eso me dio la tranquilidad de decir “esta mujer ya está”. Pero la estamos esperando. Llevamos 72 horas sin justicia en alguna denuncia que nos enluta, que nos ensucia, que nos ofende a todos los que creemos que la cosa pública tiene que manejarse de otra manera.

Quiero decirle, para terminar y no quiero redundar: “Tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola”. A mí, en Córdoba, me decían que era una foca; y estoy seguro de que es un perro. Me dicen que quieren Justicia independiente. ¿Sabe qué, señor presidente? Permítame que dude, porque cuando tuvieron la oportunidad de proponer un procurador interesante, nos ofrecieron al titular de la SIGEN. Si no fuera por el trabajo de la Comisión y de algunos senadores oficialistas que dijeron “esto no pasa”, hoy el encargado de la acción pública sería una persona que no tenía ningún requisito para serlo.

Nos hablan de Justicia independiente. La última vez que pasaron pliegos por la Comisión de Acuerdos, que yo integro, fueron 19 de jueces sustitutos. No tuvimos más de diez minutos por pliego para poder examinarlos; no sé si alguno de ellos era abogado.

Señor presidente: en Córdoba dicen que entre el dicho y el hecho, hay un largo trecho. Y la verdad es que no hay ningún hecho claro, salvo aquel primigenio de la designación de una Corte que, comparada con la del menemismo, claro, la verdad no hace falta ser un genio para diferenciarse de Nazareno, pero era una Corte interesante.

Salvo aquel gesto independiente de Justicia, el resto..., la conformación de los tribunales... Sinceramente, uno muchas veces tiene más confianza en la imparcialidad del jurado de Tinelli que en la Justicia que propone el gobierno.

Con todo respeto, a decir verdad, no hemos visto gestos que realmente hagan que uno pueda pensar con sinceridad que ustedes buscan la posibilidad cierta y concreta de tener justicia para todos y todas. Quieren justicia para el Frente para la Victoria. Y cuando ya no estén en el gobierno, le puedo garantizar que van a peregrinar por Tribunales y van a rogar tener jueces independientes. Porque los decentes necesitamos jueces independientes siempre. Siempre, gobierne quien gobierne.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monlleau.

Sra. Monlleau. – Señor presidente: una vez más tengo que decir que descreo de las buenas intenciones del Frente gobernante, porque sigue falseando la realidad y porque nos sigue escamoteando y escondiendo sus verdaderas intenciones.

No voy a hacer un análisis técnico, porque no pertenezco a ninguna asociación de magistrados ni colegio de abogados; tampoco soy una abogada exitosa y hay pares en este recinto que, seguramente, van a hacer esta clase de análisis, tal como lo hicieron hace unos momentos los senadores Negre de Alonso y Juez. Entonces, hablaré desde otro lugar. Hablaré desde lo que subyace en el proyecto.

Algunas reuniones de comisión y sesiones resultan casi una puesta en escena, simulacros de participaciones en los que, a veces, nos dan la palabra, a veces, estamos autorizados a hablar, a veces, podemos introducir modestos aportes y, las más de las veces, quedamos entrampados en legitimar las decisiones que la mayoría adopta merced a la fuerza del número y a estos tratamientos exprés, con fórceps, de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, generalmente, con la indicación de no introducir modificaciones.

Esto que se ha dado en llamar democratización de la Justicia es, a mi modesto entender, otra mutación y transformación de las tecnologías de poder en el contexto del desplazamiento de la hegemonía capitalista liberal hacia la hegemonía populista smithiana. Señor presidente: sabemos que no hay una hegemonía mejor y otra peor. Un planteo hegemónico se articula en un sistema de creencias que busca expropiar la realidad, traduciéndola a un discurso único que aplanar todas las otras realidades discursivas. Un discurso excluyente que destrata, niega e ignora a quienes no se sienten reconocidos en el modelo.

Señor presidente: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno con sus miembros, conforman el Estado, y no hay un Estado dentro del Estado, como pretende el poder hegemónico, con un discurso clausurado y cerrado que anula el diálogo. Otra vez estamos ante proyectos de ley que nos remiten al debate entre legalidad y legitimidad.

Desde la distinción amigo-enemigo, Smith señala que si la mayoría puede disponer sobre la legalidad e ilegalidad según su arbitrio, puede, ante todo, declarar ilegales, es decir, fuera de la ley, a sus competidores políticos internos y, con ello, excluirlos de la homogeneidad del pueblo. Señor presidente: para Smith, el Estado es modelo de la unidad

política. El Estado es portador del más admirable de los monopolios; a saber, el monopolio de la decisión política. Y para el Frente gobernante, el Estado es el Poder Ejecutivo.

De lo que se trata no es de democratizar sino de avasallar, de terminar con lo que queda de Justicia y de organismos independientes. De someter y disciplinar, aunque para ello se ponga en jaque a la propia Constitución. El gobierno cree, como también lo creía Smith, que es preciso determinar quién es el garante, quién está llamado a actuar como defensor de la Constitución. Y Smith propone al jefe de Estado, al presidente del Reich; no al Poder Judicial.

Otro aspecto que está en juego es la exclusión de la discusión pública de grandes grupos con barreras estructurales, socioeconómicas, políticas y legales que condicionan su participación y a los que, de ninguna manera, se les ofrecen las instancias necesarias para acceder a la información y a participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones. Subyace también en los proyectos la concepción de un gobierno como gobierno de la población, lo que torna más agudo el problema de la soberanía. ¿Hasta dónde somos ciudadanos o hasta dónde somos súbditos? Esta reingeniería política nos lleva a preguntarnos cuál será, de qué tipo y cómo se ejercerá la libertad, dónde habrá de edificarse la legitimidad que tendrán el interés individual y el estatal.

Señor presidente: nuestra jefa de Estado se declaró hegeliana, y desde el absoluto hegeliano, podemos entender el “vamos por todo”, también, por la Justicia. Ya fueron por el INDEC, la ANSES, YPF, Ciccone, el Banco Central, las concesiones, la obra pública y sus monumentos de corrupción y la educación, al poner el interés en el adoctrinamiento y la domesticación. Recordemos cómo hace poco se vio en televisión cómo el ministro Tomada le indicaba a Pedraza qué hacer con los militantes díscolos, trabajo que también se hace con quienes trabajan en las cuasi cooperativas. Es decir, nada debe quedar afuera de la aplanadora.

Señor presidente: creo que la negligencia, la falta de voluntad y la corrupción llevan muchas veces al gobierno a soslayar la Constitución. Como hoy ocurre en el Senado, cuando las mayorías parlamentarias responden al Poder Ejecutivo en forma ciega, solamente queda el resguardo del Poder Judicial.

Como dice el catedrático Gustavo Maurino –y voy a leer, señor presidente–: Para quienes consideramos que el ideal democrático más valioso es el deliberativo, la democracia demanda el ejercicio de la razón pública, la renuncia a gobernar por el número, la pura voluntad o la fuerza o los acuerdos reservados de élites corporativas. Las tradiciones políticas y constitucionales que permiten y avalan el ejercicio de la autoridad pública sin razones públicas son un obstáculo radical a la construcción democrática.

Siento, señor presidente, que hoy, parafraseando a Derrida en los *Espectros de Marx*, sobrevuelan en la Argentina, y en particular en el recinto, los espectros de los muertos de nuestra historia. Pero que no son solamente los 30 mil desaparecidos sino que incluyen otros espectros como los muertos de la Embajada de Israel, de la AMIA, de las inundaciones recientes, de los jubilados que murieron esperando la justicia del 82 por ciento móvil, y también los espectros de Julio López, Mariano Ferreyra, las víctimas de la violencia y accidentes de tránsito, de los explotados, desempleados, de los pobres que ven cristalizada cada vez más la pobreza, de los que son víctimas de la violencia simbólica, de los que sufren carencias materiales fruto de la corrupción, de los que están

invisibilizados por pensar diferente, de nuestros hermanos de los pueblos originarios y de los que esperamos castigo y justicia para los corruptos que caminan impunemente.

Señor presidente: se le atribuye a Borges que hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Y el gobierno, hoy lucha contra los poderes concentrados, los poderes económicos, contra las corporaciones y monopolios. Es decir, pensemos si no se están transformando en aquello que combaten.

Señor presidente: esta reforma no representa mayor transparencia, ni mayor ni mejor participación, ni más ecuanimidad, ni más celeridad. No ha merecido un tratamiento responsable y, sin dudas, será aprobada. Sin embargo, aunque no lo fuera, ya cumplió uno de sus cometidos: el amedrentamiento.

Estas leyes rozan la inconstitucionalidad, jaquean la supremacía de la Constitución y atentan contra el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado.

Por estas razones, el Frente Cívico y Social adelanta su rechazo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. – Señor presidente: quiero traer a colación unas palabras que decía el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de Horacio Verbitsky en cuanto a la necesidad de desdramatizar esta discusión. Decía que estas propuestas ni van a solucionar todos los problemas ni van a poner en peligro las instituciones de la República. Y estoy convencido de que es así. La verdad es que salen en la discusión cuestiones como las lamentables inundaciones y otras tragedias y me cuesta entender que se hable de esas cosas para oponerse a que el pueblo pueda votar consejeros de la Magistratura.

En definitiva, de eso trata la propuesta. Se agregan algunos miembros de determinada extracción, como son los representantes de los ámbitos académicos y profesionales, y se establece que los representantes de algunos estamentos, como el caso de los abogados, jueces y los ámbitos académicos y científicos van a ser elegidos por el voto popular. Creo que no hay que tener miedo al voto popular; y mucho menos, quienes aquí estamos en virtud de ese ejercicio.

Algunos autores dicen que la política es la teoría del Estado. Hay muchas definiciones, pero a veces es conveniente recurrir a las más sencillas. Obviamente, el Poder Judicial forma parte del Estado. Por ende, forma parte de la política. Otros autores dicen que la política es la teoría del poder. Y se llega a la misma conclusión.

Entonces, criticar estas iniciativas hablando de la politización del Poder Judicial como algo malo me parece absolutamente impertinente y, obviamente, no lo compartimos.

La Justicia es un poder político y los órganos del gobierno, lo digo como elementos del Estado en sus tres ámbitos, también son políticos. Los jueces son políticos. Alguien podrá decir que hay que diferenciar lo político de lo político-partidario, pero la verdad es que es algo muy difícil. Se trata de juegos de palabras.

Desde que nuestra Constitución dice que los partidos políticos son actores fundamentales de la democracia, ciertamente, la política como teoría del Estado, la política como teoría del poder, es sinónimo de la democracia. No concibo otra forma de organización del Estado y del poder que no sea la democracia. Y así lo define el artículo 1° de la Constitución cuando habla de la República. La nueva denominación de la República es la democracia. Entonces, nuestra Constitución dice que los partidos políticos son actores fundamentales de la política. ¿Por qué, entonces, pensar que es tan malo que

algunos consejeros de la Magistratura deban ser postulados por los partidos políticos y, de esa manera, sometidos al voto popular?

Creo que si nos asusta la posibilidad de someter a algunos consejeros de la Magistratura al voto popular –no se están eligiendo jueces–, ¿qué va a decirse el día que se ponga al pueblo a administrar Justicia? ¿Nos asustaría, quizás, la transformación del sistema institucional que eso implicaría –en realidad, es un mandato que se tiene desde 1853– al establecer la necesidad de fijar los juicios por jurado? Alguien podrá decir que los jurados se pronuncian sobre los hechos y no sobre el Derecho, que va a seguir estando en manos de jueces letrados. Pero la verdad es que se trata de otro juego de palabras. Los hechos determinan y condicionan al Derecho.

Me parece que mitos y democracia van a contramano y, en derredor de la Justicia y del derecho, se han construido mitos. Entonces, creo que a esta altura, a más de doscientos años de la Revolución Francesa, a la cual creo que el Poder Judicial le jugó a las escondidas, se puede plantear desmitificar algunas cuestiones.

Se ha construido el concepto de que el Derecho es una ciencia, cosa que fue muy polémica en los tiempos en que surgieron las denominadas ciencias sociales. De esa manera, se fue haciendo casi un negocio. El Derecho es monopolio de algunos; de algunos pocos a los cuales personalmente pertenezco, porque también soy abogado.

Me parece que empezar a ponernos al día con 1789, para luego ver qué hacemos con estos más de doscientos años que transcurrieron después, es una deuda que tienen las naciones y los pueblos; es decir, democratizar la Justicia algo que, entre otras cosas, va a significar la necesidad de devolver el Derecho al pueblo.

El Derecho, podrá ser o no una ciencia, según la teoría que uno adopte, pero, evidentemente, es una construcción cultural. Los que hacemos Derecho, tanto en el ámbito parlamentario como en el Poder Ejecutivo y en el ámbito de la jurisprudencia, no lo hacemos aislados en laboratorios y de espaldas al pueblo y al acontecer cotidiano del movimiento social que escribe la historia. Lo que hacemos, en todo caso, es receptar determinados paradigmas que van decantando de esa dinámica y de las correlaciones de fuerzas que la van motorizando y de los valores que son permanentemente cambiantes, al igual que las instituciones que también lo son.

Pretender que la Historia se terminó en 1789 y medir todo desde la vara de la teoría de la república de aquella época, explicable en un contexto donde había que salirse de la monarquía, donde se entendía que el poder venía de Dios y se transmitía de manera dinástica, va contra lo que la naturaleza demuestra, como es que la vida del hombre en sociedad es permanentemente cambiante. Por lo tanto, debemos ser permeables no solo desde la política, desde la Economía y desde lo cultural, sino también desde el Derecho para receptar esos cambios, porque lo contrario es ser antidemocráticos. Creo que no podemos, por poner el foco en uno, dos o tres árboles, desenfocar la mirada en el bosque. Me parece que hay que tener en vista, más allá de las coyunturas y de los actores –algunos de los cuales pueden simpatizar más que otros–, los procesos.

Evidentemente, en todos los países de la región latinoamericana transitamos un proceso constituyente. Podríamos decir que, a escala mundial, atravesamos en el siglo XXI el cambio de la definición de un orden o sistema mundial. Entonces, no podemos seguir sacralizando formas del año 1789 como que son indiscutibles. Creo que hay que discutir las y no tenemos que tener miedo a cambiarlas, aun a riesgo de equivocarnos y después volver

a revisar cada cambio. Porque como decía recién, la naturaleza misma de la vida del hombre en sociedad y de la dinámica de la Historia es el cambio permanente.

Por consiguiente, creo que la reconceptualización de la democracia en el siglo XXI nos interpela a hacer este tipo de disquisiciones y a refundar una serie de cuestiones, lo que tenemos que aceptar que atentará contra la comodidad de seguir repitiendo conceptos que llevan doscientos años y que han dado respuesta a muchas cosas y a una coyuntura pero que resultan ya insuficientes para otras cuestiones absolutamente nuevas.

Con respecto a la interdisciplinariedad que se busca en la integración del Consejo de la Magistratura a través de la incorporación de determinados profesionales académicos o técnicos, tampoco nos tiene que preocupar el hecho de que no sean abogados y que puedan ser veterinarios –por ejemplo–, porque el pueblo mismo está integrado de una manera diversa y plural, no solo por gente de diversas profesiones sino, en muchísimos casos, por personas de ninguna profesión. No tenemos que desdeñar la mirada diversa de todas las perspectivas que existimos en sociedad.

Entonces, que alguien no haya cursado en la Facultad de Derecho no significa que no tenga una percepción de lo justo o de lo injusto o que no esté en condiciones de elegir a quien puede nombrar o seleccionar jueces, de la misma forma que puede elegir quien gobierna un país en el Poder Ejecutivo o quienes integran el Poder Legislativo. Esto tiene que ver con esta desmitificación que, según me parece, necesitamos de la justicia y del derecho, que deben ser devueltos al pueblo –de la misma manera en que fueron devueltas al pueblo, o estamos en ese proceso, la política y la economía–. ¿Por qué el derecho y la justicia tienen que ser la excepción?

Ciertamente, nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto desde el bloque de Nuevo Encuentro y no vamos a caer en ninguna trampa argumental que esconde lo central, que es lo sencillo: poder habilitar la participación popular en la selección de algunos consejeros de la Magistratura. Porque cuando hablamos del Poder Judicial, para nosotros, la democracia no es el punto de llegada sino que es apenas el punto de partida. Es mucho más lo que tenemos para esperar de la Justicia que de la democracia que, en realidad, es un presupuesto adeudado, como dije, por lo menos, desde 1789.

Por estas razones y por las que han sido expuestas por el bloque oficialista, nuestro bloque va a apoyar este proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Borello.

Sra. Borello. – Señor presidente: no voy a hacer un análisis técnico de estos proyectos porque ya se ha hecho y, probablemente, seguirá haciéndose. Yo quiero hacer algo de historia para llegar a fundamentar lo que realmente pienso sobre esta reforma de la justicia y sobre la trascendencia que ella va a tener en este país.

En realidad, parece que la sucesión de hechos que se están dando, de autoritarismo y de ruptura del orden y del equilibrio institucional, a lo largo de la historia argentina son repetitivos. Si miramos nuestra vida histórica política, podremos visualizar una serie de acciones y movimientos que se dieron para apoderarse de las instituciones de la democracia. Son fenómenos que, en realidad, se resisten a abandonar la vida de nuestra Patria.

– *Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del H. senado, senadora Beatriz Rojkes de Alperovich,*

Sra. Borello. – Vemos cómo este comportamiento totalitario se mantiene en el tiempo y está instalado en la conducta de las más relevantes personas del gobierno nacional, pero este tipo de acontecimientos generan preocupación, sobre todo, en los que nos identificamos con otras tradiciones que están más orientadas hacia gobernar y legislar en defensa y engrandecimiento de la institucionalidad.

En la vida política argentina, hay fenómenos institucionales conflictivos que se reiteran permanente y periódicamente, con la creencia de que tener el poder es imponer la voluntad y la supremacía de un sector avasallando a las instituciones de la democracia para sojuzgar a los que piensan distinto. Lamentablemente, pareciera ser que esta es la dinámica que está arraigada en nuestro devenir histórico y que nos signa desde el principio mismo de nuestra Patria en aquellas disputas históricas por poder que dividieron a los miembros de la Junta de Mayo o que también tuvieron que ver con los conflictos entre gobernantes y caudillos antes de Caseros.

Dentro de este contexto histórico, ¿cuál fue la causa verdadera de aquellas tensiones y violencia que azolaron tanto tiempo en la historia argentina? ¿Cuál es la respuesta? Lograr la hegemonía y el poder hegemónico. Ahora bien, ¿qué significa poder hegemónico? Significa reducir el espacio del otro, desconocer la legitimidad de la opinión del que piensa diferente, buscar deliberadamente –esto sí es muy importante– romper con el equilibrio de los tres poderes de nuestra querida República, desconocer sus leyes y sus sentencias y así, poco a poco, escalón por escalón, consolidar una razón y una verdad absoluta sin posibilidad de debate.

La imposibilidad de lograr consensos y las constantes discrepancias –manipulación de leyes, intolerancia, etcétera– que recorren toda la historia argentina son los síntomas que estamos padeciendo y que padece fundamentalmente –no es poca cosa– nuestra frágil democracia. ¿A causa de qué? Del totalitarismo que tiene nuestro gobierno, como una tendencia que poco a poco va comiendo las bases de lo que es nuestra República.

Esa intolerancia en el devenir de estos tiempos históricos en nuestro país cosechó terribles frutos en 1976. La sistemática eliminación de todas aquellas personas que eran consideradas opuestas, contrarias y adversarias tan solo por tener una idea diferente o ideas políticas distintas, hizo que la década del setenta se convirtiera en uno de los períodos más tremendos de la historia argentina. Hoy hay un montaje casi malicioso y en nombre de la democratización de la Justicia se instala en nuestro país nuevamente, tiranizando la independencia de los tres poderes constitucionales, pero con otros protagonistas y otros métodos.

El concepto de democracia queda solo instalado en la retórica de quienes nos gobiernan, pero nunca se ve en los hechos. ¿Qué nos demuestran aquí? La ausencia de una convicción auténtica sobre lo que significa la responsabilidad gubernamental. Por lo tanto, considero que la democratización de la Justicia es una frase demasiado grande para un plan tan pequeño. ¿Pero por qué digo tan pequeño? Porque me refiero a los intereses que lo motivan. Todos conocemos las derivaciones jurídicas, técnicas y procesales que genera esta reforma y las que están por venir, pero también sabemos que el fin último de esta cruzada no es otro más que la satisfacción de una gran voracidad de poder. Y esta es la paradoja fundamental. Se ponen en riesgo las bases del sistema para todos los habitantes de la Nación, quienes asisten impotentes a esta reforma solo para calmar la creciente necesidad

de acumular y concentrar poder. Y lo que es más grave es que esto se hace en nombre de la democracia.

El accionar kirchnerista oscurece el contenido de la democracia republicana. Así lo veo yo. Cuando el gobierno utiliza la palabra democracia, significa lo que quiere que signifique de acuerdo al caso, a la circunstancia o a los intereses personales.

Este despotismo históricamente tiene mucho en común con otros regímenes totalitarios, se parece mucho a las monarquías absolutas cuya mayor expresión ha quedado plasmada en la historia con lo que decía Luis XIV: “el Estado soy yo”; o con aquellos totalitarismos europeos del siglo pasado que concentraban el poder de manera absoluta, con una modalidad de supremacía ejecutiva que transformaba las instituciones en un simple ropaje de un gobierno personal.

Quiero citar lo que decía Tocqueville, quien hablaba de la tiranía de las mayorías, un riesgo que hoy considero casi presente. Explicaba también que una elección democrática por sí misma no asegura un ejercicio democrático de poder y que la historia muestra muchos casos en los que incluso se ha producido todo lo contrario. Pero siguiendo esta línea de pensamiento, la democracia republicana puede transformarse en una dictadura plebiscitada. Y si en ejercicio del poder se actúa sin respetar las instituciones, la democracia deja de ser tal para derivar en un cesarismo plebiscitado, según Max Weber, y en una autocracia elegida, de acuerdo al politólogo Michelangelo Bovero.

Dice Giovanni Sartori: los adversarios de la democracia no han encontrado otro medio mejor para desvirtuarla que hacerlo en su propio nombre.

El gobierno nacional, que tiene un concepto tan particular del sistema democrático, no es ajeno a la desvirtuación y a la deformación del concepto de democracia en general, su sistema y su contenido.

Con relación al poder hegemónico, este gobierno ha estado permanentemente tentado por un modelo de práctica autoritaria. Los conflictos del Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial han sido recurrentes y constantes. Por eso digo que hemos sido testigos del enfrentamiento entre los dos primeros, cuando las leyes en este Congreso se imponen a libro cerrado, sin búsqueda de consensos; cuando el control de la gestión pública por parte del Congreso de la Nación también está seriamente deteriorado por los numerosos informes cuyo tratamiento está demorado.

Señora presidenta: digo que es el tema clave que las desconsideraciones y ataques al Poder Judicial han sido permanentes y a veces descalificadoras. El Poder Ejecutivo no cumplió con varias sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en materia de ajuste de haberes jubilatorios, por ejemplo; un tema tan sensible como es el de la jubilación. La obligación de rendir cuentas, que es un ejercicio y un principio axiomático de todo gobierno que pretende ser democrático, es en la Argentina una extraña práctica. Se genera de ese modo un sistema político crispado, donde el poder hegemónico tiene la posibilidad de usar el Estado a su antojo y hacer una verdadera cruzada contra los infieles, preservados de todo cuestionamiento moral, político y ahora judicial.

Por eso, la sociedad argentina debe fundamentarse en la revalorización de la democracia como un sistema que jerarquice la tolerancia, la racionalidad, la búsqueda de las soluciones pero dentro de la ley, en la vigencia de una moral austera que atienda primordialmente la situación de los postergados y en criterios flexibles y equilibrados que

permitan encarar con éxito todos los desafíos y exigencias que enfrenta el país en estos momentos.

Llegar a la construcción de la cual estoy hablando implica superar pautas: pautas culturales, pautas de comportamiento que han significado en nuestra historia obstáculos insalvables, tanto para la convivencia pacífica como para la identificación de ciudadanos con normas fundamentales de la República, con el progreso social y económico y la distribución equitativa de la riqueza.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Vaya terminando, señora senadora.

Sra. Borello. – Ya voy terminando, señora presidenta.

Como propuesta central, es necesario reforzar los mecanismos de control sobre la clase gobernante, las facultades regulatorias y de supervisión, cuidar del funcionamiento de las instituciones de contralor y de auditoría, vigorizar el sistema de equilibrio, frenos y contrapesos que impidan el abuso del Estado en los que suele caer a veces el gobierno populista en la Argentina y en Latinoamérica.

Se dice, señora presidente, que el proyecto tiene la excusa de acercar la Justicia al pueblo o democratizarla. Lo único que...

Sra. Presidenta. (Rojkes de Alperovich). – Senadora, disculpe, pero faltan tantos oradores...

Sra. Borello. – Termino, me faltan dos segundos, señora presidenta.

Creo que lo único que se pretende es lograr mayor impunidad y el control absoluto del único poder independiente hasta ahora que es el Poder Judicial. La democratización de la Justicia es el “caballo de Troya” donde se ocultan los verdaderos intereses totalitarios y antidemocráticos que en realidad esta reforma pretende.

Por eso, señora presidenta, y ya termino con esto, resulta indispensable antes de seguir avanzando, convocar a todos aquellos que se inclinan a respetar las convicciones y manteniendo la independencia política a adherirnos a los principios básicos de nuestra Constitución Nacional, la independencia y sobre todo el equilibrio de los poderes republicanos.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta(Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. – Señora presidenta: en primer lugar, nadie puede estar en desacuerdo con el concepto de democratización de un poder. Creo que acá ningún senador está en desacuerdo. Porque en la medida en que el poder llegue a su mayor democratización, mayor equilibrio, mayor representación, obviamente, le da más tranquilidad a la ciudadanía y consolida un sistema republicano.

Ahora bien, en el proyecto que hoy estamos tratando creo que debemos analizar distintas facetas desde su constitucionalidad a si realmente avanza en el sentido en el que hablamos.

Creo que lo peor que podemos hacer como legisladores, a veces, es tratar una ley y que atrás de esa ley veamos intenciones buenas o intenciones malas; nos podemos equivocar. Creo que una ley debe analizarse como un instrumento jurídico que el poder actual o el poder que venga o el poder del futuro pueda utilizar para facetas que no son acordes a la Constitución. O sea, debemos ver a la ley como una normativa de proyección al futuro y si es un instrumento que equilibra o no un sistema republicano.

¿Hay algún sistema infalible de designación de jueces, de jurados de enjuiciamientos, de reglamentación, de procesos de destitución? Si uno analiza el derecho comparado y las distintas constituciones, nos vamos a dar cuenta de que no hay un sistema en que uno diga: este es el sistema. De hecho, por ejemplo, Gran Bretaña, si uno analiza su poder judicial, prácticamente lo designa el Poder Ejecutivo de turno. En Bélgica lo designa el propio Poder Judicial. En distintos países de Europa, por ejemplo, Francia, España, hay una intervención del Poder Ejecutivo con el Consejo de la Magistratura y más aún, la constitución le da al Poder Ejecutivo el deber de garantizar el Poder Judicial. Estados Unidos tiene un sistema, como sabemos todos, que prácticamente era el anterior nuestro, de participación del Poder Ejecutivo y del Congreso. Nuestro sistema es de participación del Poder Ejecutivo, Consejo de la Magistratura y Poder Legislativo. No podemos analizar si esto es bueno o es malo. Tengo que hacer, brevemente, historia y debemos recordar que en la reforma del 94 hubo una intención.

Con el anterior sistema varios estaban de acuerdo y había un equilibrio por distintas facetas que no vienen al caso reseñar por razones de tiempo. Pero se decidió este camino y ahí se hizo esa famosa reforma al artículo 114 del cual ya vamos a hablar.

Si uno se acuerda de los debates en la Convención Constituyente la palabra permanente era que debía existir un equilibrio entre los órganos políticos y el sistema judicial, y así se hizo.

Si uno ve el artículo 114, es muy claro y ahí considero que hay que hacer un análisis por el cual tengo un desacuerdo con el miembro informante que dice que de ningún lado surge que no puede haber votación popular en todos los integrantes.

Fíjense que la palabra que utiliza es el equilibrio entre la representación de los órganos políticos y de los abogados, jueces, científicos, etcétera. O sea, le da la categoría de órgano político a la representación de partidos que son quienes llevan a los legisladores y de ahí el equilibrio con los dos poderes, con los jueces, abogados y científicos.

En el momento en que estamos haciendo una representación por votos uno puede decir si está de acuerdo o no. Y como representación popular uno puede aceptarlo, pero en el momento de llevar a todos los representantes únicamente a una elección a través de un partido político, no debemos negar que ese consejero, nos guste o no, será legal si es aprobado, va a representar a un partido político, a un órgano político. Ese es el tema que muchas veces nos preocupa porque va a existir el compromiso partidario con la mayoría, con la minoría. Ahora o en el futuro quien vaya de candidato va a tener un compromiso partidario.

Desde ese punto de vista creo que no estamos cumpliendo el artículo 114 porque acá todos los representantes del Consejo de la Magistratura, independientemente de que sean jueces, abogados o científicos, van a representar a un partido político. El partido político es quien lo va a llevar a la elección. El va a hacer su campaña desde su partido político, va a tener el mandato, la plataforma según lo que crea, y yo pienso que ahí es donde nos equivocamos.

Eso sumado al cambio de números, que ya se había discutido que era bueno bajarlo y con argumentos muy razonables, y con una representación por la que, quien gane la elección, va a tener prácticamente mayoría absoluta. Si uno hace los números va a ser un trece a seis. Existe ya el mandato y el gobierno del Consejo de la Magistratura. Eso no lo podemos negar. Esto no es bueno para ahora y tampoco para el futuro.

Señora presidenta: también le quiero agregar un aspecto federal. Si uno hace el análisis de representación, del número de electores, el del padrón electoral nacional, debo decir que desde el punto de vista práctico, nos puede gustar o no. En lo personal no me gusta, pero las provincias más chicas e inclusive medianas, nos despedimos para siempre de llevar un representante al Consejo de la Magistratura. No voy a dar los números exactos ahora porque sería alargar la exposición pero no tenemos la más mínima posibilidad de que las provincias medianas y chicas llevemos un representante; nos olvidamos mientras exista esta ley.

Respecto del anterior sistema, con el cual yo estaba de acuerdo –el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo– algunos decían que era desequilibrante pero había muchos mecanismos de equilibrio que ahora se vacían doblemente, porque con una mayoría prácticamente de quien gane una elección, más una mayoría que nunca va a tener una representación de una provincia chica y/o mediana, y más las atribuciones que vemos en la ley, donde el aporte prácticamente queda nada más que como un sancionador de sentencias, creo que es un desequilibrio que institucionalmente nos debe preocupar.

Estas son las razones, señora presidenta, por la cual no puedo acompañar el proyecto de ley en consideración.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Artaza.

Sr. Artaza. – Señora presidenta: asistí a la presentación de este proyecto del Poder Ejecutivo con la esperanza de que bajo este título de democratización de la Justicia se incluyera un paso que me parece fundamental para la Justicia, como es el sistema oral. Creo que es un paso trascendente, con experiencias que se están realizando en otras provincias y aquí en la Capital de la Argentina. En ese sentido, hemos trabajado con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales en un proyecto que hemos presentado, el S. 985/12, de mi autoría. Y aquí también hay otros del senador Guastavino y del senador Sanz, de nuestro bloque.

Me hubiera gustado mucho que esos proyectos de cambio del sistema para agilizar la Justicia estuvieran contemplados en estas propuestas del Poder Ejecutivo, pero no lo están. Están absolutamente ausentes de la propuesta del oficialismo. No entiendo cómo no están, cuando se habla de participación de la gente en el sentido que establece la Constitución Nacional, cuando por el contrario estamos analizando este proyecto, por lo menos extraño. Digo esto, porque uno cree en la importancia de la democratización de la sociedad y en la inclusión de nuevos ámbitos donde uno pueda elegir y ser elegido. Para eso tenemos la democracia para siempre, desde 1983. Puedo hacer mención también de que cuando hablamos de democratización, en ese sentido hay otros proyectos de ley –incluido uno de mi autoría– proponiendo la democratización de las obras sociales, por ejemplo, con el objeto de reconocer el derecho al voto de los afiliados a cada obra social, en vez de que su conducción sea establecida únicamente por el sindicato con personería gremial.

Entonces, creo en la necesidad de profundizar la democracia, pero este proyecto no apunta a dar más democracia, sino a concentrar el poder en una sola mano. Pensamos en votar en una misma boleta al controlador y al controlado. Por eso, entiendo que esto implica lesionar la división de los poderes.

De alguna manera, se ha escuchado en la oposición que esto significa politizar la Justicia. Tal vez, no puedo coincidir totalmente con ese concepto, pero lo cierto es que no les damos oportunidades a las minorías. Y las estructuras partidarias o de gobierno pueden

tener muchísima ventaja en este mecanismo de participación. Así, por lo menos vamos a instaurar –me da la impresión– un mecanismo tergiversado.

Desde mi punto de vista, no corresponde que no sean abogados los que van a elegir al representante de los abogados. Como no me corresponde a mí elegir al representante de los abogados, de los jueces, de los académicos. Sería un caso insólito, donde se pretende que un tercero elija a los representantes de otro, en vez de ellos mismos.

Si ese razonamiento fuera válido –algo al respecto señaló recién el senador Pérez Alsina– podríamos plantear aquí la idea de elegir a los senadores de cada provincia por el voto universal de todo el país, por ejemplo. Es como si para elegir al senador de Río Negro o de Corrientes se estableciera que debe ser rionegrino o correntino, con residencia en la provincia, y se estableciera que todo el país debe votarlo. Nadie dudaría que los bonaerenses serían los principales electores de esos senadores, y éstos tendrían enormes dificultades para enfrentar en el plano legislativo a los intereses de la provincia de Buenos Aires. También desaparecería de ese debate toda temática local.

Por eso, entiendo que democratizar es otra cosa. Quiero leer a continuación algo que menciona Norberto Bobbio, filósofo italiano, en su libro “Futuro de la Democracia”. Y en esto quiero puntualizar lo que decía el miembro informante del oficialismo, el senador Fuentes, dado que nosotros no le tenemos miedo a la voluntad popular. Al contrario. Pero Bobbio decía en dicho libro, que tras la conquista del sufragio universal, si se puede aun hablar de una extensión del proceso de democratización, esto debería encontrar no tanto en el tránsito de la democracia representativa a la democracia directa, como suele creerse en general, cuanto en el tránsito de la democracia política a la democracia social. Es decir, no tanto en la respuesta a la pregunta de quién vota, cuando la respuesta a esta otra: dónde se vota. En otras palabras –sostiene dicho autor– cuando se quiere saber cuál ha sido el desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería comprobar si ha aumentado no el número de aquellos que tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan, sino los espacios en que pueden ejercer ese derecho. En todo cuerpo de representantes se deben hacer dos preguntas: Cómo se sostiene; Cómo lo representa y qué representa. Hoy estamos aquí, en la segunda pregunta, o sea, ¿qué representan los miembros del Consejo de la Magistratura? La pregunta acerca de qué representa, puede ser bien dirigida a los intereses generales de los ciudadanos, o bien respecto a los intereses particulares.

En ese sentido, Bobbio sostiene que si el representante es llamado a representar los intereses generales del representado, no es necesario que pertenezca a la misma categoría profesional. Tanto es así –sostiene– que en la mayor parte de los sistemas representativos existe una categoría profesional específica de los representantes en ese sentido, que es la categoría de los políticos de profesión. Cuando, por el contrario, el representante viene llamado a representar los intereses de categoría, pertenece, por lo general, a la categoría profesional de los representados, en que sólo el obrero puede representar eficazmente a los obreros, o el médico a los médicos. En las elecciones políticas en que funciona el sistema representativo, un obrero comunista no vota al obrero no comunista, sino a un comunista, aunque no sea obrero. Quiere decir esto que la solidaridad del partido y, por lo tanto, la visión de los intereses generales, es más fuerte que la solidaridad de categorías. Y, en consecuencia, que la consideración de los intereses particulares.

Yo creo que en el Consejo de la Magistratura conviven dos tipos de representación. Unos representan el interés general, y otros representan intereses particulares, como los jueces y los abogados, que son los que conviven a diario en los tribunales.

Pero este proyecto, llamado de democratización, es extraño. De los siete miembros del hoy Consejo de la Magistratura que representan los intereses generales, seis son elegidos por los bloques parlamentarios y uno por el gobierno nacional. Siempre habrá cinco de siete que pertenecen al oficialismo. Uno se pregunta por qué no se pretende que éstos sean los electos por el voto popular. Pese a representarlos, sobre ellos no pesa la votación sobre la designación directa. Aquí se podría haber trabajado en este proyecto. Y en cambio, otros son los representantes de los dos sectores particulares que argumentan en los tribunales –los jueces y los abogados– y como tales es natural que pertenezcan a la misma categoría que representan.

Siempre los representantes de los intereses particulares son elegidos por los representados y es electo uno de ellos. ¿Se imaginan una elección en un sindicato por el padrón nacional, aun cuando el electo debiera ser un afiliado a ese sindicato? Nadie tomaría en serio esas elecciones, porque tendríamos que votar todos para ese padrón del sindicato.

Si el gobierno quisiera democratizar, estaría impulsando –por ejemplo– la democratización de los sindicatos en las obras sociales y en el PAMI; y estaría permitiendo que las empresas con participación del Estado tengan directores elegidos por el voto popular; estaría proponiendo hoy que los miembros del Consejo de la Magistratura que elige el Poder Ejecutivo y este Congreso fueran electos por el voto popular; generaría nuevos canales de participación y toma popular de las decisiones que hasta hoy tienen en sus manos. Pero nada de esto sucede en estos proyectos, señora presidenta. Solo busca que quien tiene poder tenga más, y que el ciudadano común, de a pie, tenga menos. Creo que si hablamos de democratización, debemos pensar en los sectores más vulnerables, para que tengan acceso directo a la Justicia.

Obviamente, por todas las consideraciones que ha tenido el miembro informante de nuestro bloque así como por las que otros senadores van a seguir ampliando en la oposición a esta modificación del Consejo de la Magistratura, desde el radicalismo votaremos en contra de este proyecto. No obstante ello, debo hacer una consideración: a pesar de todo lo que estamos debatiendo, me queda la esperanza. No puedo compartir algunos conceptos como “golpe de Estado”, “totalitarismo” o una consideración gravísima de estos proyectos, porque nos queda aún el debate, la reflexión en este Senado y las modificaciones que, con lucidez, puedan hacerle los señores senadores, sobre todo del oficialismo, que ayer han recibido de alguna manera un fuego amigo, una crítica importante y que han aceptado hacer cambios en el proyecto que posteriormente vamos a considerar. Y todavía me queda la esperanza del debate, de las modificaciones que puedan hacerse y de la votación final en la Cámara de Diputados. Los argentinos debemos saber que felizmente tenemos la democracia. Si en esto nos estamos equivocando –como decía el senador Pérez Alsina–, tenemos el ejercicio pleno de la soberanía de la democracia para cambiarlo.

Para terminar, señora presidenta, llamo a la reflexión del oficialismo porque sabemos que van a caer en inconstitucionalidades y, seguramente, habrá miles de presentaciones de inconstitucionalidad. La última instancia que tenemos, dándole juego al sistema democrático, es la Corte Suprema de Justicia, que es el último intérprete de la Constitución de la Nación. Por eso, tengo la esperanza de que muchos de estos proyectos

no avancen. Trataremos de aportar nuestra crítica para hacerles entender la equivocación en estos proyectos.

En consecuencia, seguiremos ampliando en todo este debate nuestra disidencia con los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, desde nuestro bloque no vamos a acompañar esta iniciativa.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señora presidenta: al igual que mis compañeros del Interbloque, voy a intentar fundar sintéticamente mi voto negativo a este proyecto que tiene muchísimas observaciones que aquí se han hecho acertadamente.

Quiero referirme un poco a la ideología. El señor miembro informante del oficialismo le dio el toque ideológico al porqué de esta ley. Él nos dice que esta democratización de la Justicia está para expandir derechos y eliminar privilegios. Él nos anuncia una especie de liberación. Estamos en un gobierno, en un proceso, en un modelo de liberación –con lo cual me hace acordar mucho al modelo bolivariano–; o sea, están refundando y liberando el país y a América, cuando aquí lo que se ha dicho es que esta democratización suena más a domesticación.

Es una antigua dialéctica, la dicotomía entre los buenos y los malos, lo popular y lo antipopular. Resulta que ahora quienes estamos haciendo observaciones a este proceso seríamos los que respondemos al colonialismo, ya que el gobierno libera y hay sectores del conservadorismo que se oponen. Puestos en esa dialéctica tan antigua –obsoleta, diría–, nos hacen creer que en esa refundación quienes son enemigos del cambio son enemigos de la revolución.

A esta altura de mi experiencia y de mucho más –no quiero decir de mi edad, por supuesto, pero siempre nos corregimos con el tiempo–, la historia me ha enseñado que en los últimos cien años, por no decir más, las grandes revoluciones –la rusa, la china, la cubana–, más allá del éxito que tuvieron, se han fundado en dos pilares fundamentales. Uno de los pilares fue la sangre, que fue el enfrentamiento y la eliminación de los enemigos. A mí no me gusta a esta altura esa justificación. Y el otro pilar en el que se fundaron fue la falta de libertad. Por supuesto, desde ese ángulo dialéctico para lograr el nuevo hombre, la felicidad o la igualdad tan buscada por el ser humano y tan poco encontrada, hacía falta cercenar la libertad y eliminar a los adversarios u oponentes.

Estamos muy lejos de necesitar de ese tipo de dialéctica, que era la de la confrontación y el enfrentamiento. El general Perón nos enseñó a los peronistas otro tipo de revolución. Él nos hablaba de una revolución en paz, en la armonía de las clases sociales; lograr la transformación y el progreso a través del tiempo, de la evolución, obviamente, reconociendo todos los derechos nuevos, los derechos del pueblo y de los trabajadores, como lo hizo Perón tan acertadamente.

Pero nosotros necesitamos ahora unificar los ánimos, no seguir dividiéndolos; de lo contrario, se trata de una suerte de mesianismo en el cual un grupo de más elegidos –ya sea por el 54 por ciento o por las clarividencias de sus pensamientos– son una especie de vanguardia que nos mira desde arriba a todos los que no pensamos como ellos y nos discriminan por ser, por distintos motivos, enemigos del futuro, del éxito, casi, de la Patria.

Yo no veo que esta sea la forma. Como decía Joaquín V. González en un libro citando a un autor norteamericano: Ningún pueblo de la Tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia. Nosotros no creemos que sea al revés, que haya

que asegurar primero la igualdad, supuestamente, para que después haya justicia o libertad. No es el modelo para los justicialistas ni es el modelo de país que debemos tener.

Por supuesto que hubo muchísimas situaciones. Desde 1860, cuando el mitrismo triunfa con la provincia de Buenos Aires, desde ese momento, comienzan los cambios en la Corte Suprema. Y de ahí hasta ahora, ya sea por un golpe militar, por la restauración democrática, ya sea por la ampliación del número de la Corte, no hubo presidente desde 1860 hasta ahora –hay muy pocas excepciones– que se haya abstraído de la tentación de nominar, de nombrar miembros en la Corte.

También tuvimos cortes que convalidaron golpes de Estado. Pero eso ya pasó. Y también se festejó aquí cuando el kirchnerismo, con presión, reemplazó supuestamente una Corte perversa. Fue un reemplazo aceptado por la dirigencia política, por las renunciaciones sacadas con presión. El tiempo dirá si esto fue acertado o no. La inestabilidad en la Argentina es una norma, ese es el problema. La inestabilidad económica, la inestabilidad política, la inestabilidad de rumbo, que es la más grave, porque lo que nos parece hoy bueno mañana es malo, y viceversa.

Por eso creo que toda esa argumentación dialéctica es obsoleta. No creo en eso. Yo creo que se pueden hacer –si quisiéramos llamarlo así– mil formas de democratización en serio de la Justicia o los procedimientos judiciales. Incluso, se podría formar el Consejo de la Magistratura por elección, pero apartada de las fechas de elecciones partidarias, apartada de los partidos políticos, financiada por el Estado, por supuesto. Si el Estado quiere democratización, tiene que pagar las elecciones. Entonces, habrá un grupo de abogados y de magistrados que harán la lista “azul y blanca”, la otra “verde y roja” y, bueno, será otro proceso, en fecha distinta. Si hubiera un buen control y honestidad en el procedimiento en cuanto a no querer utilizar esa elección para que los partidos las controlen, serían los ciudadanos que pueden ser informados y, tal vez, con el tiempo, se perfeccione el sistema pero no en la forma en que se está haciendo.

No voy a hablar del número –si son muchos o pocos– porque ya ha variado tantas veces acá. Lo que sí me parece una cosa muy seria es que tenga una apariencia de liviandad o de simpleza la destitución por simple mayoría. En muchos años de actividad pública y en el Derecho Público argentino, no hay ninguna destitución que se haga por simple mayoría. Si alguien la conoce, que me la diga. Que yo sepa, en mi provincia, hasta para reemplazar al secretario de la mesa del Concejo Deliberante de la ciudad, hacen falta dos tercios; para remover a un juez de faltas, hacen falta dos tercios. Todos los cargos de la Constitución provincial en mi provincia se remueven por dos tercios, y aquí vamos a remover a los jueces por simple mayoría.

Realmente, va a ser más fácil echar al juez que a un ordenanza del mismo juzgado porque el ordenanza tendrá un sumario que no va a afectar su buen nombre y honor; terminado el sumario, tiene derecho a un juicio. Pero un juez destituido no tiene derecho a nada. Tantas veces hemos hecho normas y leyes protegiendo la estabilidad del empleado público que es del caso resaltar que, sin embargo, los jueces no tienen estabilidad. La Constitución –y así lo dice Joaquín V. González– opta por la inamovilidad de los jueces, que es otra cosa. No es la estabilidad, es la inamovilidad. Y la Constitución del 53 previó un mecanismo que al final puede haber resultado engorroso, pesado, pero lo que hemos creado del Consejo de la Magistratura tampoco es ninguna maravilla.

Es cierto que todos votamos la aprobación de la reforma constitucional, pero nos opusimos a muchísimos artículos. Una de las cosas que quisimos cambiar muchos convencionales fue el tema del Núcleo Básico, sobre todo, en dos puntos: el de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el del Consejo de la Magistratura. Fue imposible hacerlo. Son esas cosas de las que a veces nos enamoramos los argentinos y, entonces, copiamos instituciones.

Hemos copiado también la figura del defensor del pueblo; la del Consejo la Magistratura...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – El senador Fuentes le pide una interrupción, señor senador.

Sr. Romero. – Sí, señor senador.

Sr. Fuentes. – Senador: simplemente, creo que media un error en lo que usted está diciendo. El Consejo de la Magistratura no destituye jueces: los destituye el *jury* y este no ha sido modificado. Sigue teniendo la misma composición, las mismas mayorías y la misma forma de designación por sorteo de los miembros, tanto de la Colegiación, como de la Magistratura, como los legisladores. De ninguna manera estamos destituyendo magistrados. Es el *Jury* el que los destituye.

Sr. Romero. – Entonces, ¿para qué alteramos la mayoría en la promoción de la acusación? Yo creo que igual estamos alivianando el proceso, lo cual me da la impresión de que aquí, más que tratarse o trabajarse la preocupación por la designación de los jueces, se está haciendo más simple o más sencilla su destitución.

Ya se dijo, pero voy a reiterarlo: durante este gobierno, se han designado 400 jueces sobre 730. Es un 54 por ciento. Este gobierno seguirá designando jueces, como corresponde, hasta que termine su mandato. ¿Para qué hacer más fácil la acusación? ¿Para qué bajar esa mayoría? Cuando el Derecho Público argentino no apunta en ese sentido.

No creo que aquí estemos mejorando la celeridad ni la eficiencia tanto del Consejo de la Magistratura como de la Justicia. No estamos mejorando la transparencia, ni estamos mejorando el servicio público, que son las tareas que deberían estar preocupándonos. Estamos dando vueltas de tuerca para ver cómo, de alguna manera, alteramos las instituciones a efectos de que quede esa sensación.

Puede ser, como dijo el senador, que esa no sea la intención. Pero tanto yo como muchos argentinos tienen la sensación de que aquí, más que una preocupación por mejorar el servicio de Justicia, estamos buscando la domesticación de los jueces porque dependen de la mayoría absoluta de la mitad más uno. Ya no dependen de la decisión de los dos tercios sino de la mitad más uno de un conjunto de personas elegidas al mismo ritmo que las mayorías electorales.

Quiero saber qué tranquilidad puede tener un juez, cuál puede ser su estabilidad emocional y su capacidad de decisión cuando aquí, lo que necesita ese funcionario esté tanto para defender a los ciudadanos como para defender el derecho del Estado: para defender al Estado del abuso de los ciudadanos y para defender a los ciudadanos del abuso del Estado.

Eso es lo que se debe buscar, señora presidenta, y con esto he fundado mi voto en contra de este proyecto.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Vera.

Sr. Vera. – Señora presidenta: trataré de ser muy breve y lo más sencillo que pueda.

Lo primero a lo que me voy a referirme es que para mí, lo esencial de este proyecto de modificación de la integración del Consejo de la Magistratura y de modificación de la forma de elegir a los consejeros es que cambia –a mi juicio– el modelo que había contemplado la Constitución y que, más allá de su perfección o no, intentaba que estos elementos que tienen tanta importancia en la selección y en la calificación necesaria para el juicio político de los jueces o no goce de cierto equilibrio.

Cuando se manda esto, es porque somos conscientes de que la Justicia, según nuestra Constitución, debe ser independiente; y de que la independencia se pierde cuando hay influencia. Acá se habla mucho de las corporaciones. Se descalifica todo, en general. Pero –decía– esa independencia se pierde en mucho –a veces, toda, excepcionalmente– cuando hay una dependencia muy fuerte de un poder capaz de tener la facultad de ingresar o de ayudar al enjuiciamiento de un juez.

Para mí es muy sencillo. Este modelo que ha elegido el Poder Ejecutivo busca terminar con esa independencia en la medida en que los señores consejeros van a ser elegidos por los partidos políticos. Del mismo modo que vemos acá –y no hay que asombrarse– que el bloque del Frente Para la Victoria vota las iniciativas –salvo excepciones que uno entiende, que las ha habido y habrá– conforme lo pide el Poder Ejecutivo, ¿por qué voy a pensar que estos consejeros no van a votar también el anhelo de quién los ha puesto? Se los puede llamar como se quiera pero los consejeros, ya provengan de la matrícula de abogados, de la Asociación de Magistrados, académicos, o científicos, tienen que ser aceptados e incluidos en la lista del partido político que supuestamente ha ganado una elección. Por lo tanto, van a pasar a ser consejeros de la mayoría.

Yo no le busco mucho la vuelta. Además, tengo la práctica, que intento reforzar todos los días, de razonar sencillamente. El Poder Ejecutivo sabe muy bien lo que está haciendo, le sobra capacidad, ciencia, tiempo, sabiduría y recursos para ser consciente que esto es así y no de otra forma. Aunque se lo disfrace con ese nombre tan noble y tan apreciado en el ambiente “de democratizar la justicia”, sabe las consecuencias que va a tener esta ley. En esto no trato de cometer el error de creer que los otros son ignorantes y otros –en este caso, nosotros – no, que nosotros nos damos cuenta y el Ejecutivo no.

Persigue una justicia que la pueda manejar distinto. ¿De dónde nace esta necesidad? Porque en un modelo como el que practica el justicialismo que hoy lidera la señora Cristina Fernández de Kirchner, que no acepta disidencias ni que la contradigan, es lógico que no está bien que algunos jueces no se hayan dejado doblegar por los anhelos del Ejecutivo y han hecho lo que a su juicio correspondía, pues para eso el Estado, no el partido de gobierno, tiene la justicia.

En cuanto a los jueces, va el mismo concepto de cobrarse la factura por algunas decisiones que han tomado, contradiciendo potestades que les ha dado la ley. Como para mí esto es evidente, creo que no vale la pena, más allá de que incluso nuestras capacidades nos lo permiten, hacer una fundamentación en detalle, queriendo explicar los efectos negativos que tendría este proyecto si se convierte en ley. Para mí, el gobierno, el peronismo liderado por la señora Cristina, sabe perfectamente adónde apunta.

Considero que esto casi se puede calificar –yo lo califico así– de un asalto a la justicia. En el modelo constitucional nuestro, se establece la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo es esto de que los jueces van a tener esa dependencia tan fuerte del partido de gobierno? Vale para hoy y para mañana. Como bien se ha dicho hoy respecto a otras

cuestiones de las que depende el éxito o no del Estado, al Estado lo gestionan los que gobiernan. Yo creo que hay un retroceso institucional. Seguramente, quien venga en el gobierno, no importa de qué partido, tendrá que corregir estas cosas.

No hay República sin una división de poderes. Así como ya hay una fuerte influencia por el modo de elegir a la gente, por lo que fuere, en el Poder Legislativo, que me ha llevado a decir otras veces en el recinto que los debates se vuelven ficción pues ya el Ejecutivo ha concebido el resultado final y, entonces, tenemos que hacer como que debatimos pero no hay disposición, creo que esta ley nos va a llevar a una justicia en grave riesgo de ser afectada en su independencia.

Digo “en grave riesgo” porque son apreciaciones del resultado general. Habrá excepciones, habrá gente que no se va a dejar inmolar por esta iniciativa, que se va a rebelar y tratar de que se cumpla ley. Pero vaya la gracia si nosotros creamos leyes que le permiten al poder, porque se siente defraudado en sus anhelos, remover a los jueces, como ya se ha hecho sin estas leyes. Para qué nos vamos a engañar o vamos a complicar las cosas. Sabemos de qué modo se han removido jueces porque han molestado al gobierno, de qué modo se han removido fiscales. En definitiva, vamos hacia una gran deformación institucional.

Por lo tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical no se va a inmolar con esta iniciativa, pese a que, por supuesto, nos gustaría acompañar una iniciativa progresista del gobierno, como lo hemos hecho en otras leyes, aun equivocándonos. Recuerdo que cuando se recompró o compró –aunque no se ha pagado todavía– el 51 por ciento de las acciones de YPF, dije que el fin era noble, pero que el gobierno podía perseguir un *marketing*. Realmente, la recuperación del autoabastecimiento o la caja de YPF, no sé, después de un año, capaz esté en duda la capacidad para recuperar lo que debió ser YPF.

De modo que está claro nuestro voto negativo. De ningún modo queremos –yo, en particular– engañarnos con fundamentaciones que son –a mi juicio– argumentos para poder sostener el anhelo del Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Morandini.

Sra. Morandini. – Señora presidenta: voy a hacer una consideración personal. La verdad es que aún hoy, con siete años como legisladora, cuando veo las bancas vacías me emociono, pero no estas bancas vacías, sino cuando el recinto está vacío, porque nada simboliza mejor lo que es la soberanía popular cuando en las elecciones cada cuatro años se llenan las bancas que están vacías.

Hoy, hay bancas vacías en otro sentido. Lo bueno cuando hay debate es que estén todos en las bancas y que podamos argumentar, debatir y hacer lo que tiene que hacer este Parlamento, debatir, porque la obligación democrática es que podamos acordar y no que se nos impongan las leyes solo porque se tiene la mayoría.

Yo estrené mi banca como diputada cuando se propuso la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, en 2006. Recuerdo que sentí vértigo, el mismo vértigo que había sentido tantas veces como periodista cuando tenía que escuchar los argumentos de muchos para no cometer errores, escuchando a los que saben, a los que están en disidencia. Cuanta mayor cantidad de gente uno escucha, se corre menos riesgo de no ser ecuanímes, de no ser responsables, de traicionar la confianza de todos aquellos que nos han puesto en las bancas vacías por el voto popular.

Pero hoy no tengo vértigo. Desgraciadamente, se ha hablado acá de estados de sentimientos, de emoción. Ya ni siquiera me pregunto, como me pregunté muchas veces o me dije si estoy de acuerdo en esto. Pero de esta manera no. Hoy no tengo ni vértigo ni duda, porque la manera se ha impuesto.

Se argumentaba recién que tenemos que dar argumentos sencillos. El primer argumento sencillo que uno tiene que preguntarse es cómo se puede democratizar otro poder del Estado si para democratizarlo cancelamos el debate, la posibilidad de fundamentar, ni mejor ni peor que otro, en el corazón de la democracia, donde dialogan los ciudadanos con sus representantes, donde se da el debate público, donde hablamos de lo que le importa a la ciudadanía. Eso se ha cancelado. No participamos en la comisión para no convalidar ese simulacro.

Si uno piensa que el instituto del Consejo de la Magistratura fue consagrado por la reforma del 94 y demoró cuatro años para su sanción en el 98, la modificación del 2006 llevó nada más que dos meses y ahora, un día lunes se anuncia el proyecto y al día siguiente ingresa en el Senado y al tercer día se va a dictamen, la verdad es que a mí no me preocupa cómo le vamos a llamar a esto. Claramente, no es democrático. ¿Cómo puede ser democrático que se invoque la mayoría negando lo que también es nuestra legitimidad porque también estamos sentados aquí por la soberanía popular?

Hoy se hablaba de ir a los archivos y he hecho mucho eso como debutante. He aprendido mucho leyendo lo que argumentaban muchos de los senadores que están sentados aquí. De hecho, siempre me dejó perpleja cómo se puede argumentar en un sentido y en otro con una distancia nada más que temporal. No es jactancia personal. Hoy les podría evitar escuchar lo que les estoy diciendo si nada más leyera que lo que escribí en 2006 cuando estrené mi voz débil en el recinto.

Recuerdo que me preguntaba a mí misma cuál tenía que ser mi mejor voz para no hacer lo que critico: para no descalificar, para no mentir y para contribuir a que efectivamente tengamos una cultura democrática de respeto. En aquella oportunidad, me dije que por débil que fuera mi voz y por escasa que fuera mi influencia en este recinto, no iba a dejar de seguir insistiendo en la necesidad de que construyamos finalmente una democracia basada en el respeto.

La democracia no se define solo por las elecciones; es mucho más que eso. Sobre todo, se asienta sobre valores fundamentales como son la libertad y la justicia. De modo que le agradezco mucho al senador por la bancada oficialista que defiende este proyecto, porque ha enmarcado este debate donde hay que darlo.

Yo no dramatizo ni me gusta la ópera italiana, pero en este momento, estamos viviendo una tensión entre dos concepciones democráticas: una concepción democrática que es la que nos manda nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes; y esta concepción de poder revolucionaria que confunde democracia con revolución, que son dos cosas completamente antagónicas.

Hay que recordar que nuestra democracia, como las democracias europeas después del nazismo, no nació contra un poder monárquico divino sino contra el totalitarismo. Paradójicamente, fueron la dictadura, el terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos los que nos dieron a todos los argentinos la necesidad de vivificar algo que había sido ajeno a nuestra tradición democrática porque siempre habíamos sido autoritarios. Porque tuvimos 50 años de autoritarismo, tenemos tan impregnada la cultura

de poder que se reduce a la mayoría, que no es otra cosa que tener que respetar y consagrar como gobernantes según lo que está escrito en nuestra Constitución Nacional. Las elecciones legitiman a los gobiernos pero el Estado son las leyes y la Constitución Nacional. Los gobernantes no pueden tomar las leyes y la Constitución Nacional como un traje a medida que cada seis, siete o diez años se va arreglando nada más que con una concepción de poder.

Quiero recordar también que no se puede confundir revolución con democracia, porque las revoluciones en el mundo —si no que me den un ejemplo— han terminado siempre en pesadillas autoritarias y totalitarias, incluida nuestra historia. Tenemos que ser honestos. A todos aquellos que invocan con tanta facilidad a nuestros muertos, debo decirles que la forma de honrarlos es que construyamos democracia. No hagamos, como sucedió en los 70, que en nombre de un ideal revolucionario también terminemos en una pesadilla totalitaria. Construcción la democracia es la forma de honrar a los que no están. Lo contrario es la dictadura. Ya no puede servir como argumento lo que nos sucedió en la dictadura para legitimar proyectos de la democracia, porque la democracia también se nos ha llenado de muertos. Ya se ha dicho aquí que tenemos una sociedad movida por muertos.

Se reivindica la intervención del Estado contra las corporaciones por los intereses económicos. Es una forma de vulgarizar la situación porque las corporaciones se limitan con leyes pero también con la participación ciudadana. Venimos de tiempos de oscuridad y la tensión en la democracia es el camino que se hace de la transición al cambio. Cuanto más nos alejamos del miedo, cuando más vamos dejando atrás la ira y el terror, más se van dinamizando los fenómenos que brinda la libertad y no algún gobernante generoso. Es la libertad la que dinamiza los fenómenos nuevos de la democracia. Sucede que en este recinto, lo que dinamiza la libertad se dinamita en nombre de las mayorías. Entonces, cómo no dramatizar.

Yo sí pertenezco a esa parte del país dolida. Reconozco la presencia de muchísima gente de buena fe, pero hay cosas que me perturban mucho y lo tengo que decir en este recinto. Si me perturba una concepción de la democracia revolucionaria que utiliza las reglas de juego de la democracia para imponernos una concepción revolucionaria, mucho más me perturba cuando, a veces, en nombre de esa mayoría, se nos descalifica, se nos mata la reputación y se nos persigue simbólicamente.

A veces, cuando veo con qué facilidad se va a hurgar en las vidas personales —si viaja o no, qué lee o qué no, con quién se come o quién se está—, me pregunto qué nos ha sucedido para que aquellos que sufrimos saquemos de adentro el policía que nos metió la dictadura. Nosotros tenemos que ser mejor que la dictadura. ¡Con qué facilidad se levanta el dedo para patrullarnos ideológicamente! ¿Qué es esto? La democracia es la que legitima el derecho a pensar. Si se piensa de derecha o de izquierda, se tiene el mismo derecho. Hay que argumentar y convencer; no imponer, como se viene a hacer en este recinto.

Pensaba en las cosas que se dicen. Recuerdo que cuando ganó el presidente Néstor Kirchner con el 20 por ciento de los votos, en *Revista 23*, me pidieron que escribiera una columna que luego se convirtió en la nota de tapa. Yo celebraba que por primera vez en la historia de nuestro país alguien que había sacado nada más que el 20 por ciento de los votos —o sea, en contra de esta idea de que las mayorías nos autorizan a todo— se legitimó por la acción. Lo que legitimó al presidente Néstor Kirchner fue la acción vinculada a lo que demandaba la ciudadanía. Por eso es recordado por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación. Él no hizo otra cosa que escuchar la demanda colectiva. Espero que los colegas senadores del oficialismo escuchen esta demanda que está habiendo en nuestra ciudadanía; que escuchen la indignación, para evitar que haya enfurecimiento.

Yo vengo de esa parte de la ciudadanía que se sentó en estas bancas allá por el 2001. Soy hija política del 2001 y no quiero para mi país furia. Indignación sí, porque es el derecho que nos asiste en función de la legalidad y de la Constitución Nacional basada en derechos humanos. Nos asiste el derecho a opinar, a ser minoría y a que no nos persigan.

Si escuchan lo que está sucediendo, verán que en la sociedad hay miedo. De hecho, si pudiera, incorporaría el derecho a vivir sin miedo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Porque nada denigra más lo humano que actuemos como animales, con miedo. En la sociedad argentina, hay miedo y, si hay miedo, el problema no es la sociedad: ese miedo revela un poder despótico. Aunque duelan las palabras duras, no sé de qué otra forma lo vamos a llamar.

Por supuesto que no vivimos en una dictadura. Tenemos libertad para decir que vemos amenazados nuestros derechos y que lo que está hoy en juego no es el número de un Consejo de la Magistratura sino la concepción democrática sobre la que vamos a tener nuestra vida colectiva.

Esto es lo que está en juego. Además, indigna que todo el tiempo, para descalificar nuestras posturas, se nos hacen acusaciones.

Siempre digo, me acuerdo como el santo de una iglesia de Mar del Plata que me enfureció cuando yo era joven. Un santo al que le ponían una moneda y daba la bendición. Yo salí furiosa. Dije “cómo va a ser forma de educar a los niños que el santo sólo da la bendición cuando le ponen la moneda”.

Pobre visión del ser humano se tiene cuando se cree que las personas somos quien nos paga. Los que apreciamos la libertad no actuamos como esclavos, y me duele muchísimo –ya termino, señora presidenta– haber padecido el estigma de ser “la zurda”. Haber perdido trabajos por ser de izquierda, haber estado estigmatizada y hoy reconocer que aquellos que yo creí mis compañeros, tienen una visión de poder, no de igualdad, no de libertad. Con libertad, sólo con libertad, podemos combatir las corporaciones, la injusticia, todo lo que nos pasa. Y el poder, desgraciadamente –esta es la gran lección que deja la historia– desemboca en la pesadilla totalitaria.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señora presidenta: cuando la presidenta, al inaugurar las sesiones ordinarias anunció este paquete de “democratizar la justicia”, yo no salí corriendo ni a decir “estoy a favor” o “estoy en contra”, pero celebré el debate porque, obviamente, no estoy conforme con el *statu quo*. Me parecía que era muy importante volver a discutir el funcionamiento de la justicia. Pero realmente debatirlo como lo hicimos en 2006. Yo era senadora y participé de los debates. Cinco reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales que presidía la senadora Fernández de Kirchner. Dos de ellas para escuchar; escuchamos a los estamentos que componen el Consejo de la Magistratura. Vinieron aquí los abogados a dar su opinión. Escuchamos a nueve organizaciones de la sociedad civil. Estuvo Poder Ciudadano, el CELS, FORES.

Entonces este tratamiento, así, sin debate, escuchando solamente al Poder Ejecutivo, al ministro de Justicia y al secretario me pareció algo totalmente diferente de lo que el Senado vino haciendo, y especialmente en estos últimos tiempos, con debates tan ricos

como fueron los de matrimonio igualitario y de voto joven. Este es un tema importante para la sociedad, y debimos abrir el debate a todos los estamentos y a toda la sociedad.

Lo único que escuchamos es que tenemos un Poder Judicial que viene muy denostado, que representa a los grandes medios, a las corporaciones, a la agro-oligarquía, etcétera. Pero como dijo el senador Romero, de los 730 jueces, 400 han sido designados a partir del 25 de mayo de 2003.

Lo que ha pasado aquí es que hay un cambio de visión, sin lugar a dudas. Eso lo tradujo muy bien la diputada Diana Conti y también el miembro informante por la mayoría. Como el Poder Judicial toma decisiones políticas, tiene que subordinarse a las mayorías, que han ganado las elecciones.

A eso yo respondo con dos reflexiones. Primero –y leo porque esto es textual–: Desde Montesquieu para acá, en la división tradicional de poderes, en los gobiernos de las sociedades occidentales y democráticas, el Poder Judicial es el que equilibra y balancea el sistema, dándole funcionalidad. Segundo: No puede haber gobernabilidad con impunidad o sin un funcionamiento sano y republicano de los poderes del Estado.

Estas dos reflexiones: Néstor Kirchner en sus diálogos con Torcuato Di Tella. Después del derrumbe, teoría y práctica de la política en la Argentina que viene. O sea, obviamente, algo ha cambiado.

Y cuando Di Tella le preguntaba a Néstor Kirchner: ¿Qué entiende por ser progresista hoy en la Argentina, él decía, con un candor que extrañamos verdaderamente, que era la vocación por construir un país normal; que era permitir que el Poder Judicial equilibre y balancee el sistema y permitir un funcionamiento sano y republicano de los poderes del Estado.

Entonces, no se puede construir ese país normal que todos añoramos con este cambio brusco, total, de las reglas de juego para quedarse con la llave de entrada, la vara que disciplina, y la llave de salida del Poder Judicial, como plantea el proyecto que estamos analizando.

Y decía Néstor Kirchner: uno lo cuenta en un país desarrollado y no les entra en la cabeza cómo un hacedor de leyes es el primero en romperlas porque una cláusula constitucional y la decisión de un juez no le gustan. Esto era lo que decía Néstor Kirchner. Una visión completamente opuesta a la del proyecto que hoy nos presenta el Poder Ejecutivo.

Ya se han referido bastante al proyecto. Quiero solamente hablar de algunos temas.

El tema de la elección de los jueces por el voto popular. Yo no tengo problema en la elección de los académicos y de los abogados por el voto popular, y hasta si quieren estar en los partidos políticos tampoco. Pero la elección de los jueces en la lista de los partidos políticos va en contra de todo nuestro sistema público, que dice que a los jueces les está vedada la realización de actividades políticas partidarias.

Esto, que está en un decreto-ley nacional, se repite en las Constituciones provinciales –en la de Córdoba, en la de Mendoza, en la de Misiones, en la de Santa Fe.

Hay otro tema que aquí se dijo, que está el aspecto tan cuestionado del financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de las campañas, y entonces cómo vamos a involucrar a los jueces candidatos en cuestiones sospechosas en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, o en quedar atados con compromisos a quienes les hayan financiado la campaña.

La ley 24.937, la del Jurado de Enjuiciamiento, en su artículo 22 –esto no se dijo todavía– dice que los jueces, legisladores y abogados que integran el Jurado de Enjuiciamiento deben ser elegidos del mismo modo que los integrantes del Consejo de la Magistratura. “Del mismo modo” quiere decir que también elegiremos por el voto popular los miembros del Jury de Enjuiciamiento en la misma oportunidad. ¿Será eso? Porque eso no dice el proyecto, pero eso es lo que dice una ley que no se toca.

El partido político que gane las elecciones presidenciales, como quede a partir de 2015, tendrá la llave de entrada, que es la designación de los jueces; la vara de castigo, que es la sanción de los jueces, y la llave de salida, que es el Jury de Enjuiciamiento. La decisión de someter a un juez a un jury y la decisión de suspenderlo mientras dura el juicio sobre su destitución.

Esto atenta, obviamente, contra la garantía del juez imparcial, no sólo garantizada por la Constitución en su artículo 18 implícitamente sino también por todas las convenciones internacionales que la Argentina ha suscripto y que son parte de la misma por el artículo 75 inciso 22. Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los jueces dejarán de ser imparciales. Estarán siempre mirando qué opina el Poder Ejecutivo de turno, porque tiene la llave de salida y puede ser que me destituya.

El tema más grave del proyecto que analizamos es la eliminación de las mayorías agravadas. Se justifican las mayorías agravadas siempre en la demanda de consensos, en temas que son graves e importantes.

Aquí yo quiero recordar las palabras de la senadora Kirchner cuando fundaba las modificaciones a la Ley del Consejo de la Magistratura, y decía: Una de las cuestiones que receptamos en el proyecto, además de la reducción del número de integrantes, fue precisamente la de conservar las mayorías calificadas de las dos terceras partes de sus miembros para la selección y para la destitución de los jueces del Jurado de Enjuiciamiento, con el objeto de evitar la conformación de mayorías fáciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados. Y seguía diciendo: Una mayoría sumamente agravada para la selección y para la destitución de los jueces es necesaria para dar una mayor garantía de transparencia en lo que respecta a la conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan importantes. Rechazo a mayorías fáciles, garantías de transparencia y búsquedas de consensos. Esos eran los valores que llevaba adelante la senadora Cristina Kirchner. La senadora Kirchner defendía con vehemencia la mayoría agravada y la presidenta Kirchner está dinamitando esas mayorías agravadas.

La exigencia de mayorías agravadas se da en varios artículos de la Constitución: 83, 66, 70, 99 inciso 4) y 86.

Las exigencias de mayoría agravada abrevan en la experiencia histórica que demuestra que la voluntad de permanencia indefinida en el poder comienza a manifestarse en la anulación de todos los obstáculos institucionales que puedan oponerse a tal ambición. El partido ganador se alzaría con trece de los diecinueve consejeros y podrá tomar decisiones con la mitad más uno. Diez le serían suficientes. Pero no. ¡Vamos por todo! Entonces, con trece. Además, se dará un desequilibrio en esta elección ya que se suma a más miembros llegando a 25 integrantes.

Creo que los países más prósperos y los que han vencido la pobreza y la desigualdad son aquellos que han cuidado que los jueces sean incorruptibles e independientes. Esa ha sido la garantía de prosperidad de los países normales que funcionan; ese país en el que todos deseábamos convertir a la Argentina.

Hubiera sido bueno el debate. Hubiéramos podido acordar algunos temas. Mantener la mayoría agravada, tal vez la elección en medio término –sí, ya redondeo, presidenta– y elección de los jueces por fuera de los partidos políticos.

Esto va a tener un impacto directo en las provincias. Las provincias van a copiar lo que se hace en el Congreso Nacional. Y, entonces, las garantías de independencia se pierden.

Quiero terminar leyendo lo que decía alguien que sabía mucho de política, y de política en la Argentina. Hablaba de las bondades de un sistema parlamentario, y decía: Estos estigmas del presidencialismo se acentúan en la gestión de algunos presidentes que creyendo ser la encarnación de la voluntad popular, han tendido a gobernar de acuerdo con un estilo de superioridad frente a los actores políticos y a las otras instituciones del Estado. Muchas veces esto se ha dado en total desproporción con la mayoría limitada del electorado que los eligió, concentrando el poder en sus personas y debilitando a las otras instituciones del Estado y a los partidos políticos. Néstor Kirchner, 2003.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senador Naidenoff: tiene usted la palabra.

Sr. PetcoffNaidenoff. – Señora presidenta: venimos a un debate a tratar un proyecto que va mucho más allá de un simple trámite legislativo para la aprobación de una ley.

Si bien en este momento se trata la reforma del Consejo de la Magistratura, no se puede realizar un abordaje aislado sin reflexionar respecto a la totalidad de los proyectos que han ingresado en a la Cámara alta y que van a obtener sanción en el día de la fecha y mañana, en tiempo récord.

Estas iniciativas presentadas por el gobierno bajo el pomposo título de la democratización de la justicia, paradójicamente no han tenido siquiera un debate mínimamente democrático. Una verdadera hipocresía.

No quiero pecar de reiterativo, pero me parece importante reflexionar sobre algunas cuestiones que se han dicho a lo largo del debate.

Una de las razones que esboza el gobierno con esta reforma es, justamente, la necesidad de poner freno a la incidencia del poder económico sobre la mencionada corporación judicial; pero pierde de vista el gobierno que la justicia debe ser independiente no solamente de las corporaciones económicas sino, especialmente, de la propia política. Y esta reforma viene, justamente, a echar por tierra todo el equilibrio que se logró o se intentó consolidar a partir de 1994 cuando a través del Pacto de Olivos se introdujo entre una de sus cláusulas la creación del Consejo de la Magistratura para que, justamente, los órganos políticos –el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo– puedan tener un mecanismo de frenos y contrapesos y con otros actores –abogados, jueces y académicos– se garantice no solamente idoneidad y objetividad sino, fundamentalmente, un Poder Judicial independiente.

Lo que se hace acá con esta democratización es echar por tierra la independencia del Poder Judicial. Lo que se logra con esta democratización es la partidización absoluta de la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

A mí me parece grave no solamente la partidización de la elección de jueces, porque esto ya es obsceno. Imagínese, presidenta, que para ser juez uno de los requisitos que se establece en el Reglamento de Justicia es no estar afiliado a ningún partido político ya que un juez debe ser garantía de objetividad e imparcialidad. Pero hoy los jueces, más allá de los abogados y académicos, van a ser parte integrante de una lista de un partido político, van a militar por ese partido político, deben aceptar las reglas de la carta orgánica de ese partido político y después dictar sentencia para cualquier ciudadano. Es decir que tranquilamente debe dictar sentencia para un ciudadano que fue parte de la lista del partido que acompañó o para uno que no fue parte de esa lista; entonces, si ha estado en la vereda de enfrente, tranquilamente, puede generar un proceso de recusación. Es decir que la imparcialidad está por el suelo. Una vergüenza. Descabellado por donde se lo mire.

Me quisiera detener en otra cuestión que quizá pasó un poco de largo y que tiene que ver con uno de los aspectos de la reforma. Me refiero al tema de la idoneidad. Aquí se rompe el equilibrio histórico de la idoneidad. Para presentarse como candidato o para aspirar a ser juez basta reunir los requisitos para ser diputado y, simplemente, ser abogado con título habilitante.

Bajo el sistema actual, para ser juez de Cámara se requieren, si se ejerce la profesión, como mínimo ocho años de ejercicio de ella, o seis años para ser juez inferior. Hoy basta con ser simplemente abogado y tener las condiciones para ser diputado nacional. Léase que la idoneidad parece ser un requisito antidemocrático, porque una cosa es ser juez viniendo de la carrera judicial, habiendo transitado toda la escala del Poder Judicial desde coser un expediente, y otra es ser un abogado que recién se recibe y que mañana, por el cambio de mayorías, en el mecanismo de selección, con la mitad más uno de los votos, ya puede ser juez de la República y miembro de la Cámara. Le bastan 25 años y no tener experiencia en el ejercicio de la profesión.

Más allá de que se discutan otras cosas, esta es la democratización que se busca. Desde ya que quizá lo que se busque sea una justicia adicta, una justicia plenamente cooptada, una justicia que responda a los intereses del gobierno y, quizá para muchos, como alguna vez lo ha expresado a través de los medios, como se intentó colocar a un procurador general que reunía como antecedentes o chapa ser un soldado de la causa, ahora basta con ser soldado, ser abogado y tener 25 años. Sinceramente, esto es un despropósito.

No me voy a detener en las consideraciones particulares por respeto al tiempo y porque muchos de los señores senadores ya han hecho referencia al tema, pero sí quiero ratificar plenamente la idea que dejó sentada nuestro miembro informante en el sentido de que se avanza con procesos de contrarreforma de la Constitución: superpoderes, decretos de necesidad y urgencia y leyes de emergencia económica.

Todas las medidas que se fueron tomando tuvieron el propósito de cercenar las propias atribuciones del Poder Legislativo. Es decir, un Poder Ejecutivo cada vez más potente, con cercenamiento de las atribuciones del Poder Legislativo.

Lógicamente, eso se logra con una gran complicidad y una gran abdicación. Me refiero a los miembros del oficialismo que acatan a rajatabla las propias iniciativas del Poder Ejecutivo. Y producen, como algún politólogo lo ha denominado, la mayor abdicación que es, justamente, generar en parte la clausura de un poder, que es gobierno del Estado, acompañando la sola voluntad del líder.

En realidad, eso es lo que se discute. Fue claro el miembro informante. Se discuten dos modelos de entender cómo se gobierna el país. Dos modelos de entender el sistema de gobierno o el sistema democrático.

Esto es un cambio sistémico. ¿Qué pretende el oficialismo? El oficialismo entiende a la democracia, como alguna vez la caracterizó Guillermo O'Donnell, como una democracia delegativa.

La democracia delegativa es aquella democracia que tiene todos los visos de razonabilidad desde el punto de vista democrático, porque el líder, justamente, es elegido por la voluntad popular. Hay visos razonables de herramientas democráticas. Pero entienden que quienes son elegidos tienen el derecho de decidir cómo mejor les parezca el derecho que el pueblo le ha conferido. Y el único límite que entienden los líderes delegativos es el límite que le impone la voluntad popular. Para los líderes delegativos, para las democracias delegativas, los órganos de control, el Parlamento, constituye un estorbo.

Me parece que el miembro informante fue muy claro cuando ha caracterizado sabiamente cuál es la posición del gobierno. Los frutos de la democracia hay que ganarlos. Hoy discutimos soberanía popular. El voto popular. La sustancia es el voto popular; el resto, la cáscara, la forma. Nada mejor que el voto popular para decidir cómo administrar la justicia al servicio del pueblo. Léase democracia delegativa en su cabal expresión.

Nosotros, lógicamente, nos paramos en la vereda de enfrente y no para teorizar sino porque defendemos la forma representativa, republicana y federal porque es la forma por la cual juramos al jurar la Constitución. Y estamos convencidos de que únicamente con la división de poderes, con jueces independientes de la política partidaria se puede garantizar la libertad, la dignidad, el patrimonio y la honra de todos los argentinos. Es la única herramienta. Con la partidización se elige el peor de los caminos.

Para finalizar, quisiera decir que me parece importante reflexionar que en estos treinta años de recuperación de la democracia se ha fortalecido de manera evidente y notoria la democracia electoral. Nadie pone en duda que el sistema democrático pueda estar en riesgo desde el concepto formal; es decir, cuando cada dos años se concurre a las urnas para sufragar. Pero no alcanza. Cuando a la democracia se la vacía de contenido, lo cual implica cercenar derechos de las minorías, de los ciudadanos, y gestamos un Estado omnipotente y autoritario, digo cuidado porque se elige el peor de los caminos.

Como dijo Guillermo O'Donnell, no es ocioso recordar que la democracia también puede morir lentamente; no ya por abruptos golpes militares sino mediante una sucesión de medidas poco espectaculares pero acumulativamente letales.

Por estas razones, votaré en contra de la iniciativa.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senador Basualdo: tiene usted la palabra.

Sr. Basualdo. – Señora presidenta: hemos escuchado muy buenos argumentos técnicos, pero yo voy a hablar más que como senador como un simple comerciante, al que le gusta mucho la parte económica. Cuando en un país alguien viene a invertir, lo primero que pregunta antes de saber cómo está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es cómo está la justicia. Si usted va a comprar un auto usado, lo primero que pregunta es cómo está de papeles. Después se fija si está bueno o malo. Primero se fija en cómo está la justicia. Después se fija si la inversión es buena y si puede tener retorno. Pero la justicia es fundamental. Y eso se puede demostrar técnicamente.

La Argentina es el tercer país de América latina por nivel de PBI. Pero es el sexto en inversiones. Y la falta de inversión se da únicamente por la falta de justicia. Cuando no hay justicia no se quiere invertir.

Los legisladores, antes de hacer política, también vamos a tener que preguntar cómo está la justicia. ¿Qué va a pasar si participo en política? ¿Mañana me van a perseguir si pienso diferente? Si cometo un delito, bienvenido sea, que me persigan y me condenen. Pero no por pensar diferente. El inversor puede perder su capital. Y los que hacemos política, si se la deja en manos del Poder Ejecutivo de turno se puede perder la libertad por pensar diferente. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la libertad. El dinero se puede recuperar, los años de libertad que se pierden es difícil que se puedan recuperar.

Entonces, es grave lo que se va a votar hoy.

Se decía que se quiere mejorar la justicia. Bienvenido sea, todos queremos mejorar la justicia. Pero democratizarla con los mismos discursos de hace cinco o seis años. Y yo voté en contra de aquella reforma porque deseaba los veinte miembros. Y los quería para que hubiera más equilibrio. Me decían que se querían bajar los gastos y que fuera menos burocrática. Pero en la justicia no se gasta, se invierte. Primero hay que saber la diferencia entre un gasto y una inversión. En la justicia se invierte, no se gasta.

Cuando voté en contra porque quería el equilibrio, ahora digo lo mismo. Quiero el equilibrio. Bienvenido sea mejorar la justicia. ¿Pero se la va a mejorar de esta manera? Hay doscientos jueces que no se nombran y hace falta infraestructura. Pero con esto no se hace absolutamente nada.

Me hace acordar a aquel que hoy tiene fiebre y como al día siguiente también tiene fiebre, se enoja y rompe el termómetro. Hay que preguntarse por qué tiene fiebre.

Entonces, ¿por qué anda mal la justicia? En eso es en lo que hay que trabajar. Yo no veo medidas en ese sentido. La justicia está democratizada. Cuando se eligen legisladores nacionales se eligen posibles consejeros. Luego, las Cámaras votan dentro de sus mayorías al más idóneo. Indudablemente, me imagino que no puedo ir de consejero porque no soy idóneo en este tema. Mis pares van a elegir al más idóneo. Me parece bárbaro.

¿Se imagina a un juez que mañana vaya a ser candidato de tal o cual partido? No sé si entra o no, pero si después llega a ese juez una causa de alguien que piensa distinto, ya existirá un manto de sospecha de que no va a ser imparcial. Quizás trabaje perfectamente, pero a todos nos queda la duda. Esa duda no se puede tener. No nos podemos dar ese gusto los argentinos. Debemos trabajar por una justicia digna.

Me gustaría tratar temas de fondo y no quién lo elige. Y esas leyes que se hacen de acuerdo al Poder Ejecutivo de turno, como decía el senador Juez, es perjudicial para ese mismo que lo creó cuando ya no tenga el poder.

Creo que lo peor que le puede pasar al Poder Ejecutivo es que se sancione esta ley.

Se necesita empezar a mejorar la justicia, pero de verdad. ¿Dónde está el déficit? Demos los fondos necesarios, pero que no participe la política de esta manera; que sí participe como lo hace ahora al nombrar a los consejeros.

Creo que se gasta un misil por una medida cautelar que no gustó. Se gasta un esfuerzo grande en tener una justicia digna por un juez que hizo algo que no gustó.

Creo que si se vota esta norma se pierde una gran oportunidad de tener una buena justicia. Y me gustaría que se hable de cómo mejorarla. Indudablemente, creo que hoy se hace un esfuerzo en vano.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senadora Estenssoro: tiene usted la palabra.

Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: quiero adelantar que voy a votar en contra del presente proyecto de ley y de los restantes proyectos enviados por el Poder Ejecutivo el martes pasado a esta Cámara a fin de ser tratados, como ya se dijo, de manera muy urgente, sin debate real en comisión y de espaldas a la sociedad, ya que sus distintos estamentos no han tenido tiempo de expedirse y reflexionar sobre una supuesta reforma judicial de gran envergadura.

Además, voy a votar en contra de este paquete –eso es lo que es, más allá de cada uno de los elementos– porque para mí encierra una reforma constitucional encubierta o implícita. Como el gobierno no puede reformar la Constitución, porque no tiene los dos tercios de los votos necesarios ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, ha encontrado este atajo.

En primer lugar, como ya se dijo, vamos a reemplazar el artículo 1° de la Constitución, lo vamos a violar, ya que estamos modificando el sistema representativo y republicano de nuestra Constitución, dado que este se basa en la independencia del Poder Judicial, en la división de poderes y en el control de unos poderes a otros, lo que se va a modificar sustantivamente.

En segundo lugar, también se viola el artículo 114 de la Constitución –se lo sustituye por otro–, se cambia de régimen porque, justamente, ese artículo –que creó el Consejo de la Magistratura en 1994– quería subsanar una debilidad de nuestro Poder Judicial, una debilidad histórica de ser dependiente, estar demasiado controlado o ser débil frente al poder político y, obviamente, frente al poder de facto de los gobiernos militares, pero también de los gobiernos elegidos democráticamente. Por eso, en 1994 se decidió introducir este instrumento, crear este organismo, para que haya una selección más transparente, *meritocrática*, y que le dé mayor legitimidad e independencia al Poder Judicial, tanto para su elección como para su remoción. Acá, con esta elección, se modifica completamente ese equilibrio y el 70 por ciento de los consejeros va a depender y va a estar en la boleta del partido de la mayoría. O sea que ese Consejo de la Magistratura, más que velar por la transparencia, idoneidad e independencia del Poder Judicial, va a ser una comisaría política o un tribunal popular que va a estar ahí para controlar a los jueces y sus sentencias que cuando no agraden al Poder Ejecutivo podrán ser removidos fácilmente por simple mayoría. Así que este es un cambio de sistema político muy grave.

Además, se viola el artículo 29 de la Constitución, lo que me parece gravísimo. No sé si los legisladores del oficialismo... Ya he escuchado decir muchas veces al senador Pichetto que él no conduce un bloque de libre pensadores, sino que ahí votan y él ha votado con los gobiernos menemista, el de Duhalde y este lo que manda el Poder Ejecutivo con una suerte de obediencia debida y ciega, que a mí me alarma. En verdad, me alarma que estemos cumpliendo 30 años de democracia y que tengamos legisladores que digan esto y que después se arrepienten de lo que votaron. Pero ellos tienen que responder y alinearse con obediencia ciega, incluso, ante proyectos como este del Consejo de la Magistratura que para mí representa una abierta violación del artículo 29 de nuestra Constitución y que

conforma el delito de traición a la Patria. Voy a dar lectura a ese artículo porque me parece muy bien que sepamos qué es lo que estamos haciendo.

El artículo 29 dice así: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.

Según distintos constitucionalistas, lo que quería evitar este artículo es que esta tradición presidencialista autoritaria terminara o desembocara en tiranías o dictaduras legales.

Con la reforma de 1994 se introduce también el artículo 36 de defensa del sistema democrático, donde también se establece el delito de traición a la Patria a quienes se alzarán contra el orden constitucional. Dice así: Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.... Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29.... Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución..., etcétera. Y este artículo de defensa de la democracia asocia...; por eso digo que no solamente está hablando de levantamientos militares o de golpes de Estado, sino de actos que violaran la Constitución y que atentaran contra el sistema republicano, representativo y federal, y también este artículo dice que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.”. O sea que la corrupción también es un atentado contra la democracia.

El fin último de esta reforma judicial, para mí y para la Coalición Cívica ARI, es justamente garantizar la total impunidad de este gobierno, del gobierno kirchnerista. Hay una relación muy cercana entre este control hegemónico del poder político, del desmantelamiento del debate y la discusión en el Congreso de la Nación, y ahora el sometimiento del Poder Judicial para tener un sistema donde además de la concentración del poder político este régimen ha demostrado en diez años la concentración del poder económico.

Las denuncias que ha hecho Lanata y que también toman denuncias que ya hacía la doctora Carrió a partir del año 2008 –en ese mismo sentido, la presidenta del ARI en Santa Cruz hizo este lunes una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo de la jueza Ana Cecilia Álvarez por el presunto delito de asociación ilícita, lavado de dinero, mal desempeño de deberes de funcionario público contra Daniel Peralta, funcionarios nacionales y provinciales, Lázaro Antonio Báez, Martín Báez, Leandro Báez, Leonardo Fariña y el señor Pérez Gadín–..., lo que quieren esas denuncias es que se investigue esta estructura donde hay una corporación política y una corporación económica que no están en veredas enfrentadas. Acá me gustaría señalar, porque siempre se dice que estas acusaciones y las leyes de medios y ahora esta ley del Poder Judicial son para luchar contra las corporaciones que tienen impunidad y privilegios judiciales. Pero, en realidad, en este sistema argentino que se ha ido agravando década tras década hay un maridaje, una

connivencia, una identidad total entre la corporación política que da impunidad legal y política a los negocios, los negociados, los gobernantes y los contratistas del Estado, los amigos del poder, las corporaciones políticas.

El caso más emblemático es esta catedral de la corrupción kirchnerista en que se ha convertido el Madero Center, un edificio al que yo no he ido pero que se ha convertido en un símbolo. Ahí funcionan la supuesta financiera de Lázaro Báez, desde donde se giraron 55 millones de euros a cuentas secretas en Suiza y ahora la corrupción es tan grande que la plata se pesa por kilo, la financiera SGI; ahí vive el vicepresidente de la Nación Amado Boudou que está procesado por actividades incompatibles con su función; ahí también vive Cristóbal López, quien tiene el monopolio del juego, el zar del juego, la gran corporación del juego... No sé si a usted no le preocupa, senador, la gran corporación, el zar del juego, el que tiene el monopolio del juego, una actividad que sirve para el lavado de dinero, para ocultar el dinero del narcotráfico y la corrupción política, que ahora es además uno de los grandes beneficiados con la publicidad oficial y con las concesiones petroleras. Ahí también vive el banquero del gobierno Jorge Brito; y ahí también tiene varios departamentos la propia presidenta Cristina Kirchner. No sé si Manzano, Eurnekián, Moneta, muchos de esos empresarios que antes eran menemistas y ahora son kirchneristas...; este entramado de corporación política que garantiza impunidad y comparte negocios con las corporaciones económicas, parece que todos se dan cita en ese lugar.

Lo que quiero decir es que lo que busca este proyecto de ley...; y me sorprende que los revolucionarios crean que quienes se han enriquecido brutalmente, como nuestra presidenta –que pasó en pocos años de 7 millones de pesos a 70–, crean que están haciendo una revolución socialista para beneficiar a los más pobres. Esto no tiene ningún tipo de ropaje y lo que se busca con esta ley, justamente, es garantizar la impunidad de los funcionarios políticos que debieran estar dando respuestas ante la Justicia y de sus socios de las corporaciones económicas.

Para que sepamos que quien conduce y da esta cobertura política e impide que los funcionarios acusados de corrupción terminen en la cárcel y sean destituidos de sus cargos, el mejor ejemplo es el caso del senador Carlos Menem, a quien vemos poco. Nosotros, con el senador Giustiniani, hemos pedido...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Gracias, senadora. Ya terminó su tiempo.

Sra. Estenssoro. – Desde hace un mes, hemos pedido que la Comisión de Asuntos Constitucionales considere la exclusión del senador Menem, que hace dieciocho años...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senadora: todo el mundo ha respetado su tiempo.

Tiene la palabra la senadora Di Perna.

Sra. Estenssoro. – ...el tráfico de armas a Ecuador...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Le cortan el micrófono, por favor.

Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.

– *La señora senadora Estenssoro continúa haciendo uso de la palabra fuera de micrófono.*

Sra. Di Perna. – Señora presidenta: no voy a repetir los fundamentos jurídicos y constitucionales que han expuesto otros senadores del Interbloque Federal, con los cuales concuerdo completamente. Solamente quiero hacer mención de tres o cuatro puntos.

En primer lugar, considero que este proyecto que estamos tratando en el día de la fecha viola la Constitución Nacional, por la cual todos quienes nos encontramos aquí sentados en las bancas hemos jurado.

Por otro lado, en función de lo expresado por el miembro informante del Frente para la Victoria, senador Fuentes, quiero decir que en mi caso, soy mujer y médica del interior de la República Argentina. No vivo, no tengo ni he tenido nunca a lo largo de mi vida una situación de privilegio. Por lo tanto, no tengo absolutamente nada que ver con las corporaciones judiciales ni con los intereses sectoriales aglomerados a los que él hace referencia. Soy una ciudadana argentina más y esto no hace que, a pesar de no ser abogada, no tenga capacidad de discernir y de ver este proceso de deterioro de la democracia y de la República.

Desde la juventud, siempre he sido militante política y de la salud. Y considero que en todo cambio profundo que deba realizarse, como debió haber sido este, llamado de democratización de la Justicia –todos estamos de acuerdo en que la Justicia argentina debe tener cambios importantes–, lo primero que debemos hacer es escuchar al pueblo, a la gente. Si uno escucha, advierte que la gente reclama justicia permanentemente por cuestiones que tienen que ver con las drogas, las armas, la violencia y la accidentología. Los jubilados reclaman justicia por sus derechos, que duermen en los juzgados argentinos. Por eso creo que este Congreso de la Nación debió haber tenido un debate muy profundo en esta temática.

Por otro lado, me llaman mucho la atención algunas incongruencias de quienes están a cargo de las máximas responsabilidades del Estado argentino, tal como mencionó la senadora Escudero, del Interbloque Federal. Los dichos de la ex senadora Kirchner, de hace muy poco tiempo, proponiendo determinados cambios en el Consejo de la Magistratura, y su postura actual como presidenta de la Nación, marcan una gran incongruencia. Obviamente, ha pasado algo en el camino.

Diría a la señora presidenta de la Nación que, tal vez, sería importante que pudiera reflexionar sobre algunos de los conceptos de Juan Domingo Perón, quien realmente fue uno de los pocos estadistas que hemos tenido en este país. El general Perón decía que conducir no es mandar ni imponer, sino persuadir. Y para producir un cambio real, una democratización verdadera en el Poder Judicial, obviamente, hace falta quien conduzca.

Creo que el Poder Ejecutivo no ha persuadido a nadie con este proyecto. Y eso ha quedado en evidencia a partir de las múltiples opiniones que hemos escuchado aquí, en el Senado, de jueces que tienen miedo y de otros que marcan la inconstitucionalidad de estos proyectos.

Por todas estas razones, adelanto mi voto negativo para este proyecto de modificación.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: cuando la presidenta de la Nación, en la Asamblea de inauguración de este período ordinario, anunció el conjunto de proyectos para la democratización de la Justicia—entre otros—, sentimos optimismo. Nos parecía muy interesante que viniera de un gobierno que, por otra parte, ha demostrado mucha audacia y valentía en muchos proyectos muy sustantivos. Pero nunca en esos otros, que podrían ser descriptos así, tanto en el orden económico como en el social, se tocaba directamente una reforma tan profunda de algunos aspectos del Poder Judicial, tal cual están legislados en la

Constitución Nacional. Cómo no tener relativo optimismo frente a ese lema, al auspicio de una democratización de la Justicia, cuando nadie deja de recordar la frase “hacete amigo del juez” de *Martín Fierro*.

Ni yo ni nadie debe hacerse amigo de un juez para obtener Justicia. Esta Justicia que tenemos –no solo la de esta coyuntura, sino a lo largo de la historia de la Argentina– ha dejado mucho que desear muchas veces y, sin ninguna duda, requiere una reforma, una mejora. Entonces, venía bien esto de la democratización, que se expresa en un conjunto de proyectos de ley; y nosotros estamos ahora debatiendo uno de ellos, que es sobre una reforma al Consejo de la Magistratura.

Nos parece que, en efecto, este proyecto tiene muchos contenidos que son la democratización de la Justicia. Uno de ellos es habilitar o establecer el voto universal. Otro es levantar la limitación al mundo de lo jurídico para la participación de legisladores, académicos y científicos en la conformación del Consejo. En ese sentido, creo que, parcialmente, hace honor a la democratización de la Justicia. Nos parece también que tiene aspectos negativos y que el peso de ellos es mayor que el de los positivos. Tan así es que distorsionan, quedan a mitad de camino o, incluso, incumplen esta idea de democratizar la Justicia.

Los senadores informantes por la mayoría y minoría han hecho consideraciones que podríamos decir son de tipo filosóficas, conceptual general, relativas a la forma y al contenido, a la sustancia, a lo democrático y republicano, etcétera. En ese terreno, voy a resumir mi consideración haciendo una introducción para luego enfocarme en los puntos de este proyecto que son negativos en esto de la forma y el contenido.

Lo que expuso el senador Fuentes es así: no nos quedemos con la forma como una cáscara vacía sin contenido. Por supuesto, el divorcio entre contenido y forma es parte de la tragedia humana en su historia. Debemos y queremos siempre trascender ese divorcio. En lugar de contenido, yo hablaré de historia y en lugar de forma, hablaré de ley. Obviamente – y los procesos revolucionarios del siglo XIX así lo señalan –, todos querríamos tener en nuestras manos, en nuestra representación, la ley de la historia, pero la ley de la historia la podría tener solo Dios y en la ciudad de Dios, que no es esta ciudad, que no es la ciudad terrenal. Por lo cual, si nadie tiene la ley de la historia, inevitablemente, hay forma y contenido mezclados, en mayor o menor grado, divorciados entre sí. Hay historia y ley.

El senador Sanz hizo un *racconto* de leyes y de procesos políticos en estos años después de la Reforma de la Constitución Nacional del 94, que llamó contrarreforma. Podríamos decir ahí que la ley constitucional, de acuerdo a esa interpretación, fue reformada de facto por la historia, y esto siempre pasa; siempre, las leyes que se dan en la historia pueden ser desbordadas por la historia misma. Y ese es el lugar, en parte, de la política. También lo es de la cultura, que también forma parte de las representaciones y de las leyes que los seres humanos nos damos a partir de ese contenido de la historia.

Entonces, no creo que estemos exclusivamente ante un debate entre forma republicana y contenido democrático. Así lo presenta el Frente para la Victoria en la voz de algunos de sus miembros y, en particular, ahora, del miembro informante. Me parece que ese es un eje de debate posible; pero nosotros creemos que hay otro eje de debate todavía más patente y más importante.

Tampoco nos interesa hacer juicio de valor y un juzgamiento moral que implique una interpretación de las intenciones del Frente para la Victoria, del Poder Ejecutivo, sobre

la base de estos proyectos. Nos interesa la evaluación técnica con relación a esto, historia y ley, democracia y república.

¿Qué nos propone el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura? En su núcleo esencial, nos propone un procedimiento electoral para la elección del nuevo Consejo de la Magistratura, que no es suficientemente democrático, y no porque el artículo 38 de la Constitución Nacional lo limite así. Eso creo haberlo demostrado en el debate en Comisión. Si bien tuve respuestas de los senadores y miembros del Poder Ejecutivo allí presentes, me parecieron insatisfactorias, bien por petición de principios, por sofística o por cambio de tema. Creo que mi punto no fue respondido.

El artículo 38 de la Constitución Nacional no nos obliga a que las listas de candidatos al Consejo de la Magistratura tengan que ser partidarias y estén pegadas a las boletas de una elección presidencial o de legislación nacional. A eso no obliga la Constitución por defecto, por limitación de otra forma. Eso creo haberlo argumentado ya en Comisión. Aquí, simplemente, remito al argumento ya dado para no consumir más de mi tiempo.

En nuestra opinión, una verdadera democratización de la conformación del Consejo de la Magistratura tendría que ser con listas independientes que habilitaran ese mecanismo y no listas partidarias. Se dieron muchas razones. También el senador Basualdo lo señaló recién con mucha claridad, con mucha precisión. Es decir, es irrelevante si es socialista, radical o peronista o está en la lista del peronismo, el radicalismo o el socialismo un candidato a miembro del Consejo de la Magistratura.

Respecto de lo que dijo la senadora Escudero, me parece que eso no afecta solamente a los jueces. También, los académicos y los científicos no tienen por qué ser partidarios o estar integrando listas partidarias; tampoco, los abogados. El conjunto de los propuestos al Consejo de la Magistratura no debieran estar en la lógica partidaria. Eso reduce la democratización. Lo que ampliaría la democratización –tiene aspectos que sí están, como el voto universal– es que la lista sea independiente, que no esté sometida a la reducción electoralista y partidocrática que se nos propone.

En segundo término, creo que la democratización queda a mitad de camino por otra razón que es el cambio de los dos tercios por la mayoría absoluta. Porque ¿cómo va a ser la composición de ese Consejo de la Magistratura? Digamos que 13 de los 19 miembros van a pertenecer a la mayoría política triunfante que, en la historia de nuestro país, muestra ser la mayoría que triunfó también en las presidenciales.

Entonces, la consecuencia técnica, inevitable, sin ningún juicio de valor, es que la mayoría que tiene el Poder Ejecutivo y que presumiblemente sigue teniendo la mayoría parlamentaria—eso también se observó aquí— va a tener la mayoría del Consejo de la Magistratura. Y las minorías se vuelven más ineficientes, más irrelevantes en este proyecto, porque las fuerzas que no pueden aspirar a esos 13 de los 19 miembros no podrían hacer una alianza electoral para, por lo menos, unificarse en una expresión que tengan los otros 6. Como no pueden eso y los otros 13 van a ser de la mayoría, la minoría triunfante, la que ponga los 6 miembros de esos 19 va a ser una parte de la minoría, de lo que hoy día se tiende a llamar oposición. La consecuencia técnica inevitable de esta reforma es que el Consejo de la Magistratura va a concentrar poder en la mayoría política triunfante en cada turno electoral.

Creo que esta es una consecuencia técnica y no un juicio de valor. ¿Por qué? Porque no le presumo mala intención al oficialismo, no necesito presumir –y no que no podría–. No necesito hacer un juicio de valor moral. Es una consecuencia inevitable y es un modelo que, en última instancia, además de hegemonizar los tres poderes, de tender a la hegemonía de monocolor político en los tres poderes –por lo menos, en la hegemonía, no digo en la unidad–, además de este elemento, tiene un componente autocrático en la actual estructura de poder que gobierna a la Argentina.

¿Qué vendría a ser la autocracia? Justamente, vendría a concentrar en una sola voluntad política la historia y la ley. Y eso podría funcionar, pero para ello quien actúa autocráticamente debe ser perfecto, debe tener los requisitos de Dios. En las famosas discusiones teológicas del siglo XVII, cuando se condena incluso a las enseñanzas de Agustín, al jansenismo, etcétera, una de las cosas que estaba en discusión era si nosotros somos autónomos de esa voluntad divina o no. Y si cuando actuamos bien, es Dios quien actúa a través nuestro; y cuando actuamos mal, la culpa es nuestra.

– *Ocupa la presidencia del H. Senado el señor vicepresidente de la Nación, D. Amado Boudou.*

Sr. Cabanchik. – Si nosotros pudiéramos tener un gobierno encarnado en una sola voluntad política, que unifique historia y ley y todas las otras dicotomías que atraviesan la historia de occidente, estaría todo perfecto. Pero ¿quién puede ponerse ese sayo? ¿Quién puede encarnar la voluntad divina en la Tierra? ¿En la ciudad terrestre y no en la ciudad celeste? Ni esta presidenta ni ningún otro presidente de la Argentina pueden.

Por eso digo, concentrando hegemonícamente en una sola expresión política más autocracia, lo que tenemos un modelo de gobierno antitético, con lo que se presume en nuestra Constitución Nacional, con lo que se expresa en su artículo 1° con la división de poderes y con los fundamentos que se han dado en la Reforma Constitucional del 94, para introducir este elemento que es el Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura es un instituto formal, no es puro contenido, pura historia; es ley y esa ley tiene que expresar la dinámica de la historia, las mayorías populares. Estamos de acuerdo con eso, pero así interpretado, esto también es una forma que le ponemos a ese contenido. ¿Quién está autorizado a hablar en nombre de la autenticidad de la sustancia democrática? La sustancia democrática no la puede...

Sr. Presidente. – Señor senador Cabanchik: el señor senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad, algunos de los conceptos que acaba de exponer el senador Cabanchik y que son muy interesantes, se debatieron en el marco de una época de mucha convulsión, en 1789.

La Revolución Francesa nos dejó un conjunto de legados sobre el pensamiento único, la doctrina de la razón, la voluntad popular, las mayorías populares, etcétera. Pero quiero rebatir una idea que se lanzó aquí, en cuanto a que revolución y democracia son términos incompatibles.

En general, la democracia es hija de una revolución. Las monarquías de nepotismo de Francia y los regímenes autoritarios nunca se podrían haber terminado sin una acción previamente revolucionaria. Este es un debate de carácter filosófico y político. Lo que no

comparto, y quiero ser sincero, dado que valoro siempre el aporte del senador Cabanchik, porque es muy interesante, es su apoliticismo. O sea, el hecho de concebir que las estructuras político-partidarias son lo malo o lo deleznable, que lo político-partidario es deleznable.

En Estados Unidos, el presidente de la Nación nombra a los jueces de la Corte con un sentido de pertenencia. El presidente demócrata nombra demócratas. Lo que pasa es que aquí, en la Argentina, hay una adolescencia democrática, un pensamiento de rechazo visceral a lo político por parte de algunos comunicadores, que además, todos los días lo trasladan al conjunto de la sociedad, y que la crisis de 2001 agravó, porque lógicamente, la frustración siempre agrava el rechazo y los voceros del desánimo colocan todo lo malo en los partidos políticos y en la política.

Me parece que esto es negativo. No hay democracia sin partidos políticos. Son la naturaleza y la esencia del sistema político. Esto lo debatimos en la Comisión.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cabanchik. Le pido, por favor, que redondee su exposición a partir del comentario vertido por el senador Pichetto.

Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente, aclaro que el senador me malinterpretó. No hay ninguna apoliticidad. En todo caso, le estoy atribuyendo al proyecto que él defiende una corta democraticidad, porque estoy diciendo que, además de los partidos políticos, tienen que intervenir asociaciones profesionales con total libertad, académicos y científicos no sujetos a las tradiciones partidarias ni cerrados en ellas. Pero nada más lejos de mi voluntad que denostar a la política. Todo lo contrario. La estoy revitalizando.

El senador defiende un modelo hegemónico y autocrático. Creo que eso tendría éxito si tuviera la eficacia asegurada. Como no la tiene, y está a la vista que tenemos una conflictividad permanente y creciente en estos años, en el Senado y fuera de él –aquí, dentro de todo, es amable la tramitación de esa conflictividad–, entonces, me parece que esto está probado. Si fuera Dios, estaría de acuerdo. Y no quiero colocar ese sayo a nadie, ni su pretensión a la actual presidenta ni a nadie en particular. Pero si Dios condujera el proceso, casi hasta no se necesitaría un Consejo de la Magistratura.

Pero como no es así, garanticemos la heterogeneidad y la democratización más plena y no reduzcamos esto a lo partidario. Esto no me parece un detalle del proyecto. Por el contrario, me parece que, lamentablemente, en un proyecto que tiene valores positivos, se introduce una herramienta para su aplicación que lo distorsiona.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: creo que para entender acabadamente el alcance de las reformas que se proponen, no nos podemos limitar solo a un examen de tipo jurídico de las normas en consideración de este Cuerpo sino que también debemos analizar si realmente constituyen un programa de gobierno, lo cual es imprescindible descifrar para entender qué orden pretende consolidar hoy el oficialismo en la Argentina.

Si algo ha caracterizado al partido de gobierno es que no entiende todavía que la Constitución y la ley se han establecido para poner límites al poder. Muy por el contrario, el oficialismo cree que la Constitución y la ley tienen que estar al servicio del partido de gobierno.

Celebro que hoy varias fuerzas de distinto origen político coincidan en el rechazo de este proyecto de ley. Pero debo destacar, señor presidente, sin menoscabo de ninguna de las

otras fuerzas que votan por el rechazo de este proyecto, que desde la Unión Cívica Radical venimos a defender el respeto a las instituciones y a la independencia del Poder Judicial, cumpliendo con una tradición histórica desde nuestros mismos orígenes. Nosotros venimos aquí con convicciones; y no a votar en contra por un sentido de oportunidad. Esto lo voy a aclarar más adelante.

El senador Fuentes fundamentó este proyecto, principalmente, en el respeto a la voluntad de las mayorías y a la participación popular. Yo quiero aclarar, por si lo han olvidado, dónde ha estado siempre desde sus orígenes la Unión Cívica Radical. Así, frente al apartamiento del pueblo de la formación de los gobiernos por el fraude y la falta de voto, el radicalismo estuvo peleando por el voto popular.

Aquí se habla mucho de las corporaciones económicas y mediáticas. Pues bien, frente a la preeminencia de los factores de injusticia económica y social y la defección de las capas dirigentes, siempre la Unión Cívica Radical estuvo del lado del pueblo. Cuando en la década del 90 se enajenaba el patrimonio nacional, que era el ahorro de varias generaciones de argentinos, y se privatizaban las empresas energéticas y de servicios, la Unión Cívica Radical fue el único partido que defendió el interés nacional.

De tal modo que siempre, senador Fuentes, la Unión Cívica Radical estuvo del lado del pueblo, defendiendo el interés nacional. Ese sayo no nos cae. El radicalismo siempre se batió en estas contiendas. A veces de manera desigual, pero abnegadamente, como lo estamos haciendo ahora.

Sr. Presidente. – Señor senador Cimahevilla: el señor senador Fuentes le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Cimahevilla. – Sí, cómo no. Quise aclarar estas cuestiones, porque el senador puso a todos en la misma bolsa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: agradezco al senador Cimahevilla que me conceda la interrupción.

Simplemente, dado que el senador Cimahevilla pretende la integralidad del análisis, creo que sería también interesante que tuviera en cuenta la actitud de la Unión Cívica Radical ante la proscripción de 18 años del Partido Justicialista como para poder realizar un análisis y un debate. No hago ninguna imputación.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cimahevilla.

Sr. Cimahevilla. – Señor presidente: Illia fue quien levantó la proscripción del peronismo. Y desde la proscripción del peronismo hasta la presidencia de Illia, el radicalismo no pudo gobernar. En el primer gobierno radical que hubo, después de la proscripción del peronismo, se levantó la proscripción. Esto también lo debe reconocer el senador Fuentes.

Yo no pretendo hablar desde afuera de la política. No reniego de la política ni desdén de ella. Soy un hombre que viene de la política. Entiendo que esta es una democracia de partidos. Y la vida de los partidos políticos no es una cuestión particular de cada partido sino un problema sustancial de la democracia.

Y yo tengo derecho a examinar la forma en que los ciudadanos del partido de gobierno realizan su voluntad política, del mismo modo que tenemos el deber de ofrecer al resto de la ciudadanía la manera como nosotros decidimos nuestra conducta y nuestros comportamientos. Y esto lo digo porque celebro que hoy aquí otros sectores políticos se alcen contra estas leyes.

Yo vengo de una provincia gobernada por hombres del partido oficial que hoy, por cuestiones de internas, están peleados con el kirchnerismo. Pero les recuerdo que el gobernador Das Neves también amplió de 3 a 6 el número de miembros de la Corte provincial. Y les recuerdo que también en mi provincia, por si no lo saben, echaron al procurador general. Y les recuerdo, por si no lo saben tampoco, que se hostigaba a los jueces que no dictaban fallos complacientes, y que el propio gobernador encabezaba manifestaciones para putear a los jueces en la puerta de los tribunales, llegándose al extremo de cercar al Superior Tribunal de Justicia para que no pudieran salir sus integrantes cuando dudaban de si un fallo favorecía o no al gobierno.

Esto lo quiero señalar, señor presidente, porque venimos acá a remarcar una historia y a expresar nuestras convicciones respecto de estos temas, y no solo por una cuestión de conveniencia a tomar distancia con un gobierno o con un régimen. La presidenta ha analizado la estructura del Estado tal como ella la ve; y está bien que lo haga. Pero nosotros también tenemos derecho de analizar, desde estas bancas, cómo consideramos la estructura de Estado que el Poder Ejecutivo y el partido de gobierno hoy nos proponen.

No suprimieron, por supuesto, el Parlamento, pero lo desjerarquizaron. Estos días lo hemos visto: leyes importantes como estas no se han podido discutir en Comisión, no se ha permitido que sectores interesados pudieran hacer aportes; no sancionan una ley de censura a la prensa, pero sí crean un sistema de coacción económica y moral tendiente a ir dominando a la prensa. Y para que todo esto se pueda hacer efectivo, para que la Constitución y la ley se puedan subordinar al poder, ¿de qué necesitamos? De un Poder Judicial dócil, de un Poder Judicial que responda a este modelo. Y acá también yo tengo una visión muy crítica del Poder Judicial, porque si hemos llegado a estas instancias de la vida de la República, el Poder Judicial tiene muchísimas responsabilidades, muchísimas responsabilidades.

Aquí se ha hablado mucho de las corporaciones, sobre todo, de la judicial; y se la ha criticado. Pero mi permanencia en el Consejo de la Magistratura me ha permitido observar una permanente complicidad entre la corporación judicial y el hoy partido de gobierno. Si ustedes analizan la conformación de los fueros, se van a dar cuenta cómo el Poder Judicial votó en el Consejo de la Magistratura a los jueces en el fuero Contencioso Administrativo, que es el fuero que controla el poder, y cómo la corporación judicial se quedó con la Justicia ordinaria; y allí van a ver parientes, secretarios, amigos, cuñados de los jueces.

Esta complicidad entre la corporación y el Poder Judicial y el poder político tampoco se la pueden achacar a la Unión Cívica Radical. Es más, este modelo de poder autoritario ha llevado a avasallar a un sindicalismo independiente. Hoy, los sindicatos responden al partido de gobierno. Y este es otro de los temas que tendríamos que afrontar cuando hablamos de democratización. ¿Por qué no democratizamos también al sindicalismo en la Argentina? Hoy, los sindicalistas tienen cargos vitalicios, son hereditarios, y también pesan la plata, no la cuentan. Esta es otra de las deudas pendientes del Parlamento argentino.

Fíjese, señor presidente, que precisamente el único hecho positivo de este gobierno, que ha sido la conformación de la Corte Suprema de Justicia, hoy es el peor escollo que tiene este gobierno. ¡Fíjese qué paradoja! Es una paradoja. Realmente, pretendo que antes de la votación, quienes apoyan este proyecto reflexionen sobre la gravedad institucional que implica y sobre el riesgo al que van a someter a la República.

Voy a analizar algunas de las cuestiones que figuran en el articulado de la norma. El artículo 1° dice que este proyecto de ley está impulsando la conformación del Consejo de la Magistratura de acuerdo con la forma representativa, republicana y federal. Nada más alejado de este enunciado. Cuando se avanza sobre la dominación del Poder Judicial, lo que está en riesgo no es la integridad del propio Poder sino la propia República. Y esto es lo que está en riesgo hoy: la propia República.

Dice: Tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas inferiores a través de la emisión de propuestas internas vinculantes [...] ejerciendo las funciones de superintendencia del Poder Judicial... Aquí ya hay una inconstitucionalidad.

El Consejo de la Magistratura no está creado –lean el artículo 114– para ejercer las funciones de superintendencia del Poder Judicial. Está creado para otra cosa: para la designación de los jueces, para sancionar a los jueces, para administrar el presupuesto...

– *El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera de micrófono.*

Sr. Cimadevilla. – ...pero no para ejercer las funciones de superintendencia del Poder Judicial.

En este país, la facultad de superintendencia la tuvo siempre la Corte. Nombrar empleados, ascenderlos, sancionarlos son facultades que siempre estuvieron dentro de los poderes de superintendencia. ¿Cómo va a sancionar el Consejo de la Magistratura a un empleado del Juzgado Federal de Salta? ¡Es imposible! ¡Es imposible que lo pueda sancionar! Es imposible que tenga conocimiento de lo que ha pasado. Evidentemente, señor presidente, este proyecto de ley apunta a quitar a los propios jueces la posibilidad de gobernar a los juzgados. Y ya vamos a seguir hablando de este tema. Por otra parte, incorporan un representante de los abogados de la matrícula, con lo cual ahora son 3, y agregan 5 representantes del mundo académico.

Respecto de las selecciones y de la manera de elegir, no voy a ser original y decir quiénes son los que tienen que elegir a los miembros de los jueces, de los abogados o de los académicos. No voy a ser original, porque me voy a limitar a leer lo que dijo en este Parlamento la actual presidenta de la Nación, cuando hablaba de quiénes elegían a los jueces y de quiénes elegían a los abogados.

Decía así: Estamos ante un órgano que se creó en la Constitución de 1994 que combina dos tipos de representaciones: una de carácter corporativo, como lo ha señalado el senador Pichetto. Esto significa que en el caso de los magistrados y abogados, el que elige es un universo reducido por propia definición.

Es decir, la propia presidenta, que ha enviado este proyecto de ley al Parlamento, cuando fue senadora, decía una cosa totalmente distinta de la que ustedes sostienen, pero que en aquel momento se ajustaba a lo que indica el artículo 114 de la Constitución. Esto no se ajusta. Y yo no voy a defender el texto del artículo 114. Yo no lo hice. Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero está para que lo cumplamos. No porque no me guste un artículo de la Constitución yo tengo facultades en este Parlamento para transgredirlo.

Sr. Presidente. – Senador, si puede ir redondeando.

Sr. Cimadevilla. – Sí, estoy haciendo algunas observaciones de la ley. Es decir...

Sr. Presidente. – Superó en tres minutos el tiempo.

Sr. Cimadevilla. – “Igualdad de trato y no discriminación en todos los concursos para acceder tanto a cargos de magistrados como de funcionarios entre quienes acrediten antecedentes”.

Realmente, están eliminando la carrera judicial, porque no tiene los mismos conocimientos un hombre con diez o quince años de trabajo en el Poder Judicial que uno que viene de afuera. Y no es que yo diga que en el Poder Judicial no hay burros, ¡porque está lleno de burros! Pero convengamos que siempre tiene más conocimiento y está muchísimo mejor preparado alguien que tiene quince o veinte años de carrera que alguien que desconoce por completo lo que ocurre en un tribunal. Están lisa y llanamente eliminando la carrera judicial.

Con respecto a lo que decía el senador Fuentes, de que no elegimos jueces para el futuro que nos garanticen impunidad, usted sabe que sí, señor presidente. Con este proyecto de ley se pueden elegir ahora jueces para el futuro.

“Por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros podrá instruir a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que proceda a la convocatoria a concursos con anterioridad a la producción de vacantes, orientados por fuero e instancias judiciales. Entre quienes aprueben el concurso previo se confeccionará una nómina, cuya vigencia será de TRES (3) años”. En consecuencia, si se produce una vacante dentro de dos o tres años, yo al juez, lo puedo nombrar ahora.

Sr. Pichetto. – No.

Sr. Cimadevilla. – Si esto no es nombrar jueces para el futuro, díganme qué es.

Sr. Presidente. – Por favor, senador, si puede redondear.

Sr. Cimadevilla. – Otra de las cuestiones que tiene este proyecto de ley es que el jefe de Gabinete de Ministros va a manejar el presupuesto del Poder Judicial. Estamos hablando de los salarios, una cuestión alimentaria. Quien maneja los alimentos, maneja la voluntad de las personas. Esto es lo que hace este proyecto de ley. El jefe de Gabinete de Ministros será el que manejará el presupuesto judicial, asignar sus sueldos.

Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Linares.

Sr. Cimadevilla. – Una sola cosa, señor presidente, porque es grave.

Estamos frente a proyectos de ley que están concentrando la suma del poder público en uno de los poderes. Y lo que dijo la senadora Estenssoro es cierto: esto va a caer dentro del artículo 29 de la Constitución Nacional. Están posibilitando la suma del poder público en manos de un solo poder. Yo me pregunto de qué se van a disfrazar si esta norma es declarada inconstitucional precisamente por haber violentado el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Sr. Pichetto. – Ese argumento no es digno de su inteligencia y de su experiencia.

– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto, por favor.

Senador Linares, tiene la palabra.

Sr. Linares. – Pensaba hablar despacito, así no molesto el diálogo. *(Risas)*

Sr. Presidente. – No molesta, senador Linares.

Sr. Linares. – Señor presidente: la verdad es que ha sido una jornada larga. Creo que hay enorme cantidad de argumentos, de un lado y del otro, expuestos aquí. También ha quedado

claramente expuesta una concepción distinta de lo que es la palabra “democratización”. Se entiende de una manera de un lado, y de otra manera del otro.

Desde mi bancada, tanto la senadora Morandini, vinculando su alocución con los temas de la libertad, la democracia y el respeto a las minorías, como el senador Juez, con esa manera tan especial de transmitir la compleja situación en que van a poner a la Justicia —él es abogado—, me parece que sintetizaron nuestro pensamiento, que será redondeado seguramente por el senador Giustiniani.

En realidad, en la apertura de sesiones de este año, cuando la presidenta habló de democratización, obviamente, uno suscribe la posibilidad de trabajar sobre el Poder Judicial. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano del país cómo ve a la Justicia, le dice que mal. Es más, le puede atribuir una serie de déficit a la Justicia. Pero la Justicia cotidiana, la de todos los días, es la Justicia de la provincia de Buenos Aires, la de Catamarca, la de San Luis, que no tienen nada que ver con la reforma que nosotros estamos considerando, hoy, en algunos aspectos. Esta es la Justicia para la Capital Federal y los juzgados federales, que se limitan, entre otras cosas, a los eventuales juicios que pueda haber contra funcionarios políticos del gobierno nacional. Esto no tiene nada que ver con los problemas cotidianos de la Justicia —que mencionaba— que tenemos en las provincias. Pero seguramente se va a reflejar, como expresara la senadora Escudero, en adelante, en algunas otras provincias.

Me parece que la palabra “democratización”, a la que uno puede suscribir, no tiene nada que ver cuando vemos estos proyectos, con aquello que uno pretendía.

Señor presidente: yo trabajé en el Tribunal de Menores de Bahía Blanca pagándome la carrera. Hice un año de curso de capacitación en el 72, y rendí concurso en el 73. Integré el sindicato durante los años que estuve, siendo muy joven. Y muchísimos de los problemas que se plantearon, ya hace cuarenta años de esto, hoy están sin resolver. Cómo no vamos a tener una especial atención cuando se habla de democratizar el Poder Judicial, pensando que va en función de mayor accesibilidad para la gente, mayor celeridad, de avanzar sobre la oralidad en lugar del procedimiento “a papel”. Cómo no vamos a suscribir eso.

Pero, cuando vinieron los proyectos, tanto aquí como en Diputados, de los que tomamos conocimiento esta semana, nos enteramos de que la cosa no va por ahí, sino que va por otro lado.

Entonces, empiezan los problemas de análisis para llevar adelante parte de lo que se había o no se había terminado de acordar en la Constitución del 94. A partir de la reforma de aquel año, hubo casi cinco años de debate para conciliar la primera ley que pusiera en funcionamiento el Consejo de la Magistratura. Funcionó hasta 2006, cuando fue reformado. De manera que hubo casi cinco años de trabajo, de consenso, tratando de buscar una norma que le diera funcionamiento a esto, o efectividad a la Constitución.

Cuando se hizo la reforma de veinte a trece, aquí se mencionaron muchas de las cosas que enunció la miembro informante, en ese entonces la senadora Kirchner: algunos editoriales del diario La Nación de aquel momento, que decían que estábamos siendo agredidos porque el diario aludido expresaba que esto no funcionaba. Entonces, había que pasarlo de veinte a trece. Pero, cuando uno mira el recorrido de esa modificación comprueba que esta fue la Cámara de origen y entró el 27 de mayo de 2004, se empezó a tratar un año después y estuvo casi dos meses en tratamiento, y en las dos últimas reuniones de comisión, el 29 de noviembre de 2005, fueron invitados la Federación Argentina de Colegios de Abogados —la FACA— y la Asociación de Magistrados. El martes 20 estuvieron

invitados Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales –el CELS, que ayer anduvo por aquí– la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales –la FARN– y una serie de entidades que participaron. Y de todas esas opiniones, salió esta modificación que hoy está vigente y que vamos a modificar.

Obviamente, no compartimos en absoluto la manera o el cambio sustancial que ha habido. Se podrá opinar más o menos sobre el artículo 114 en cuanto a las atribuciones para la administración que tiene el Poder Judicial. Creemos que esto excede, que pasa los límites, porque la Corte ya no puede nombrar ni los secretarios. Me parece que esto no deja de ser un tema complicado para el funcionamiento. Como decía, no vemos en esto ningún tipo de mejora, al contrario. Durante dos años, según esta ley, van a estar funcionando, por lo menos, con diecinueve miembros. De manera que vamos a pasar de trece a más de diecinueve. Y algunos pueden llegar a decir que, en lo posible, hasta veinticinco.

Si hay problemas para funcionar con veinte, pasan a trece y tampoco funciona, luego lo pasan a diecinueve o más, por lo menos los próximos dos años, indudablemente el problema no está en el número, sino en la toma de decisiones que tiene este Consejo de la Magistratura. Ahí está, me parece, el meollo central de la cuestión política de esto, que es terminar con los dos tercios o las mayorías calificadas para la designación o remoción de jueces. Esto, sumado a la necesidad o a la incorporación en una lista de jueces que van a estar integrando cada uno de los partidos políticos, es un antecedente, como manifestó mi compañero de bancada, el senador Juez. Si le ponemos la chaquetilla a un juez de un partido político, después, hay que ver cómo sigue esto para adelante. Me parece que es un antecedente muy peligroso involucrar a los jueces en esto. Y no hablo de analizar, a lo mejor, en conjunto, con más tiempo, con más decisión, la participación –que es un aspecto, no más–, mediante el voto popular para la designación de algunos de los miembros. Pero no me parece correcto involucrar en esto a los jueces.

Por eso, nosotros entendemos que el problema no es el número del Consejo de la Magistratura, sino el no acatamiento de la decisión o el no tener la mayoría necesaria, calificada, para remover o disciplinar jueces.

Estaría de acuerdo, por ejemplo, en que sea una mayoría simple, o absoluta como le llaman aquí, para mandar las ternas porque, de última, las ternas, después de rendir el examen, pasan por el Ejecutivo y vienen al Senado, de manera que, para ese tipo de situaciones, hay varios filtros, lo que me parece razonable. Pero no sacar las mayorías calificadas para la remoción de jueces.

Sr. Fuentes. – ¿Me permite una interrupción, senador?

Sr. Linares. – Sí, senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Hubo un error en la interpretación de la senadora Escudero. Ya se aclaró que quien remueve a los magistrados es el *Jury*, y no ha sido modificada ni su composición, ni la forma de designar a sus miembros, ni sus calidades. No es el Consejo quien remueve a los jueces. Los remueve un *Jury* de enjuiciamiento reglado por una ley. Eso no se ha tocado.

Sr. Linares. – Le agradezco, senador Fuentes. Se puede iniciar *Jury*, entonces, con mayoría simple.

Nosotros seguimos insistiendo en que esto no tiene nada que ver con la democratización. Está más vinculado a otra toma de decisiones. Por supuesto, creemos que no tiene nada que ver con la necesidad de una Justicia más transparente y más rápida. Es

necesario otro tipo de leyes para hablar de democratización. Esto no tiene otro camino que conseguir una mayoría que pueda controlar objetivamente los tres poderes, como lo ha señalado una de las voceras casi oficiales del Ejecutivo nacional, como es la diputada Conti.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, como se ha adelantado.

Hace muy poco un periodista y escritor argentino planteaba que buscaba una palabra para definir a este gobierno nacional. Dijo que le parecía que la palabra era “aparentemente”...

Sr. Fernández. – “Excelente”. (*Risas.*)

Sr. Linares. – Cada uno utiliza su calificación. (*Risas.*)

En cuanto a “excelente”, no estamos hablando de Quilmes, quédese tranquilo, senador. (*Risas.*)

La palabra que menciona este periodista es “aparentemente” porque aparentemente dice una cosa y hace otra. Entonces, aparentemente quiere democratizar, cuando en realidad busca otra condición, como lo ha hecho con otras leyes antes, con el agravante de que cada vez nos tienen menos en cuenta para los debates, cada vez salen las leyes con menos debate. Esta degradación paulatina que está viendo esta Cámara es peligrosa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en línea con lo que ya ha planteado nuestro miembro informante, nosotros no compartimos la batería de proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo, pero particularmente los tres proyectos que tenemos para tratar en este Senado: modificación del Consejo de la Magistratura, creación de las cámaras de casación y regulación de las medidas cautelares, que trataremos mañana, fundamentalmente porque se ajustan a una concepción totalitaria.

Hay un eje y una matriz de pensamiento del gobierno nacional, que se sostiene en la búsqueda del poder total, en el control del Poder Judicial, que busca el control de los jueces, que busca también controlar las sentencias a través de la creación de estas cámaras de casación luego de que logren la modificación en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Con el proyecto que vamos a tratar mañana buscan la concentración de poder y facultades en el gobierno, en el Estado-gobierno, en desmedro de los derechos individuales, tal como lo ha planteado también el propio CELS en la refutación puntual que ha hecho ayer.

También decimos que en esta concepción se inscribe la búsqueda de la consolidación de la impunidad, esto es, garantizar impunidad para muchos funcionarios de este gobierno, porque después de que se vayan, después de 2015, van a hacer cola para ir presos, y el primero que va a estar en la hilera va a ser Julio De Vido con otros funcionarios más.

Esta es la concepción ideológica sobre la que se sostiene la presentación de esos tres proyectos. Por eso es que primero hay que hacer esta conceptualización.

Yo he leído una definición ideológica bastante buena sobre la conceptualización de la democracia que hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que me parece que es oportuno en esta circunstancia. Divide la concepción de la democracia en tres visiones. Habla primero de la visión mayoritarista, que afirma que el valor que debe realizar la democracia es canalizar el autogobierno colectivo, de modo tal que refleje las preferencias y aspiraciones de la mayoría del pueblo. Obviamente, su precursor fue Rousseau. La noble

aspiración de Rousseau tenía que ver con algunas cuestiones que limitaban esta concepción. El extremo de este pensamiento es el fascismo mayoritarista como lo expresa este documento que está bastante bueno. Diría, la concepción de esta idea democrática tiene que ver con: minorías atrás, las mayorías quieren más.

Después hay otras dos concepciones sobre cómo nos organizamos para vivir en democracia, que tienen que ver con la visión pluralista, que afirma que el valor fundamental es el de canalizar el autogobierno, de modo tal que todos los grupos sociales y políticos mayoritarios y minoritarios tengan una oportunidad equitativa de influir en las decisiones, en donde la concepción que se plantea es que el poder absoluto corrompe absolutamente.

Hay una tercera visión, la visión deliberativa de la democracia, cuyos precursores son Kant y Habermas, que sostiene que el valor de la democracia se realiza cuando las decisiones de gobierno se toman mediante procedimientos robustos de participación, inclusión y discusión pública leal y de buena fe, y en los que los intereses de todos los afectos sean considerados con respeto. Plantea que una decisión genuinamente democrática no es la que transmite los intereses de la mayoría ni un equilibrio de facciones sino aquella que podemos considerar como imparcial.

Nuestra reforma constitucional de 1994 ha ido más bien en esas dos últimas visiones, en la visión pluralista, toda vez que el artículo 114 de la Constitución, en la creación del Consejo de la Magistratura plantea un sistema de designación y remoción de los jueces con participación de tres estamentos, particularmente en el esquema de remoción: jueces, abogados de la matrícula y políticos elegidos por el voto popular. Luego agrega: en la medida en que disponga la legislación, también científicos y académicos. No les da la posibilidad a los científicos y académicos de participar del sistema de remoción.

Las reformas que se han introducido realmente están modificando este aspecto, toda vez que prevén la posibilidad de la remoción con una decisión de la mayoría absoluta del pleno, que es lo que recién el senador Fuentes ha tratado de explicar, pero yo quisiera refutar porque la verdad que lo que está escrito en el proyecto es otra cosa.

De esta idea surgen los tres proyectos. El relativo a la creación del Consejo de la Magistratura establece una composición y un sistema de selección que destruye la independencia del Poder Judicial y, consecuentemente, mina el sistema de división de poderes.

Por eso esta reforma tiene una idea totalitaria, con varias bases: la modificación del Consejo de la Magistratura, el tema de las cámaras de casación para controlar las sentencias, como lo veremos cuando lo tratemos, y la regulación de las medidas cautelares.

Respecto de la ley del Consejo de la Magistratura, siguiendo el análisis que no ha podido terminar el senador Cimadevilla, diría que en el sistema de selección están llevando la política y la partidocracia al Poder Judicial. Sin embargo, por la concepción filosófica de la Constitución y por lo que está escrito en la Constitución, solo los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo pueden ser elegidos por el voto popular. Pero en el proyecto se incluye a los jueces en un sistema de elección. El partido radical y el Frente para la Victoria tendremos que ir a buscar jueces candidatos y hacer campaña en los tribunales. La verdad que el sistema es perverso. No puedo creer que estemos discutiendo este cambio que es tan trascendental y que rompe absolutamente con la lógica y la estructura del sistema de división de poderes. Esto lo dice el artículo 3° bis y los relativos a

la composición del Consejo de la Magistratura y el sistema de selección de jueces. Se incumple el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Sin embargo hacen otra cosa más, además de buscar el poder total, también buscan debilitar a la Corte Suprema porque no la quieren. No quieren una Corte Suprema independiente. Si hay algo que hizo bien Néstor Kirchner fue haber dictado el decreto 222/03. Ahora reniegan de eso porque la Corte Suprema dicta fallos conforme su leal saber y entender, ejerciendo así el principio de independencia de un poder, que es lo que corresponde para una democracia y una República sana. Por eso le quitan la administración de los recursos.

Además, van más allá porque también se meten en el tema de la designación del personal, cuestión que impide el artículo 113 de la Constitución Nacional. La política del personal la tiene que manejar sólo la Corte Suprema. El artículo 113 dice que la Suprema Corte dictará su reglamento interior y nombrará sus empleados. Ningún poder puede plantear cómo va a ser el sistema de selección de los empleados y cómo va a ser la cuestión de la capacitación. La política de los recursos humanos del Poder Judicial la tiene que manejar la Corte Suprema según el artículo 133 de la Constitución Nacional.

¡Que se meta la presidenta en su poder, que arme un sistema de selección y capacitación transparente para que no sólo los de La Cámpora consigan trabajo en el Estado Nacional! Hay que ser militante de La Cámpora o de alguna organización social afín al gobierno para entrar en el Poder Ejecutivo. Y después hablan de la falta de transparencia en materia de manejo de recursos humanos y de la política de personal de la Corte Suprema. La verdad es que es una gran hipocresía lo que plantea el Poder Ejecutivo en este tema.

En ese sentido, se incumple con el artículo 113 de la Constitución Nacional pero también se modifica el sistema de remoción y selección porque eliminan el inciso 7) del artículo 6. El artículo 7 de la ley vigente, en su inciso 7), establece decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y ordenar después, en su caso, la suspensión del magistrado siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusación. A tales fines, se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros.

¡Eso se eliminó! Ahora, por simple mayoría el pleno de la comisión puede decidir, si no hay una resolución del *Jury* de Enjuiciamiento en tres años. Eso también va en contra del artículo 115 de la Constitución Nacional porque no pueden participar del sistema de remoción los científicos y docentes. Solamente le está permitido remover a jueces, políticos y abogados. Entonces, si quieren remover a un juez y no tienen la posibilidad de hacerlo en el *Jury* de enjuiciamiento, “pisan” el expediente, archivan el expediente y luego de tres años va al pleno y por mayoría absoluta pueden removerlo.

Es decir, la reforma de esta ley le otorga la facultad discrecional con un voto más. El cálculo que han hecho es que en las elecciones van a ganar, aunque van a perder con la gente, con 35 ó 40 por ciento de los votos. Van a perder con el pueblo, porque eso va a suceder en esta elección, pero es posible que ganen por la fragmentación de las fuerzas de la oposición. Lo primero que han hecho es calcular que si sacan un voto más, se llevan todo puesto. Eliminamos el sistema de remoción por dos tercios, le otorgamos facultades al pleno y hacemos intervenir a todos y el que gana con las boletas por un voto más, se lleva

todo. Esta es la concepción y se ve en toda la línea del proyecto. Por eso no es casual cada uno de los temas que estamos tratando.

Por otra parte, también modifica el sistema de designación porque durante la entrevista el plenario puede modificar alguna cuestión del puntaje que tiene el aspirante a juez. En los antecedentes o en el examen, para modificar esa situación, hacía falta la mayoría de dos tercios del pleno. Eso lo han eliminado. Ahora, en la entrevista se puede modificar, si no les gusta la cara del aspirante, por mayoría absoluta de los miembros como dice la modificación que han introducido en el artículo 13, que es el artículo 9 del proyecto.

De esta manera se garantizan la designación porque en la entrevista pueden modificar todos los antecedentes y romper con la meritocracia. Han eliminado los dos tercios y por mayoría absoluta de los miembros del pleno pueden modificar esa situación –insisto– rompiendo la meritocracia. Y también se garantizan el tema de la remoción. Entre otros temas, estos nos parece que son los elementos centrales que sostienen esta concepción ideológica que es peligrosa porque significa un gran retroceso. Esto no es solamente para manejar al Poder Judicial, sino también para debilitar a la Corte Suprema porque no les gusta. Si pudieran, echarían a todos sus miembros para tener una Corte Suprema adicta y también garantizarse la impunidad.

El camino a seguir debería ser todo lo contrario, la democratización debería ir a la inversa, debería garantizarle al Poder Judicial una cuota de la coparticipación y que no estén mendigando los recursos para administrar justicia. Es decir, que manejen el personal, que sean independientes, que se necesite dos tercios para remover jueces y que haya un sistema que realmente garantice la meritocracia y la independencia del Poder Judicial.

¡No hay que meter a los jueces en el fango de la política y de los partidos políticos! ¡Tenemos que resolver otras cuestiones! Nuestro sistema es sabio en ese sentido, por eso está el voto popular para el Poder Ejecutivo. Ahí damos la batalla todos los partidos políticos y también en el Congreso de la Nación, pero no podemos someter a quienes deben, según el principio de independencia, velar y tutelar los derechos de todos. Y resguardarse la capacidad de enjuiciar desde la presidenta hasta el ciudadano más común.

Señor presidente: vamos a romper ese principio. Por este motivo, entre otros que se han planteado, vamos a rechazar este proyecto y otros más. Nos vamos a reservar para decir algunas cosas más cuando tratemos los otros dos proyectos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: en la continuidad del debate del día de la fecha, con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo que reforma el Consejo de la Magistratura, venimos a plantear una parte de nuestra posición –una parte la ha hecho el miembro informante, otra parte la han hecho los otros compañeros y otra parte la hará el compañero presidente del bloque– tratando de poner las cosas en su lugar y contar lo que realmente siente este poder político, en este caso ejerciendo la responsabilidad que le fue conferida por la voluntad popular para tratar de llevar adelante políticas públicas que son las que entendemos como mejores para gobernar al pueblo de la Nación Argentina.

Por eso, todas estas expresiones con respecto del artículo 29 son muy loables, y es importante que lo hayan leído, pero uno sabe lo que está haciendo. Evidentemente sentimos que formamos parte del movimiento nacional peronista y discutiendo en este marco una propuesta de nuestra presidenta de la Nación, jefa del movimiento nacional peronista, me

siento más que reconfortado de participar de un debate de estas características que me comprende y me hace sentir absolutamente convencido de lo que estoy haciendo.

Si uno tuviera un teléfono mágico y por 15 segundos pudiera llamarlo a Néstor Kirchner y decirle: “¡Néstor, no sabes cuántos senadores y senadoras de la oposición han elogiado tus palabras y las de Cristina!” Él me hubiera dicho: “¡Dejate de joder!”. Me hubiera dicho así, no hubiese aceptado bajo ningún punto de vista imaginarse este planteo porque suena a una importante carga de sorna a la presentación de sus palabras. Es como si quisieran, a través de la sorna, atar la lengua nuestra con las palabras del propio Néstor Kirchner. La verdad, por el afecto y el cariño que le he tenido, –y no temo en decir que he amado a este personaje de la historia de los argentinos– me satisface que por lo menos lo mencionen. La verdad es que me pone contento.

Entonces, damos tratamiento a esta modificación de la ley 24.937 –modificada en 2006 por la ley 26.080– de creación del Consejo de la Magistratura, que proviene, en definitiva, de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 con la creación de este Consejo. Una cosa extraña, porque tenemos una Constitución Nacional que se pretendía fuera la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. Alberdi en algunas cosas falla en su copia porque es más unitaria que federal. En definitiva, proviene de esa situación y traemos un instituto que proviene más de Europa que de la América que piensa como nosotros. En ese sentido, venimos a copiarnos de aquellos a los que les va mal con este Consejo de la Magistratura. En España e Italia funciona mal, o no funciona.

Entonces, vayamos comprendiendo de dónde lo tomamos para decir que no vamos cambiando el concepto del manejo de lo político, para decir que después a ellos les va bien porque fueron capaces de comprender cómo regular ese equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución y que nosotros, por no ser sensatos y prestar atención a los mayores –y de los que nos vinimos a copiar– estamos cometiendo el error.

Fallida. No es así la situación.

Fundamentalmente entramos a cambios que son medulares, y es importante, porque se cambia el modo de selección de los magistrados mediante concursos públicos, elevando ternas vinculantes al Poder Ejecutivo para su nombramiento. Esto es un importante cambio en temas de la magistratura constitucional. Es muy importante en ese marco.

Cuando se crea ese artículo 114, fruto del Pacto de Olivos –y eso es consenso entre los dos partidos: el Peronismo, al que pertenezco, y la Unión Cívica Radical–, se acuerda ese artículo 114, que crea un órgano que integra al Poder Judicial, pero sin subordinación a ese Poder Judicial, a ese poder del Estado de la República, definido en líneas generales como un órgano extrapoder. Esto es lo que viene a ser en esta situación. Tiene a su cargo la administración y la superintendencia del Poder Judicial. Y ahora vamos a charlar de ese tema, cuando expliquemos un poquito más en profundidad lo manifestado por el senador preopinante, donde él confunde lo que dice el artículo 113 con lo que dice el 114 en su primer párrafo.

Por lo tanto, aprueba el presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo. Acá el jefe de gabinete no va a manejar nada. Porque los que han sido jefes de gabinete me han contado que hoy la Corte llama y le plantea cuáles son sus necesidades, y conforme a las posibilidades financieras que el gobierno va generando, va cumpliendo con los pedidos. Nadie mete la mano en lo que está pensando en este caso la Corte, que está manejando la Superintendencia circunstancialmente.

No dudo de que la escasa garantía jurídica y el deterioro institucional y moral que sufre el Poder Judicial no es de la Argentina sola; es de toda la América. Toda América latina está padeciendo una situación de esta característica y un cuestionamiento.

Por supuesto que no voy a generalizar nunca, presidente. Sería injusto. Hay muchos y muy buenos magistrados, y muchos y muy buenos en el Ministerio Público. Muchos y muy buenos. Rescatemos a todos esos. Pero hay una buena parte, que es la que genera ese halo de cuestionamientos por parte de la sociedad, en América latina y en la Argentina puntualmente, por lo que nosotros vemos como necesario ir profundizando y dar esa discusión.

Y yo sí reivindico ahora a Néstor Kirchner, porque él empezó a dar esas señales claras. Por eso es importante que lo hayan leído y hayan dicho lo que él decía. Porque él es el primero que imaginó la forma de la participación de la sociedad en la selección de los miembros de la Justicia. ¿Con qué? Con el Decreto 222/2003, que sigue vigente.

Mal nos pueden decir a nosotros que tenemos pretensiones de que le vaya mal a la Corte, cuando se bajó de nueve a cinco el número de sus miembros. Ergo, hoy son siete. En Estados Unidos hay un viejo dicho que señala: “Los ministros de la Corte nunca renuncian y rara vez se mueren”. Con lo cual, gracias a Dios, están los siete y ojalá vivan mil años.

Entonces, ahí están los siete. Que le digan al gobierno que no quiere que esté esta Corte, tienen para un rato largo, porque en la medida en que vayan renunciando u otra cosa, van a quedar esos cinco y va a pasar mucho tiempo. Con lo cual se desvirtúa por completo esa expresión, que es muy chiquita.

Quiero rescatarla porque lo que el presidente Néstor Kirchner hizo en esa definición fue precisamente autolimitar sus atribuciones, las que la propia Constitución le confería, conforme el artículo 99 inciso 4, para poder designar los ministros de la Corte. Porque era la única forma en donde se podía decir con toda claridad que lo que se buscaban no eran adictos; lo que se buscaban eran independientes. Y que todos tuviéramos respeto sobre ella.

Ernesto Sagüés, que es un constitucionalista rosarino no peronista se plantea cómo obtiene poder político la Corte, que es uno de los poderes de la República. Y sostiene que el poder lo obtiene cuando tiene respeto por la sociedad, cuando la sociedad respeta a esa Corte, y cuando sus pares, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la respetan.

Nosotros nunca nos hemos expresado de otra manera que no sea a través del respeto por esa Corte. Entonces, me parece que esas cosas están de más.

De la misma manera se sancionó el decreto 588/ 2003, que también autolimitaba las atribuciones para la selección del procurador general de la Nación, del defensor general de la Nación y de jueces de los tribunales federales inferiores.

Esta no es la verdad revelada, presidente; ni acá llegamos y decimos “bueno, tocamos el cielo con las manos y está todo resuelto”. Es un estamento más. Hay que seguir buscando más elementos, seguir la discusión, y seguir buscando la forma de crecer para que ese Poder Judicial pueda desarrollarse y tener ese respeto que todos necesitamos, que la Corte lo está teniendo hoy y que necesitamos que todos lo tengan.

La realidad es que está lleno de sospechas en un montón de cosas. Con ver las causas, cuando discutimos específicamente por qué se traba el Consejo de la Magistratura actual, como se traba el de España y como se traba el de Italia, uno dice: “¿Pero qué cosas malas pasan?” Y pasan. Pasa que había que elegir un juez, pero como en ese juzgado había

una causa de Clarín, un diputado que había firmado por el sí, no sabe cómo hizo y firmó por el no.

Y yo no sé cómo hace esta gente del oligopolio para convencerlos. No sé decir si los convence, si son amigos. Es algo que yo no alcanzo a comprender como para decir exactamente el término adecuado, como para no errarle. Pero la realidad es que estamos en presencia de situaciones indeseables, y nosotros no queremos mirar para el costado...

Sr. Presidente. – El senador Cimadevilla le solicita una interrupción, senador.

Sr. Fernández. – No, presidente, quisiera terminar de la mejor manera posible.

Sr. Cimadevilla. – Es que fui aludido...

Sr. Fernández. – No, no. En todo caso, si lo aludí, hable al final. Me parece estupendo. Voy a aludir a varios, así que hagan la lista y vamos todos.

Por eso insisto en que no es la verdad revelada, pero es importante proponer una modificación que tienda a democratizar eso, a evitar eso, que exista esa posibilidad de que una empresa, la parte del poder histórico real de la Argentina, de estos oligopolios que toda la vida hicieron lo que se les antojó y se daban el lujo de decirle a los gobiernos democráticos que con cinco tapas los volteaban, tenga que pasar por todos los lugares que pasan todos.

No queremos nada. Nadie está buscando de antemano ventajas, que es lo que he escuchado acá.

Un senador dijo “lo único bueno que hicieron...” Es muy fuerte eso.

Han encontrado todo tipo de adjetivos, descalificaciones para agraviar y para someter a este gobierno a los peores de los calvarios para demostrar lo malo que es, lo feos, sucios y malos que somos.

Sin embargo, seguimos en el mismo camino, tratando de favorecer, de la mejor manera que lo podamos presentar, a las nuevas políticas públicas que den *aggiornamento* a una discusión de estas características. Con lo cual, el objetivo, sí, tiene que seguir siendo ese.

Establece criteriosa y responsablemente el principio constitucional de soberanía popular, fundamental. ¿Por qué razón, presidente? Porque el único dueño del poder político de este país es el pueblo. Entonces pone el acento en el origen del principio de la representación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tiene dicho en un fallo de 2005 en los autos “Ponce, Carlos c/ Provincia de San Luis”. No puede haber objeción constitucional entre la elección popular y los principios de la Constitución, dijo con toda claridad. No la puede haber. Fortalece la soberanía del pueblo que los miembros de la magistratura sean elegidos por la voluntad popular, y no por estamentos corporativos.

Presidente: la Asociación de Magistrados, por loable y respetable que sea, no existe en la Constitución Nacional. Y el Colegio de Abogados, por respetable y honroso que sea, no existe en la Constitución Nacional.

Por más respetables que sean, son instituciones que no comprende la Constitución Nacional; ni su existencia es una existencia constitucional.

Entonces, la designación por jueces y abogados de quienes integran el Consejo de la Magistratura no puede hacerse a través de organizaciones de la coyuntura.

Sr. Presidente. – Un segundo, senador.

Todos los senadores y senadoras que lo precedieron tuvieron un promedio de cuatro minutos por encima del tiempo –yo lo tengo anotado–, mientras yo estaba sentado acá.

Así que les pido por favor, como todos pudieron hablar, que siga hablando el senador Fernández.

Sra. Montero. – A María Eugenia Estenssoro le cortaron el micrófono, y a Cimadevilla...

Sr. Presidente. – No, a Cimadevilla no le cortaron el micrófono, porque yo estaba cuando estaba hablando Cimadevilla.

Sr. Fernández. – No puede hacerse a través de organizaciones de la coyuntura, presidente. Nuestro propio Preámbulo define que la soberanía radica en el pueblo, con el sufragio, los sistemas electorales y los partidos políticos. En la Constitución del '94, esto quedó zanjado. Porque la definición del voto se estableció en el artículo 37, y la exclusividad o la única posibilidad de presentación de candidatos lo fijó en el artículo 38 para los partidos políticos.

Entonces, ¿qué queremos inventar? ¿Una cosa nueva, sin modificar la Constitución, como decía el senador Sanz?

Nadie modificó la Constitución; la Constitución es la que está. Porque si no, hubiesen presentado cuatrocientas denuncias, como suelen hacer, y acá no sucedió.

Es más, dice la Corte en el fallo “Ríos, Antonio Jesús” de 1987, citando a Maurice Duverger, que es un señor muy grande, de noventa y pico de años, jurista francés, que es el primero que estableció la conexión directa entresistema electoral y sistema de partidos. Que el sistema representativo y el sistema de partidos políticos son sinónimos.

Dice la Corte que en la forma representativa de gobierno consagrados en los artículos 1° y 22 de la Ley Fundamental, el pueblo, como entidad política, es la fuente originaria de la soberanía, y el modo de ponerla en ejercicio es la elección de los representantes por el cuerpo electoral sobre la base de la representación libre.

Los partidos políticos nacieron para eso, presidente, y son los titulares del monopolio de las candidaturas. El radicalismo defendió toda la vida esto, toda la vida. Pero, además, le demuestro que estas corporaciones de coyunturas no son tan prístinas y limpietas. Le cuento que uno de los abogados que es elegido, el doctor Fargossi, para que cerrara el acuerdo, lo sentaron junto a otro abogado, que se llama Juan Pablo Orlando Zanetta –según dicen, no me consta, en presencia del doctor Ricardo Gil Lavedra–, para acordar que estaba una mitad del tiempo uno y la otra mitad del tiempo el otro. Es tan descabellada la situación, que se presentó una carta documento reclamándole que le dé el lugar. Una carta documento que dice: Con motivo del inminente vencimiento el 18 de noviembre es que debe hacerse efectiva la rotación en el Consejo de la Magistratura Nacional conforme el acuerdo que sin reservas suscribiéramos el 16 de julio del año 2010.

¡Una carta documento para reclamarle el cargo! No se vio nunca una cosa de estas.

Sr. Presidente. – Le solicito que vaya redondeando.

Sr. Fernández. – Voy redondeando, presidente.

Entendemos que son muchas las cosas que se dicen. He escuchado todo tipo de cosas. Ni las manos ni la cabeza, como decía el senador Sanz: nosotros pensamos políticamente y ejecutamos políticas públicas todos los días.

No me gusta chicanear, pero no quiero dejar pasar algunas cosas. Me parece que en todo este tipo de cosas no se han tenido ciertos aspectos en cuenta.

Lo que dijo el senador Morales es que la Corte dictará su reglamento –el de ella– y nombrará a sus empleados –los de ella–. Lo que dice el 114 es que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad los miembros –lo que dice actualmente– tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

En la provincia de San Luis...

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Fernández. – Ya termino. Me faltan dos minutos más y termino.

La ley 4.872 permitió que las ternas propuestas para el Consejo de la Magistratura caducaran en 30 días y después, no se podían presentar por un año. La 5.062 violó el principio de intangibilidad de los salarios. La 5.067, de emergencia judicial, en el caso de un ciudadano que ganó un juicio contra el Estado provincial entre el 96 y el 2010, no cobró nunca. La 5.073 negó la posibilidad de solicitar medidas cautelares. La 5.071 y la 5.073 consolidaron la posibilidad de litigar contra el Estado; Estableció la inembargabilidad de las rentas y de los bienes del Estado. La 5.012 declara la caducidad del mandato de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados; los elige el Poder Ejecutivo. La 5.113, de emergencia judicial por un año, exceptuó al Superior Tribunal de dictar sentencias. La 5.123 derogó la colegiación y se la quedó el Superior Tribunal. Entonces, que no se diga que nosotros queremos avasallar sabe Dios qué cosa.

Planteamos algo muy claro. No dice “mayorías” porque el artículo 41 de la Constitución que se hizo en 1853 por parte de la Confederación no varía en ese tema de los dos tercios, pero habla de la acusación específica de los ministros de la Corte; no habla del resto. En este caso, el artículo 114 alude con claridad a la mayoría absoluta, y nosotros discutimos en ese marco.

A partir de esa discusión que se dio en San Luis, tres juezas fueron dadas de baja. Se trata de Ana María Carreaga, Adriana Gallo y Silvia Maluff. ¿Sabe qué? Esta causa fue declarada admisible por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La entonces fiscal de Estado dijo en la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos mandó cartas documento, nos recusó en causas donde intervenía el Estado y llegó a decir que lo nuestro era un acto de subversión. Esto es entrometerse en las cosas del Poder Judicial.

Acá lo que se dice es cómo se van a seleccionar los magistrados en el marco de un equilibrio que reclama la propia Constitución. Así, 6 van a formar parte de los académicos, 6 van a ser legisladores, 6 entre jueces y abogados, y la discusión está saldada.

Creo que es una pena no tener un poquito más de tiempo...

Sr. Presidente. – Gracias señor senador.

Antes de finalizar, el senador Cimadevilla había pedido el uso de la palabra.

Sr. Cimadevilla. – Sí, señor presidente.

En su alocución, el senador Fernández dijo que nuestras decisiones en el Consejo de la Magistratura obedecían a convencimientos que habían logrado hacernos miembros de alguna corporación mediática. En lo particular, en absoluto. Además, quiero aclarar que no estoy en la Comisión de Selección. No se puede por ser senador. No firmé ningún dictamen aprobando absolutamente ninguna terna y, finalmente, aclaro por si no lo sabe, que las ternas no se trataron no por culpa nuestra sino porque el oficialismo no bajó a dar el debate.

Es más, suponiendo que no iba a aprobar esa terna, me comí una denuncia penal por parte de la Procuración General de la Nación. Eso habla a las claras de la tolerancia de este gobierno.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: quería que se leyera concordantemente el artículo 113 con el 108.

La jefatura del Poder Judicial la ejerce la Corte. No le está dada en el 114 la facultad al Consejo de la Magistratura de designar personal. Sí de administrar el presupuesto, pero el manejo del personal le corresponde a la Corte.

Quería hacer esa aclaración para que se lean todos los artículos que corresponden.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. De esta manera, se comienza con los cierres...

Sr. Fuentes. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: previo a la utilización del tiempo de los señores jefes de bloque, como miembro informante y presidente de la Comisión, quería comunicar las modificaciones que se van a introducir al texto.

Por otro lado, escuché en mi oficina el curioso debate. El miembro informante de la minoría, el senador Sanz, a quien respeto, no hizo un solo planteo jurídico sino un brillante, sostenido y coherente análisis político.

La senadora Negre de Alonso se agravia de la pretensión de administrar, cuando lo determina el texto constitucional al establecer que corresponde al Consejo de la Magistratura, el que tendrá a su cargo la selección y administración del Poder Judicial.

Otras exposiciones giraron ideológicamente en torno de si es válido un análisis material de la realidad, o si filosófica o teleológicamente uno es viejo o joven ideológicamente o no. Es decir, todas cuestiones interesantes para discutir, pero no hay un solo argumento jurídico que conmueva la constitucionalidad de esta ley. Como está de moda pedir la inconstitucionalidad, quiero decir que no hay un solo argumento jurídico expresado.

Pero expresé tres preguntas: la primera, ¿dónde prohíbe la Constitución que los consejeros no puedan ser electos por el voto popular?; la segunda, ¿dónde establece la Constitución mayoría agravada para el funcionamiento del Congreso?; y la tercera, ¿dónde la Constitución establece que no debe el Consejo de la Magistratura administrar los recursos?

Señores: respeto las apreciaciones políticas e ideológicas, pero a los efectos de conmover la solidez constitucional del proyecto, no hubo opiniones valiosas, más allá de que las respeto. Reitero que no hay un solo argumento que sostenga la inconstitucionalidad de esta ley.

Sr. Presidente. – Antes de leer las modificaciones, senadora Negre de Alonso, ¿quiere decir algo?

Sra. Negre de Alonso. – No.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Quisiera reiterar los argumentos de inconstitucionalidad.

El artículo 114 dice expresamente que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre los tres sectores que representa. Luego se agrega que será integrado por científicos y académicos.

Pero alude al equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Solo da la posibilidad de la elección popular, en línea con la filosofía y lo que está escrito en la Constitución, a la política. Punto. Luego se refiere a los jueces de todas las instancias y a los abogados de la matrícula federal. No dice que los jueces y los abogados que integren el Consejo de la Magistratura deban ser electos por el voto popular. Es inconstitucional desde el punto de vista que no se cumple con el artículo 114. Entonces, ¿cómo es que no hay ningún argumento?

Hay otros argumentos de inconstitucionalidad. El que transgrede el 113. Me refiero al inciso 14) del artículo 4°, modificadorio del artículo 7°. Además, se elimina la mayoría agravada de los dos tercios. Es verdad que no está escrita. Pero la lógica tiene que ver con que la garantía de la independencia del Poder Judicial está en que debe haber mayorías agravadas para las decisiones claves de designación, que se elimina, y para la remoción de los jueces. Eso figura en el inciso 16) del modificado artículo 7° y, también, en el artículo 13° al aludir a la designación.

Con el tema de la entrevista, le dan la facultad al plenario de romper la meritocracia. Si hay un postulante que tiene buenos antecedentes y rindió un buen examen, si no les gusta la cara, pueden tener la facultad de romper esa meritocracia. Entonces, rompen la independencia del Poder Judicial y el sistema de división de poderes.

Son los artículos que acabamos de plantear.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: les voy a marcar otras inconstitucionalidades.

El artículo 10 dice que el Consejo de la Magistratura reglamentará la presente ley. Por el artículo 99, inciso 2), las leyes las reglamenta el Poder Ejecutivo. Aquí hay otra inconstitucionalidad. Esta misma ley dispone que puede fijar los impuestos de Justicia. La facultad tributaria es del Congreso. No es del Consejo de la Magistratura.

Y el 114, la elección de los miembros abogados, académicos y jueces, no es por elección popular, que la Constitución la limita únicamente a quienes integran los organismos políticos. No es que lo priva. El poder constituyente ha decidido que la elección popular únicamente se usa para los organismos políticos y no para el Consejo de la Magistratura.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: lamento que el senador Fuentes no me haya escuchado porque me tomó tiempo y lo estudié y creía que había hecho una argumentación jurídica. Pero él dice que ninguno ha argumentado jurídicamente.

Le quiero decir que, además de lo que dicen los senadores preopinantes, lo que manifesté respecto de la delegación legislativa en el Consejo de la Magistratura es sobre la base de una ley que cayó el 25 de agosto de 2010. Entonces, esa ley no está vigente y ahora delega esas facultades al Consejo de la Magistratura.

¿Sabe qué sucede? Le pido al senador Fuentes que interprete constitucionalmente a la luz de lo que la vocera del partido oficialista ha dicho. Acá lo que se viola es el sistema representativo, republicano y federal. Artículo 1° de la Constitución Nacional.

El senador Fernández, al hablar de los estamentos, dijo que se tomaba de la legislación europea. Y es cierto. Pero la inconstitucionalidad más grande es que se viola la

división de poderes. La mayoría no puede gobernar los tres poderes porque en este sistema constitucional plasmado en el artículo 1° se establece, claramente, que hay independencia de poderes, hay limitación, y el control lo ejerce el Poder Judicial.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fuentes para leer las modificaciones.

Sr. Fuentes. — Cómo no.

Se modifica la redacción del último párrafo del artículo 2° para adecuar el régimen de suplencias a lo previsto en el artículo 61 del Código Electoral. Asimismo, se introduce una fórmula más amplia para las causales de miembros suplentes.

Leo el artículo 2°. Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 2°.- Composición. El Consejo estará integrado por 19 miembros de acuerdo con la siguiente composición. 1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el pueblo de la Nación por medio del sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar. 2. Tres (3) representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la Nación por medio del sufragio universal. Corresponderán dos (2) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a la que resulte en segundo lugar. 3. Seis (6) representantes de los ámbitos académicos o científicos de amplia y reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente elegidos por el pueblo de la Nación por medio del sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en segundo lugar. 4. Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de las Cámaras de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y uno (1) a la primera minoría. 5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.

Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante el mismo procedimiento por el cual se eligen miembros titulares de cada estamento, se elegirán miembros suplentes para su reemplazo en caso de renuncia, remoción, fallecimiento o cualquier otra causal previsto en la ley o reglamentos.

Se introduce en el primer párrafo del artículo 3° la posibilidad de reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura por un período consecutivo. Se especifica que los miembros del Consejo cesan en sus cargos por cambios en las calidades de la función y que, en esos casos, deben ser reemplazados por sus suplentes para completar el mandato respectivo. Este reemplazo se considerará como período a los fines de la reelección.

Leo el artículo 3°. Sustitúyase el artículo 2° de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias por el siguiente: Artículo 3.- Duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por un solo período consecutivo. Transcurrido un intervalo de un período, podrán volver a ser elegidos. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de académicos y científicos, jueces en actividad, legisladores o abogados de la matrícula federal cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes para completar el mandato respectivo. A tal fin, ese reemplazo se contará como período a los efectos de la reelección. Es decir que se modifica

el sistema. Antes, había ese período provisional, que no incidía en la reelección, ahora sí incide.

Artículo 4°. Incorpórase como artículo 3° bis de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, el siguiente. Artículo 3° Bis. Procedimiento. Para elegir a los consejeros de la Magistratura, representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente de la Nación. La elección será por una lista de precandidatos presentada por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales mediante elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias. Se aplicarán las normas del Código Electoral Nacional, las leyes 23.298, 26.215 y 26.571 en todo aquello que no esté previsto en la presente ley y no se oponga a la misma. No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidatos al Consejo de la Magistratura. No podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política. El registro de candidatos y pedido de oficialización de las listas a candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura se realizará ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas a consejero...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Morales. – ¡Esto es una falta de respeto! ¡Ni las lean!

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente...

Sr. Morales. – ¡No es así!

Sr. Pichetto. – Señor presidente: sobre el texto que está en cada una de las bancas, se van a ir formulando los cambios y se va a dar lectura de manera previa a la votación, artículo por artículo. Así que me parece que con esto está clarificado el tema. Va a haber algunas reformas que no son trascendentes, que no hacen a la estructura legislativa, pero se van a ir leyendo artículo por artículo y, después, se va a votar.

Además, quiero decir que esto forma parte del funcionamiento del Senado. Así que no hagan una tragedia donde no la hay.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. – ¡Por favor, señores senadores!

Sr. Morales. – ¡Hagan lo que quieran!

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un dictamen y va a haber algunas modificaciones que vamos a proponer para que se voten artículo por artículo. Creo que con esto está agotada esta discusión...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Morales. – ¡Hagan lo que quieran!

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Con respecto a lo que plantea el señor senador Pichetto, quiero decir que el grado de improvisación que está mostrando el oficialismo con la presentación de estas modificaciones hace que digamos que directamente voten ustedes los cambios que

pretendan hacer. Ni siquiera se pueden entender o analizar en profundidad los cambios que pretenden incluir a este proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: llevo muchos años en el Congreso. Sobre el texto que está en las bancas, va a haber modificaciones, que vamos a proponer en este recinto y que vamos a someter a votación. Esto forma parte del funcionamiento del Senado; no tiene nada de anormal ni de ilegítimo.

Hay un texto y se van a introducir algunas modificaciones.

Sr. Presidente. – Senadora Morandini: ¿quiere agregar algo?

Sra. Morandini. – Esta presentación de las modificaciones termina dándonos la razón ante la afirmación de que no hacemos objeciones constitucionales. La primera objeción constitucional es el tratamiento que está teniendo este proyecto de ley.

Yo no puedo hablar de la experiencia legislativa, pero a mí me parece que esto obedece a una cuestión de sentido común; ni siquiera tenemos en nuestras bancas las modificaciones. No es ni costumbre ni común; y esto nos da la razón.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Me parece que este es un debate totalmente estéril.

Hay un dictamen y nosotros vamos a proponer modificaciones en algunos artículos. Como se hace siempre, el presidente de la comisión va a proponer algunas modificaciones en el recinto. Esto no tiene nada de ilegítimo ni de extraño; ha pasado así con muchas leyes que se votaron aquí.

Sr. Presidente. – Para comenzar el cierre del debate, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la verdad es que nunca pasó esto. Nunca pasó en el tratamiento de un proyecto de ley de estas características que nos sorprendan a esta hora, en el momento previo a la votación y después de efectuado el debate, con el planteo de modificaciones a una iniciativa de esta envergadura. La verdad es que no pasó nunca en el Senado y constituye un antecedente serio. No quiero dejar de marcarlo porque venimos descendiendo en el plano institucional.

Estamos en el tratamiento de un proyecto de ley que desde distintos sectores se ha manifestado que tiene rasgos de inconstitucionalidad. Entonces, resulta de muy mala práctica parlamentaria lo que se está realizando en este momento. Así que yo quiero plantear como moción de orden que este proyecto vuelva a comisión. Que se vote la moción de orden en este momento porque me parece que esto no corresponde a la práctica parlamentaria que tiene el Senado de la Nación.

En tal sentido, reitero la moción de orden para que este proyecto de ley vuelva a comisión.

Sr. Presidente. – Tal como marca el Reglamento, someteremos a votación la moción de orden.

Sr. Pichetto. – Hay unas ligeras modificaciones a algunos artículos; incluso, algunas de ellas son acomodamientos de textos. Entre otras, está el tema de que los consejeros podrán ser reelegidos. Ese tema se habló en el marco de la comisión y ahora se incorpora en el texto.

No son temas estructurales del proyecto de ley y las modificaciones las vamos a plantear en voz clara en cada momento que corresponda. Si no están de acuerdo, las votarán en contra. Pero estas modificaciones no cambian la estructura central de la ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Si lo trataron en la comisión, ¿por qué no viene en el dictamen? Están hablando de la legislación electoral. El señor senador Fuentes acaba de leer unos artículos del Código Electoral. ¡Por favor!

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – No estamos de acuerdo con que este proyecto vuelva a comisión.

Presidente: sométalo a votación, si quiere.

Sr. Presidente. – ¿Usted quiere que lo pongamos a votación?

Sr. Morales. – Claro, votemos.

Sra. Escudero. – Señor presidente: el sistema de votación electrónica no funciona en mi banca. No identifica mis huellas y no puedo votar.

Sr. Presidente. – Sí, puede votar.

Sra. Escudero. – No, pero tiene que funcionar.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación la moción de orden...

Sr. Giustiniani. – ¿Puede informar el sentido del voto?

Sr. Presidente. – Sí: el voto positivo sería para que el proyecto de ley vuelva a comisión y el voto negativo sería para que no vuelva.

Sr. Giustiniani. – Vamos a votar afirmativamente.

Sr. Presidente. – Usted...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Marino. – Suspenda la sesión, señor presidente. *(Risas.)*

Sr. Presidente. – Ya pueden votar...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. – Me indican por Secretaría que se puede votar.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Presidente. – Ha sido rechazada la moción. Se registraron 35 votos negativos y 25 afirmativos.

Sra. Labado. – Señor presidente: no se registró mi voto, que es por la negativa.

Sr. Presidente. – De acuerdo; entonces, se han registrado 36 votos negativos y 25 afirmativos.

– *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹*

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: de la misma manera en que lo expresaron la senadora Morandini, la senadora Estenssoro, el senador Linares y nuestro miembro informante, el senador Juez, desde el Frente Amplio Progresista venimos a rechazar los tres expedientes en consideración por considerarlos un grave retroceso en el compartido objetivo de democratización de la Justicia.

Hablo de la restricción de las cautelares, que alejará de la Justicia a los más débiles y a los más desprotegidos; a la incorporación de un estamento más a través de las Cámaras

¹ Ver el Apéndice.

de Casación, que alejará a los jubilados de sus derechos al extender tres o cuatro años más su proceso de reclamo; y a esta reforma que se propone al Consejo de la Magistratura, que conspira contra la premisa constitucional de la independencia de la Justicia.

Primero, no puedo dejar de señalar la situación, el contexto y el marco en que se ha desenvuelto el abordaje de esta propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, lo que estamos viviendo en este momento es el corolario más expresivo de lo que constituye una falta de respeto al Parlamento nacional.

Llegó el proyecto el martes pasado, el miércoles se firmó el dictamen y en quince días se va a dar sanción definitiva a un paquete de leyes con un tratamiento exprés. Por eso no me parece menor el tema de la metodología, dada la manera en que se ha abordado la cuestión.

Parece que hay improvisación; que existe temor a un debate profundo y de participación social como el que se dio en el caso de otras leyes importantes –tal como la de matrimonio igualitario, donde se hicieron audiencias públicas y se recorrieron todas las provincias del país– en un paquete que fue presentado bajo el título “democratización de la Justicia”. Sería bueno que el oficialismo exprese esta contradicción que ha manifestado en sus alocuciones y durante estos días en que hemos realizado este debate.

Se planteó por parte del secretario de Justicia que era un cambio revolucionario para los próximos cincuenta o cien años. Por otro lado, se dice que no hay que dramatizar el debate porque son algunas reformas que se están realizando y que no es para tanto. Me parece que sería bueno que el oficialismo se ponga de acuerdo en cuanto a ante qué tipo de cambios en la Justicia estamos.

No se ve solidez en la fundamentación de las propuestas. No se la ha visto a lo largo de estas pocas horas en las que las hemos tratado. Además, absolutamente todas las organizaciones no gubernamentales convocadas ayer plantearon distintos rasgos de inconstitucionalidad de esta reforma planteada. Lo hizo el CELS desde el punto de vista de las cautelares. Nos llegaron a todos los senadores y senadoras documentos del Colegio Público de Abogados y de las asociaciones de juristas –quienes tendrían que haber sido convocados junto con las ONG a este debate–, en los que han manifestado graves interrogantes respecto de la reforma planteada.

Creo que el núcleo conceptual de lo que estamos debatiendo tiene una trascendente gravedad. Estamos discutiendo la independencia de la Justicia y acá estamos abordando una norma que atenta en forma directa contra ella. Digo esto porque se estructura una elección de los consejeros al Consejo de la Magistratura a través de los partidos políticos en consonancia con el candidato a presidente de la República. Es decir, el concepto de esta reforma sería que es electo un presidente de la Nación que tiene una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, nada más y nada menos que el órgano que debe elegir y remover a los jueces.

Quiero quedarme un poco en el concepto de la mayoría automática. Sabe usted, señor presidente, que quienes tenemos algunos años en el Congreso de la Nación asistimos y tuvimos participación en lo que fueron los juicios políticos a la Corte Suprema de Justicia del menemismo. El núcleo central conceptual de los juicios políticos –primero fueron planteados a toda la Corte y después hubo que tomar casos específicos, porque esa prueba no pudo ser pasada– fue el tema de la mayoría automática.

Quiero que se adjunte la participación que tuve cuando se destituyó al doctor Antonio Boggiano de su cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de juicio político. Me tocó ser partícipe después de asumir en diciembre de 2003. Y el núcleo de la fundamentación fue justamente que...

Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿me permite una interrupción?

Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: el senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Giustiniani. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero clarificar que vamos a someter a votación el dictamen que está impreso y se halla en la banca de cada uno de los senadores.

No vamos a hacer ninguna modificación: ni una coma. Vamos a votar el proyecto que hemos dictaminado en el ámbito de la comisión.

Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: leo textualmente lo que manifestaba el 28 de septiembre de 2005.

Dije en aquella oportunidad: En este proceso de juicio político que se lleva a cabo contra el doctor Antonio Boggiano, se lo acusa de mal desempeño de sus funciones. Pero, sin perjuicio de que ese mal desempeño fue demostrado puntualmente en este proceso, no podemos dejar pasar que en la formalidad de dicha figura se halla incluida, en este caso, la falta de independencia del juez cuestionado respecto del Poder Ejecutivo. Entonces, la verdadera razón del mal desempeño del magistrado no se debió a su ineptitud en razón de falta de conocimiento de la materia sino a su ineptitud basada en su falta de independencia de los designios del principal ocupante de la Casa Rosada.

Todos recordamos esa época. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la de la mayoría automática, fue la que consagró la privatización de todas las empresas del Estado. Fue dramático porque se trató de la exacción de nuestro recurso. Fue aquella Corte la que consagró la expoliación de los trabajadores argentinos y consagró el ataque a todos los usuarios. Cada una de esas medidas se hacía en función del poder económico.

Entonces, me parece que esta es la cuestión clave que estamos discutiendo: por qué la independencia de la Justicia es importante; por qué las mayorías automáticas atentan contra el principal objetivo que debe tener una democratización de la Justicia, que es que el ciudadano de a pie sea defendido y esté lejos de la posibilidad de la opresión del poder económico y del poder político.

Esta reforma se analizó desde distintos aspectos. Hubo valoraciones muy importantes durante el día de hoy. Se planteó desde muchos puntos de vista. Se hizo historia. Se habló desde la teoría de la democracia y desde el equilibrio de los poderes. Podemos ir hasta Julio César, cuando abandonó la República y se coronó emperador, como se manifestó aquí; o hasta Napoleón, que obligó a Beethoven a cambiar su dedicatoria de la Heroica, que había compuesto como homenaje a la Revolución Francesa.

Se pueden traer muchas metáforas acerca de lo que estamos discutiendo, pero no tenemos duda de que incorporar a las listas partidarias a los candidatos al Consejo de la Magistratura es terminar con la independencia de la Justicia. Lo dijo gráficamente, con mucha claridad, el senador Juez: es ponerles en el pecho un cartel del partido político.

Por más de veinte años fui presidente del Partido Socialista. Acá estamos diciendo que la independencia de la justicia, una justicia rápida para el ciudadano, integra el más básico y elemental requerimiento de los organismos de derechos humanos en la Argentina y en el mundo, como lo expresaron las ONG que concurrieron al Senado ayer. No somos contrarios al debate de la soberanía popular, que pensamos siempre enriquece, pero no estamos discutiendo eso.

¿Por qué no se aplica el juicio por jurados que está en la Constitución Nacional? Es un mecanismo directo de participación de la ciudadanía en los juicios. Qué mecanismo más directo que ese juicio por jurados. ¿Por qué no se aplica? Está en la Constitución de 1853 y fue retomada por los constituyentes del 94. ¿Por qué no debatimos la elección de los jueces con los mecanismos directos? Sería un buen debate a realizar. El mismo Eugenio Zaffaroni dijo que era descabellado, porque esto ya es cuestionado en todo el mundo. Pero se realiza en distintos estados federales de Estados Unidos, donde jueces de primera instancia se eligen por el voto de la gente, pero hay restricciones, no son los partidos políticos. Se ponen los currículos de los jueces y la gente vota.

Este mecanismo de votación de los jueces está también en Bolivia. Nos hablaban también de la provincia de Chubut, pero acá no nos estamos refiriendo a la soberanía popular en la elección de un juez. Estamos hablando de otra cuestión que también es delegativa, porque se está votando a un representante que va al Consejo de la Magistratura, que va a depender del partido político porque tiene que integrar las listas y que tiene ese poder para poder designar la designación y la remoción de los jueces.

Por eso, a esta altura yo quiero hacer una reafirmación, porque se escuchó la cuestión de los poderes corporativos y ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que la justicia tenga que ser independiente de los poderes económicos! Se han escuchado distintos testimonios de los señores legisladores que han tenido distintas experiencias con respecto a esta justicia. Nosotros también la hemos tenido desde el Socialismo. Y no me quiero ir a Enrique del Valle Iberlucea. Alfredo Bravo fue privado de su banca por esta justicia. A Alfredo Bravo después de haber sido electo por la voluntad popular de la ciudad de Buenos Aires, le robaron la banca, impugnamos a toda aquella Corte Suprema de Justicia y esos jueces subrogantes con argumentos y fundamentos escandalosos nos privaron de esa banca, y fue ratificada por el Senado la expoliación de la banca de Alfredo Bravo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con modificar esta justicia? Pero no estamos en el camino correcto, sino todo lo contrario.

Por eso, creo que una reforma de la Justicia tiene que poner como punto fundamental al ciudadano. No se habló de ciudadano en este recinto. Se habló de los poderes corporativos, se habló de los partidos políticos, no se habló del ciudadano de a pie. No se habló de los jubilados, no se habló de los usuarios de los servicios públicos, no se habló de los más débiles. Si una reforma de la justicia no sirve para acercar al ciudadano a la justicia, ¿para qué sirven, entonces, las reformas? ¿Va a ser la justicia más rápida después de esta reforma? No, de ninguna manera. Entonces, al jubilado no le vamos a poder dar una buena noticia esta noche cuando se apruebe la incorporación de un escalón más a los reclamos que viene haciendo. A los usuarios de los colectivos, de los celulares tampoco les vamos a poder decir que ahora van a estar más protegidos.

El objetivo principal de una reforma de la justicia, de una democratización verdadera de la justicia es que el ciudadano tenga un acceso más rápido a la misma. Con

esta integración del Consejo a la Magistratura ¿la va a tener? Claramente que no, no cambia nada en absoluto en ese sentido.

Acá estamos discutiendo el poder de un Consejo de la Magistratura que es hijo del Pacto de Olivos. Del acuerdo de los dos grandes partidos de la Argentina, que fue el Pacto de Olivos, ahora va a quedar un Consejo de la Magistratura hecho como traje a medida en este momento del partido gobernante y después de 2015 será traje a medida del partido gobernante, sea quien sea. Por eso, no estamos conceptualmente de acuerdo con estas modificaciones. Y yo creo que no es un problema de buenas o malas intenciones. Se ha hablado bastante, siempre se habla bastante de eso, para mí está muy claro todo. ¡Está tan clara esta reforma! No hemos discutido de justicia esta noche, acá estamos hablando de cuestiones electorales y entonces ello me obliga a ingresar en el terreno electoral.

Cuando empezó el tema de la reforma de la justicia, todos con nuestros asesores, con nuestras compañeras y nuestros compañeros empezamos a ir a la bibliografía y se han hecho aportes importantes también esta noche: las teorías de la democracia de Aristóteles a Montesquieu, Rousseau, Hamilton, con el equilibrio de poderes de Weber a Bobbio acerca del contrabalance del poder, pero la verdad es que este debate termina siendo mucho más prosaico porque más que estar discutiendo de la filosofía del derecho estamos discutiendo otra cosa.

Sobre esta propuesta que enviaba el Poder Ejecutivo realizada por el Ministerio de Justicia uno decía si la había hecho Julio Halak o Julián Alvarez. Terminó pensando, sobre todo con las modificaciones que quisieron introducir a último momento, que esta la hizo, me sale Lousteau, no Landau. Tampoco es Laclau, tampoco. Laclau que es el autor de la teoría... Landau hizo esta reforma, el apoderado del Partido Justicialista, ingresando en el terreno electoral; porque, en definitiva, lo que están planteando acá es una clara modificación electoral del Consejo de la Magistratura.

Primero, quiero dejar constancia de que tiene que ser por mayoría especial, porque estamos en una reforma electoral y la Constitución Nacional es muy clara cuando dice que toda reforma electoral como la de los partidos políticos tiene que ser por mayoría especial y acá estamos incorporando una categoría más desde el punto de vista electoral. Así que quiero pedir que el secretario tome nota de esto y que en la votación se registre la mayoría especial. Esto es muy importante, no sólo para el Senado sino para la Cámara de Diputados. Tiene que ser la mitad más uno de los miembros del cuerpo, no de los presentes.

Sr. Pichetto. – Treinta y siete votos, para su conocimiento.

Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el senador Fernández.

Sr. Fernández. – La necesidad de la mayoría absoluta es tanto para lo electoral como para lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura.

Sr. Giustiniani. – Si no hay debate, le agradezco, porque la pantalla decía que la mayoría requerida es de veintinueve...

Sr. Presidente. – Pero eso es de lo anterior. Eso es lo que usted pidió que se tratara...

Sr. Giustiniani. – Me parece muy bien. Si estamos todos de acuerdo, bárbaro. Está claro.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo...

Sr. Giustiniani. – Perfecto. Mayoría especial. En la Cámara de Senadores y en la de Diputados.

Entonces, entrando en el terreno electoral, creo que esto ameritaba un debate muy de fondo de la cuestión electoral, sobre todo en este Senado. Y en ese sentido, yo pregunto

por qué distrito único. Los candidatos van a ser todos de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. ¿Va haber candidatos de provincias chicas del interior del país? Ninguno. Porque para poder ganar una elección, hay que poner todos candidatos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, que tengan mucha expresión mediática. Esto está clarísimo.

¿Por qué distrito único? ¿Quiénes pergeñaron esto? Hubiera sido bueno que lo hubieran venido a discutir con nosotros. Y pregunto por qué mayoría y minoría, como han propuesto las ONG, eliminando a las terceras fuerzas. ¿Por qué se dejan afuera a las terceras fuerzas? ¿Con qué criterio? No es inconstitucional, pero ¿por qué? ¿Por qué se cambia que de los dos tercios se pasa a la mayoría simple? No es suficiente que digan que la Constitución no lo prohíbe. Hay que argumentar estos cambios de fondo desde el punto de vista electoral.

Entonces, señor presidente, viendo como está planteado esto, observo que se ha hecho una ingeniería electoral. Más que estar discutiendo de filosofía política y de democracia, acá se ha hecho un ejercicio de ingeniería electoral para que el actual partido en el poder tenga mayoría automática en el Consejo de la Magistratura. Me parece que esto es lo que hoy estamos discutiendo. Claramente, este proyecto no expresa una democratización de la justicia, sino otra cosa. Este proyecto de ley no significa un avance para el país. Implica un aumento del poder del gobierno actual sobre la justicia.

Ahora bien, después de todo lo escuchado, alguien podría decir: “Pero qué tonto, ¿recién se da cuenta de esto? Si se hace para esto.” Claro que se hace para esto. No hay ninguna duda.

Sin embargo, vuelvo al principio: ¿dónde está la gente en esta ecuación? Bueno, el planteo es: “Quédense tranquilos, que como este gobierno está a favor de la gente, démosle más poder a este gobierno, que la gente se va a beneficiar.” Este sería el razonamiento inductivo. Pero hemos visto que hay muchas leyes en que esto no pasa, y desde muchos puntos de vista, esta iniciativa tiene cuestionamientos. Sobre todo la referida a las medidas cautelares. Espero que la modifiquen mañana, tomando lo que han planteado las organizaciones, no lo que nosotros hemos dicho...

Sr. Pichetto. – Si la modificamos, no se enoje...

Sr. Giustiniani. – No, que la modifiquen, no sorprendiendo como ahora. Pero la verdad, es que la ley sobre las medidas cautelares, tal como está planteada, tiene la misma filosofía que la ley antiterrorista. O sea, de restricción de derechos de los más débiles; de restricción de la libertad de los más débiles; de restricción de los reclamos de los que menos tienen; de poner en situación a la protesta social; de amenaza concreta.

Entonces, yo creo que esta cuestión que hoy se aborda está en esa filosofía de decir: “Vótennos a nosotros, representantes, que vamos a ir al Consejo de la Magistratura. Vuelvan a sus casas tranquilos y miren por TV, que les vamos a anunciar las buenas noticias que vamos a tomar.”

Por eso, creo que lamentablemente esta noche y hoy hemos hablado más de elección y de votación que de justicia.

Y como conclusión, creo que el objetivo fundamental es controlar el Consejo de la Magistratura. Creo que acerca de la constitucionalidad o no del planteo, los voy a defraudar, porque no es mi fuerte realizar ese análisis, pero, claramente, se ha expuesto la situación de los artículos 1º y 29, porque conceptualmente creo que todo lo que atente

contra la premisa de la independencia de la justicia –y esto desde mi punto de vista ocurre– merece un análisis de constitucionalidad. Y no tengo ninguna duda de que esta norma la va a tener.

Quiero finalizar refiriéndome al debate que se ha expresado acerca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros no podemos analizar la realidad como una fotografía y de esta tomar luego fotografías viejas que nos gustan y ponerlas hoy como fotos nuevas. Todos, desde la oposición, hemos siempre rescatado como una de las principales acciones del gobierno en estos diez años, después del juicio a la Corte menemista, la designación de la actual Corte Suprema de Justicia. Se lo hemos reconocido al gobierno como un avance importante. Y el saldo a favor lo ha tenido siempre el gobierno. La oposición no ha tenido un saldo a favor en esto. Lo hemos reconocido como una de las cuestiones más importantes de estos diez años de gobierno, y la más importante desde el punto de vista institucional. No solamente es importante el decreto de autolimitación, sino también las características de los jueces propuestos para esta Corte. En ese sentido, ha sido un avance increíble desde el punto de vista institucional que, por ejemplo, llegaran mujeres a ser juezas de la Corte. Significó un avance muy grande desde el punto de vista de la calidad institucional que llegara a dicho tribunal una mujer como Carmen Argibay.

Sin embargo, ahora se la ataca. ¿Por qué se la ataca a Carmen Argibay, que fue presa en la época de la dictadura, el 24 de marzo de 1976? Ella ha hecho una de las tareas más eficientes; es la mejor representante de las mujeres en el fuero judicial; y es organizadora de las libertades de los derechos de la igualdad de la mujer. Pero Carmen Argibay ha dicho, hace muy pocos meses, que el último bastión del estado de derecho en la República Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quizá dijo mucho. Quizá su mayor pecado es ser demasiado independiente. Y ahora el gobierno –esto está claro por sus distintas manifestaciones– desprecia a su mejor creación. Creo que tendría que reflexionar al respecto, porque cuando uno desprecia a su mejor creación, es porque está llegando al fin de un ciclo.

Así que, señor presidente, en virtud de las consideraciones expuestas, y fundamentalmente porque pensamos que esta modificación que se realiza en el Consejo de la Magistratura es un paso muy grande hacia atrás en la premisa constitucional de la independencia y de la Justicia, el Frente Amplio Progresista va a rechazar el expediente en tratamiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ¿por qué ahora? ¿Por qué un tratamiento exprés? ¿Por qué sin debate? ¿Por qué esta sorpresa de último momento y en voz baja de pretender incorporar modificaciones y después, advertidos de que todo es irregular, corrigen el rumbo? Tenemos que corregir el rumbo de fondo.

Yo no quiero juzgar intenciones, pero lamentablemente algunas cosas hay que decir. Una inmensa cortina de humo. ¿Qué son las medidas cautelares al lado del drama de los inundados, del fracaso rotundo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Comparto lo que dijo el senador Pichetto, rotundo. La ciudad de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más alto y que, además, tiene el ingreso per cápita más alto, tiene el problema de las inundaciones.

Recuerdo que cuando estudiaba vivía en la calle Juan B. Justo y Murillo, y se inundaba por el arroyo Maldonado. ¡Ya se inundaba Buenos Aires! ¡Pasan los años, pasan los años y cada vez es peor! ¡Y lo peor es que se va a repetir, y no porque haya una confabulación de las corporaciones!

La misma crítica es para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡La misma! ¡La provincia más grande de la Argentina! ¡La que tuvo por muchísimos años el Fondo del Conurbano Bonaerense justamente para corregir esos problemas!

Y lo mismo para el gobierno nacional.

Ahora dicen que deberían hablar entre ellos. Hace seis años que gobierna Macri, hace seis años que gobierna Scioli y hace seis años que gobierna la señora Fernández de Kirchner. Si en seis años no han podido hablar... bueno.... Y si escuchamos a los formadores de opinión, son los tres mejores candidatos a presidente y los que tienen mejor intención de voto. Y no se puede hablar nada si no es hablando de ellos tres. Entonces, la Argentina está en un rumbo equivocado. Estamos en un rumbo equivocado. ¡Tenemos que corregir el rumbo para bien de todos!

Tenemos una enorme crisis económica. El senador Sanz, con la precisión, con la seriedad y con la profundidad a que siempre nos tiene acostumbrados, hizo un análisis muy profundo y muy bueno sobre el tema.

Tenemos una enorme crisis social: las inundaciones. Esta mañana, cuando entrábamos al recinto –no sé qué habrá pasado después–, nos enteramos de que tomaron el Concejo Deliberante de La Plata. El hilo siempre se corta por lo más delgado: van a empezar por Bruera. Bueno, está bien, qué sé yo... Yo no lo defiendo a Bruera tampoco, no sé qué hizo.

En consecuencia, tenemos esta enorme crisis que, además, se va a repetir lamentablemente y que se puede extender a otras provincias ya que puede haber otras inundaciones porque el clima es así, porque hay un cambio climático y porque está el efecto invernadero, etcétera. En vez de estudiar, de prevenir, de discutir y de debatir cuáles son las soluciones, nos dedicamos a pensar en otra cosa para ver qué hacemos hoy y así pasamos un día más.

Tenemos una crisis en el Poder Judicial. No podemos negar que hay una crisis en el Poder Judicial, una enorme crisis. Hace poco tiempo estuvimos tratando el tema con la presencia de los padres de una de las víctimas de los jueces que largan a los condenados que vuelven a cometer delitos. Es un problema del Poder Judicial.

Tenemos enormes problemas por el retardo de los juicios. Ayer nos reuníamos con los abogados, con los colegios de abogados y el promedio para dictar sentencia son cuatro años, cuatro años. Esto está referido a lo que vamos a tratar luego respecto de las medidas cautelares, porque hablamos de seis meses pero los juicios duran cuatro años. Entonces, directamente suprimamos las medidas cautelares, porque los juicios duran cuatro años como mínimo.

Por lo tanto, tenemos una crisis en el Poder Judicial que requiere de soluciones. Ni qué hablar, ni qué hablar de ese juez amigo del gobierno que cada vez que hay una causa penal complicada de un funcionario importante, ¡oh, casualidad!, el sorteo sale para ese juzgado. Casi podemos adivinar cuál va a ser el resultado del sorteo cuando hay una causa importante. Ya podemos todos decir o escribir en un papelito cómo va a salir el sorteo.

¡Eso es crisis del Poder Judicial! No me digan a mí que la Corte es buena, porque ¿qué hace la Corte ante eso? Lo deja pasar, total el Poder Judicial es independiente. ¡No! ¡No puede!

¿Qué hace el Consejo de la Magistratura, el que estaba antes, el que modificó la entonces señora senadora y qué hará el que viene? ¡Es una crisis profunda, enorme!

Miles de juicios de los jubilados, sentencias que no se cumplen. ¿Y qué hace la Corte Suprema ante los casos en los que no se cumplen sus sentencias? Mira para un costado. Tengo entendido que ha ordenado que el ex procurador de Santa Cruz fuera repuesto en su cargo, y no puede hacer nada. Si no pueden hacer nada, muchachos, no son independientes, no respetan la división de poderes y no saben ejercer el poder que tienen. Entonces, caen en la categoría que señalaba para el juez Boggiano, de ineptitud; o tienen que hacer cumplir los fallos. Si a los jubilados se les reconoce un derecho...

La Corte dictó sentencia sobre el Riachuelo. Entonces, tantos piropos para la Corte... perdónenme, pero eso tiene una cuota, desde mi punto de vista, de cierta hipocresía.

Ayer denunciaban acá los abogados del Colegio Público de Abogados, de la Agrupación Será Justicia, entre otros, que presentaron amparos por la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y la Corte no los resuelve, hace como cinco años de esto. Estoy hablando de amparo, juicio de amparo, juicio sumarísimo, cortísimo, tiene la obligación de dictar sentencia rápidamente. Desde 2006.

La Corte también tiene que resolver los juicios de las provincias. Yo sé que es complicado, ¡lógico que es complicado!, ¡pero para eso son jueces! ¡Para eso es la Corte Suprema! ¡Para eso está la división de poderes! Si las provincias tienen razón en lo que están reclamando, corresponde que haga lugar a las demandas; y si no tienen razón, corresponde que no le dé lugar a las demandas. Pero la peor forma de impartir justicia es justamente no dictar sentencias. “Que se dediquen a redactar códigos”, dice la senadora Negre de Alonso. No resuelve los conflictos. Entonces, tengo mis dudas. Incluso me voy a atrever a decir lo que muchos no se atreven a decir. El juez Zaffaroni fue juez del proceso; tal vez, haya hecho lugar a los *habeas corpus* y sea un héroe, no lo conozco por eso. Pero fue juez del proceso. Como ahora vamos a dictar una ley, por la cual el que fue juez del proceso no puede ser..., tal vez no sea una causal anterior, pero es una causal. Y si, además, es propietario de varios inmuebles que se alquilan a un comisario para que se ejerza la prostitución, y hay silencio, es complicado. No estamos ante poderes tan transparentes. Entonces, yo no acepto la apología que se hace. Todo esto es lo que, entre todos, tenemos que procurar ir corrigiendo, para transitar un camino mejor.

Entonces, cuando se habló de la democratización del Poder Judicial yo estaba sentado en un lugar muy incómodo, porque estaba justo frente a la presidenta cuando leía el mensaje, todos se ponían de pie para ovacionar y yo quedaba ahí, en medio de los aplausos y de los papelitos que pasaban, porque a mí no me entusiasmaba tanto lo que decía. Pero, cuando escuché lo de la democratización, pensé –como pensamos todos los de nuestro bloque, ese día estaban Escudero y Negre de Alonso; estábamos los tres juntos–, o pensamos que, antes de opinar en contra o a favor, teníamos que ver de qué se trataba, porque como idea no estaba mal. Somos democráticos y queremos profundizar en los temas de la democracia. Pero, cuando vemos que estas reformas no parecen tender a la mejora, ¿qué va a mejorar?

Primero, cuando se trató la reforma, pasar de veinte a trece, se discutió este tema y el miembro informante fue la actual presidenta, quien dijo: ellos quieren veinte. Voy a leer, presidente: quieren veinte cargos, con veinte prosecretarios, con veinte protesores, veinte pro para todos los cargos, con esa estructura elefantiásica, paquidérmica, que pagan los contribuyentes argentinos y que sería importante que pagaran si, además, se recibiera un buen servicio de justicia. Pero, además, no se recibe un buen servicio de justicia. Y todo lo que se dijo para lograr bajar de veinte a trece. La ley fracasó, porque ahora tenemos que modificarla de nuevo, y modificarla de trece a diecinueve, parecido a veinte. Como no pueden reconocer que se equivocaron, inventan un argumento nuevo. Pero se había bajado a trece, me parece –y acá es donde juzgo intenciones, aunque a mí no me gusta hacerlo, pero tengo que decirlo; es una sesión importante, tengo que decirlo– que la intención fue dominar el Consejo de la Magistratura, hacer una ingeniería para dominar, al milímetro, la situación y poder designar, remover. No sé. No me parece que sea bueno.

Ahora, se busca otra ingeniería para que el poder político, el actual o el que sea, el que gane las elecciones, tenga la posibilidad de dominar el Consejo de la Magistratura. Grave error desde mi punto de vista. Tenemos que tener un Consejo de la Magistratura correcto. Tenemos que tener un Consejo de la Magistratura que ayude a administrar el Poder Judicial de la Nación. Pero no tenemos que tener un Consejo de la Magistratura adepto al gobierno de turno, porque esto no es bueno para este gobierno, ni para el próximo, ni para el que sigue, ni para ninguno, por lo menos eso me parece. Pero esto tiene que ver con la concepción de la señora presidenta.

Cuando tratábamos la ley del Matanza-Riachuelo, cuando yo cuestioné que el Parlamento dictara una ley por la que se metía en la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires, en la autonomía de la provincia de Buenos Aires, en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, e imponía una autoridad de cuenca; cuando la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires habían dictado leyes diciendo que no la iban a aceptar –aunque después lo hicieron–, la señora presidenta dijo, en respuesta a lo que habíamos dicho, que acá estamos nosotros, el Parlamento nacional, cumpliendo el rol de órgano deliberativo del Poder Ejecutivo nacional. Esta es la concepción, lo he dicho varias veces. Pasa inadvertida, pero ahora que estamos en las últimas en cuanto a la división de poderes, ésta es la concepción: que somos el órgano deliberativo del Poder Ejecutivo, que no somos un poder. Según el concepto de la señora senadora, en aquella oportunidad, éramos el órgano deliberativo del Poder Ejecutivo. Esto fue lo que dijo y está en el Diario de Sesiones del 11 de octubre de 2006, página 57. Leo de nuevo: acá estamos nosotros, el Parlamento nacional, cumpliendo el rol de órgano deliberativo del Poder Ejecutivo nacional.

A mí, que digan que los académicos no tienen que ser necesariamente abogados, me parece –y en esto voy a discrepar con mis colegas abogados– absolutamente correcto. Miren, el juez Marshall, el más famoso juez de los Estados Unidos...

Sr. Pichetto. – Hizo un curso de tres meses.

Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cómo? Hizo un curso que creo que duró menos, todavía. Marshall sólo tomó un entrenamiento legal formal mediante un breve curso de conferencia, al que asistió en 1780.

Sr. Pichetto. – Era la primera etapa de la organización. Era presidente John Adams.

Sr. Rodríguez Saá. – Sí. Hizo todo el andamiaje jurídico de la división de poderes. No era abogado. Tampoco fue abogado John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tampoco era abogado Abraham Lincoln; tampoco Benjamín N. Cardozo, que fue ministro de la Corte de los Estados Unidos. Fueron excelentes jueces.

Discrepo porque, cuando juzgaron a la Corte, en la oportunidad que citó el senador por Santa Fe, había senadores que no eran abogados. Y no los invalida para nada, porque cuando están votando están tomando una decisión política, que tiene implicancias jurídicas, pero es una decisión política. Entonces, en el Consejo de la Magistratura, para elegir un buen juez, puede ser un académico de cualquier rama, eso no me asusta, pero creo que la democratización de la justicia debería orientarse más a la elección de los jueces, que tanto horroriza, y aclaran que no se trata de la elección de los jueces.

En los Estados Unidos, los fiscales los elige el pueblo. Entonces, la tarea de perseguir a los delincuentes la tiene el pueblo, directamente a través de un fiscal que eligen ellos. No hay que asustarse de que pudiéramos elegir. Inclusive, en muchos de los estados norteamericanos, se elige a los jueces, y tuvieron este problema de que eran los partidos políticos, esto trajo problemas, entonces algunos estados cambiaron el sistema y no son los partidos políticos, si no que es una elección separada. Pero en muchos estados, cierta categoría de jueces de primera instancia se eligen por elección directa.

Hay que leer el artículo 24 de la Constitución, que dice: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”. Entonces, si queremos democratizar, vamos al juicio por jurados, pero esto otro me huele más a acumular poder en el hoy partido gobernante, como será mañana cuando esté otro partido.

Como se han hecho muchas citas de autores muy famosos, acudí a mi manual. Ustedes dirán, sobre todo los radicales: “Pero el Adolfo cómo va a sacar un principio republicano de Perón”. (*Risas.*)

Fui al Plan Quinquenal. Miren ustedes, al Plan Quinquenal. *Primer Plan Quinquenal*, capítulo V, Justicia. Empieza la introducción: Perón, para el pueblo argentino. Dice así: La independencia del Poder Judicial es requisito indispensable para la prosperidad de las naciones. Pero la Justicia, además de independiente, ha de ser eficaz y no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. Perón. División de Poderes.

Sr. Pichetto. – Lo compartimos.

Sr. Rodríguez Saá. – Claro que compartimos. (*Risas.*)

Entonces, defendamos la división de poderes. En nombre de la democracia no se puede destruir la República. Defendamos la división de poderes, que hoy consiste en respetar la independencia del Poder Judicial; no entrometernos en esa independencia, procurar que se fortalezca y corregir, que es lo que el pueblo argentino quiere, todos los males que hemos señalado. Corrijamos los males. Ya hemos probado con 20 miembros; podemos probar con 13; vamos a volver a probar con 20. Eso no soluciona el problema.

Por último, tanto que les gusta hablar de la pluralidad de voces, para la pluralidad de voces, el sistema D'Hont, no éste de mayoría y minoría, no 4 y 2; sistema D'Hont. Que estén todas las voces, que nadie se pueda apoderar, que para lograr los dos tercios para nombrar, para remover, para cambiar, para hacer lo que sea necesario, tengamos que

ponernos de acuerdo. Entonces, cuando sea justo lo que se quiera hacer, se van a conseguir los dos tercios. Si no, va a ser muy difícil.

Por eso, vamos a votar en contra de este proyecto y reiteramos que la democracia hay que fortalecerla, pero también hay que fortalecer la República como lo quería Juan Domingo Perón.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cano.

Sr. Cano. – Señor presidente: diría que el legislador Fuentes casi me robó el argumento con el que iba a empezar mi exposición, porque él planteo que no escuchó fundamentos jurídicos que realmente le hagan cuestionarse la constitucionalidad o no de este proyecto. Yo iba a plantear exactamente lo mismo: honestamente, no escuché, por lo menos, del miembro informante, argumentos jurídicos válidos, sustentables que ameriten que hoy estemos en el ámbito de este Senado tratando lo que el oficialismo denomina la democratización de la justicia.

Hay que ser muy ingenioso para vincular revoluciones inconclusas, hechos de la historia, incluso con la propia dictadura, como si este proyecto fuera la continuidad de esas epopeyas de la historia contemporánea de la Argentina. Lo digo honestamente.

El legislador planteaba a modo de crítica la ausencia de la oposición en el debate y hablaba del vacío. Casualmente, creo que ese vacío que intentamos mostrar es el vacío al que somete el gobierno nacional a las fuerzas políticas de la oposición y al resto de la sociedad argentina, cuando en temas trascendentes –de una manera o de otra, hoy hemos coincidido en la necesidad de modificar o mejorar la administración de Justicia– no convoca absolutamente a nadie. Es más, las idas y vueltas en este recinto respecto a que se iba a modificar y después no se modifica, muestra el grado de improvisación en el que estamos tratando hoy este tipo de norma. Entonces, casualmente, ese vacío que intentamos demostrarle al oficialismo es el vacío de la democracia, de los consensos, de los hechos consumados a los que este gobierno nos tiene efectivamente acostumbrados.

Cuando se apela a hechos de la historia en cada uno de los temas que son polémicos, que tienen miradas distintas, se intenta poner de este lado a la oposición vinculada con hechos que tienen que ver con la dictadura, cuando nosotros tenemos una posición en este relato épico que el oficialismo plantea.

Creo que hay que terminar con esto de una vez por todas. Me gustaría –concedería la interrupción a algún dirigente o senador del oficialismo– que hoy, en este recinto, año en que se cumplen treinta años de la democracia, alguien pueda acreditar algún hábeas corpus del matrimonio Kirchner como abogados en la época del proceso militar entre tantas ejecuciones de la Circular 1050, que los tenía muy ocupados por esa época. ¿Cuál era la posición política cuando por ahí Lúder planteaba la amnistía a la Junta? No lo digo con ánimo de chicana política...

– Murmullos en el recinto.

Sr. Cano. – ...ni de intentar desviar el eje del debate, porque son ustedes los que plantean esto.

La senadora Rojkes de Alperovich se ríe, pero en Tucumán, el bloque del Frente parla Victoria votó por unanimidad como vocal de la Corte al doctor SassiColombres, fiscal de la dictadura. Yo voté en contra. Salí en *Página/12*. Fue uno de los pocos votos en contra. Finalmente, el llamado del presidente hizo que antes de asumir, cuando estaban festejando un viernes a la noche, renunciara.

Me parece que hay que poner esto blanco sobre negro, porque si no en cada debate, los que votamos en contra de una iniciativa del gobierno, con un eje de debate que nos plantea el gobierno, se pretende de alguna manera vincularnos con hechos del proceso, con lo cuales no tenemos absolutamente nada que ver.

Nosotros consideramos que estos proyectos claramente significan un retroceso en la tan anhelada búsqueda de la independencia del Poder Judicial. El problema no es la Justicia. En todo caso, el problema de la Justicia, que ha sido consolidada en todo este tiempo por leyes, por la Constitución Nacional y por las fuerzas políticas, es la política, el problema es de qué manera concebimos este valor fundamental que es la independencia del Poder Judicial.

No quiero entrar a analizar lo que los representantes del gobierno del Frente para la Victoria han hecho en cada una de las provincias de la Argentina con el Poder Judicial. También podríamos analizar el proceso de Néstor Kirchner en Santa Cruz con respecto a lo que hicieron con el Poder Judicial. Y podríamos ver de qué manera se constituyó ese Poder Judicial. Por ejemplo, hubo un hecho de corrupción que ha sido investigado por una sobrina del presidente que, obviamente, quedó en la nada. Se presentó una recusación al juez, que también tenía que ver con el gobierno, pero como pareció que no era un hecho importante tener lazos sanguíneos con los imputados, no se hizo lugar.

Respecto de lo que decía el senador Rodríguez Saá, que tiene que ver con la agenda de la política, en treinta años de democracia y en pleno siglo XXI, tenemos cosas que nos pasan casualmente por la ausencia de políticas públicas y por reeditar hechos como los que estamos debatiendo hoy. Porque si efectivamente se quiere mejorar la administración de Justicia, hay que tener amplitud para debatir en serio con todos los actores y hacernos cargo de los errores que hayamos cometido cuando nos tocó gobernar y de qué hicimos a favor o en contra de la independencia del Poder Judicial.

Nada de eso ocurrió y la prueba de ello –como también se dijo aquí– es que en la elaboración de estos proyectos no ha habido una amplia participación, por lo menos, de los integrantes del bloque oficialista del Senado. Aquí se estaban planteando modificaciones que finalmente no se hicieron. Y cuando uno plantea la modificación de un proyecto de ley es porque, evidentemente, hubo un profundo estudio y está convencido de que lo que se plantea es sustantivo en el debate y en la sanción de la norma. Sin embargo, finalmente se retrocedió.

En ese sentido, si hubiéramos discutido como política pública esta convocatoria que hizo la presidenta para escuchar las decisiones que ya se habían tomado, lo hubiéramos hecho para poner sobre la escena y la agenda política cuáles son los problemas desde la visión del oficialismo que tiene la administración de Justicia, para que todos aportemos. Y, respecto de lo que decía el senador Rodríguez Saá, también fue una sensación de expectativa y esperanza que tuvimos desde el bloque de la Unión Cívica Radical cuando escuchamos el título, de que efectivamente, se quería trabajar para mejorar la administración de Justicia. Sin embargo, esa esperanza, casi de ingenuo, rápidamente se diluyó cuando tomamos conocimiento de lo que se pretende hacer con estas modificaciones.

Por otra parte, si hubiéramos trabajado en políticas públicas, después de veintiséis años de gestión del Justicialismo en la provincia de Buenos Aires, no habría habido muertos producto de la ausencia del Estado y de la falta de planificación. De la misma

manera que, como bien se dijo aquí en lo que respecta a la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay ausencia de políticas de Estado.

Asimismo, con relación a esa ausencia o negligencia en el ejercicio del poder que hizo que ciudadanos argentinos murieran en las ciudades producto de la inundación, también tiene responsabilidad el gobierno nacional. Así como desde el Ministerio de DeVido se convoca a los intendentes, faltándoles el respeto a los gobernadores y al federalismo, para otorgarles obras, hoy escuchábamos a la presidenta anunciar 11 millones de pesos para los productores tucumanos. Eso me parece bien, pero le quiero decir a la señora presidenta que 800 millones de pesos es lo que le corresponde a Tucumán si se coparticipa el impuesto al cheque.

Esa falta de respeto al federalismo cuando se convoca a los intendentes, faltándole el respeto a los gobernadores, esa misma práctica la podrían haber usado para convocar a todos los gobernadores para hacer las obras de infraestructura y evitar tragedias como la sucedida en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal. Y para evitar también que en el futuro sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza. Esas son las políticas públicas que hay que debatir; no convocando a discutir cuestiones que están absolutamente decididas sin ninguna posibilidad de participar.

¿Cómo puede ser que se pretenda titular “La democratización de la Justicia”? ¡Hay que democratizar las prácticas políticas! Porque es inconcebible que un gobernador, como el de la provincia de Santa Cruz, diga que la presidenta hace un año que no lo recibe. ¿Qué democracia se sustenta en hechos como este? O que diga que hubo funcionarios que llevaron dinero para ofrecerles a sindicalistas para desestabilizar un gobierno legítimamente votado por su pueblo.

¡Esas prácticas son las que hay que democratizar! O que en pleno siglo XXI y luego de treinta años de democracia haya gobernadores del mismo signo político del gobierno que tengan que ir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos que les corresponden. ¡Hay que democratizar la práctica! Y si queremos mejorar la administración de Justicia, ha habido numerosos proyectos de ley que están aquí y son iniciativas de los distintos bloques.

Cómo puede ser que existan en manos del Poder Ejecutivo ternas que han pasado por todos los procesos de selección y que se siga haciendo uso y abuso de jueces subrogantes, cuando esos magistrados están en condiciones de asumir los juzgados. También podríamos discutir si es válida la discrecionalidad de elegir entre la terna y que eso se mantenga en el tiempo, o acotar el plazo a seis meses y que si el Poder Ejecutivo no eleva la nómina, se tome al primero del concurso.

En ese sentido, estuvimos en Salta y nos entrevistamos con la Cámara Federal, el juez y el fiscal de Orán y nos mostraron cuadros comparativos de la composición del Poder Judicial de la Nación en Salta y Jujuy con respecto a otras provincias que no tienen la trascendencia y la importancia que implica estar en un área de frontera.

Así, un integrante del Poder Judicial nos dijo que Orán es como Ciudad Juárez y que hay mil quinientos colombianos en la ciudad; y que las Madres Contra el Paco, con las cuales también nos entrevistamos, encadenan a sus hijos o le piden a la Justicia que los detengan para que no cometan delitos. Entonces, no es problema de la Justicia, sino de la política, porque no se les da los medios necesarios para que la administración de Justicia llegue.

No hemos escuchado hoy el argumento de los pobres. A lo mejor, el presidente del bloque hace referencia a que estas modificaciones tienen que ver con los pobres. De la misma manera, ¿sabe cuántas obras sin licitación, en contratación directa, se le dio a Lázaro Báez para los pobres? Hoy, los pobres no tienen acceso a la Justicia y con estas normas tampoco la van a tener, porque cuando se agregan Cámaras, se hace más lenta aún la administración de Justicia. Entonces, hay que dejar de usar a los pobres y a la justicia social para argumentar proyectos que, en definitiva, en nada van a beneficiar a los pobres.

Respecto de esta falsa denominación, desde el bloque de la Unión Cívica Radical no compartimos el concepto de democratizar la Justicia. Esto definitivamente va a politizar la Justicia. Todos los senadores que formamos parte de este Senado reivindicamos la política. No escuché a ningún senador de algún bloque que hable en términos negativos del rol de los partidos políticos y de la militancia política. Esto no tiene nada que ver, presidente. No tiene absolutamente nada que ver con hablar mal de la política, como se pretendió plantear desde el oficialismo.

Tengo una innumerable cantidad de causas que involucran a funcionarios del oficialismo. Hoy mismo se dijo acá; tantas veces escuchamos en este recinto denostar la década de los 90; hasta el cansancio tomar como argumento la década de los 90, cuando muchos fueron protagonistas excluyentes de esa década de la Argentina.

Casualmente, las causas que se le imputan al senador Menem se produjeron en la década de los 90, que tanto se ha denostado. Sin embargo, no ha habido acá un solo proyecto del oficialismo para plantear el desafuero. Nosotros no concebimos los fueros como un privilegio ante el resto de los ciudadanos para no someterse a la Justicia. Los fueros son para que acá, en esta banca, podamos con absoluta libertad ejercer nuestro rol como senadores nacionales.

¿Cuánto tiempo más, presidente, se pueden sostener situaciones como la intervención del INDEC y pretender mostrar índices que nada tienen que ver con la realidad? ¿Cuánto tiempo más se va a pretender sostener que el poder adquisitivo de los trabajadores cada vez está en una situación mejor de la que estaba años anteriores? ¿Cuándo los aumentos de impuestos y servicios superaron las paritarias? ¿Cuánto tiempo más se sostiene la política, cuando las actuaciones del Ministerio Público, de la AFIP, de la UIF tienen que estar por delante de las investigaciones de los periodistas y no enterarnos por los medios de prensa de hechos que tienen que ver con la corrupción y con el manejo discrecional de los recursos del Estado? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con un cepo cambiario que impide que el ciudadano pueda comprar dólares, mientras nos enteramos que un personaje gira al exterior más de 60 millones de euros? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una gestión de gobierno clientelar, que somete a millones de argentinos a depender de la dádiva y del subsidio del Estado?

Señor presidente: honestamente, pretendíamos abocarnos –y lo dijimos cuando sesionamos en minoría en la sesión anterior– a tratar los temas que hoy forman parte de la agenda de la gente. Y también pretendíamos, con las críticas que se le hace y que le hacemos al Poder Judicial de la Nación, que efectivamente se tenga la voluntad política de poner a todos los actores, a lo largo y a lo ancho del país, para ver de qué manera mejoramos la administración de Justicia. Pero nada de esto ocurrió. Y una vez más, es la política la que falla. Es la política la que se tiene que democratizar. Es la manera de ejercitar el poder la que se tiene que democratizar.

Finalmente, quiero hacer lectura del artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.

Claramente, lo que manifestó la diputada Diana Conti en términos de que el que gana tiene la responsabilidad y tiene el derecho de manejar los tres poderes del Estado, está enmarcado en lo que plantea el artículo 29 de la Constitución Nacional...

Sr. Presidente. – Senador Cano: el senador Castillo le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Cano. – Sí, presidente.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Castillo.

Sr. Castillo. – Discúlpeme. Espero no cortarle su buen discurso. Lo que pasa es que lo han nombrado tantas veces a este artículo esta noche acá, y yo no soy ni un jurista ni nada por el estilo, pero es un artículo de la Constitución que casualmente rechaza la dictadura legal; y casi diríamos que la primera parte del artículo tiene nombre y apellido.

Esta Constitución se sanciona en 1853; y uno de los nombres era Juan Manuel de Rosas y el otro nombre era Viamonte. Es decir, aquellos que habían hecho uso de las facultades extraordinarias del poder y habían gobernado de esa manera, aunque en una de las causas hubo un plebiscito posterior. Y me gusta decir la palabra “plebiscito” porque aun habiéndose plebiscitado, los argentinos de aquel momento entendieron que era una dictadura legal.

Pero yo le agradezco la interrupción, porque el artículo 29 es uno de los pocos artículos de la Constitución argentina que tipifica un delito, un delito institucional y funcional, que nada más y nada menos, los únicos que lo pueden cometer somos los que estamos acá: diputados o senadores de la Nación, o diputados y senadores de las provincias.

– El señor senador Pichetto hace uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Castillo. – Pichetto: es más fácil pedirle a él una interrupción que a usted. Y lo más importante es que los constituyentes de aquel momento plantean la otra parte: sumisiones y supremacías en donde la vida, el honor y la fortuna de los argentinos puedan estar en peligro por algunos gobiernos que quieran ir sobre esto. Y es un artículo puntual sobre la división y la independencia de los poderes.

Es solo eso lo que quiero plantear. Es un artículo puntual sobre la división y la independencia de los poderes; y responsabiliza con la pena –que acá nadie la nombra– de “infames traidores a la Patria”. Por supuesto que es un término viejo. Pero, reitero, “infames traidores a la Patria”.

Muchas gracias. Solamente voy a pedirle al señor secretario que, antes de que se ponga a votación este proyecto de ley, se lea por secretaría el artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Cano.

Sr. Cano. – Gracias, presidente.

Finalmente, la verdad es que cuando se plantea democratizar la Justicia de parte de un gobierno que pretendió poner a un personaje como Reposo al frente del Ministerio Público, que mintió con absoluta impunidad acá, en el ámbito del Senado, y que todavía sigue siendo titular de la SIGEN; o cuando se habla de democratizar la Justicia y se bancan

jueces impresentables como Oyarbide, honestamente, presidente, no hay sustento entre lo que se dice y lo que se hace.

El pecado de sectores de la Justicia en la Argentina ha sido decirle a este gobierno que de esta manera no se puede gobernar. El pecado ha sido decirle al gobierno que algunos actos de ellos han sido inconstitucionales. Ese ha sido el pecado. Y la actitud que mueve que hoy estemos tratando este tipo de proyectos tiene que ver con una actitud de revancha. Tiene que ver con una actitud de tener un Poder Judicial con jueces del perfil de Oyarbide, que garanticen impunidad. Acá no se busca consolidar la independencia del Poder Judicial. Acá lo que se busca es garantizar la impunidad.

Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no vamos a acompañar este falso relato de denominar estas iniciativas como “Proceso de democratización de la justicia”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidente.

Una breve reflexión. Por lo menos, el discurso del senador preopinante es disperso. Primer comentario.

Voy a tratar de abordar la temática que hemos venido a debatir esta tarde, que es este proyecto de ley del Consejo de la Magistratura.

Quiero hacer también una breve reflexión a la amenaza vertida por algunos senadores de que podríamos estar incursos en el artículo 29.

Yo digo que ha habido hechos en la historia reciente de la Argentina, cuando la Alianza le otorgó casi poderes extraordinarios a Cavallo, al Partido de la República –al cual perteneció la senadora Estenssoro–...

– La señora senadora Estenssoro hace uso de la palabra fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – ...o algunas declaraciones de políticos relevantes...

No voy a dar interrupciones...

Sra. Estenssoro. – He sido aludida y tengo derecho...

Sr. Pichetto. – Hoy no doy interrupciones. No voy a dar interrupciones. Yo la escuché y escuché a todos. ¿Qué a va hacer?

Sra. Estenssoro. – He sido aludida y tengo derecho a defenderme. Es una cuestión de privilegio...

Sr. Pichetto. –No, no hay una cuestión de privilegio. No hay ningún agravio, presidente. Ningún agravio hay.

Sra. Estenssoro.– ¡Miente! ¡Quiero aclararlo porque no es verdad lo que dice el senador!

Sr. Pichetto. – Era el Partido de la República el del ministro Cavallo.

Sigo, porque...

Sra. Estenssoro.– ¡He sido aludida y quiero aclarar!

Sr. Pichetto. – Presidente: no voy a dar interrupciones porque me cortan el discurso, y además, no he agraviado a nadie.

Sr. Presidente. – Senadora: por favor...

Sr. Pichetto. – He definido que estaban en ese tiempo histórico, nada más; y no es ninguna ofensa.

Sr. Presidente. – El señor secretario va a hacer la interpretación del tema.

Sr. Secretario (Estrada). – Yo comparto el punto de vista del senador Pichetto.

Sr. Presidente. –Muy bien.

Senador Pichetto: siga.

Sr. Pichetto. – Gracias, presidente. Voy a tratar de continuar, si es que usted me permite...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sra. Estenssoro.– ¡Quiero hacer una cuestión de privilegio!

Sr. Pichetto. – Presidente: ponga orden.

Sr. Presidente. – Por favor; hemos tenido un debate largo, bastante ordenado y con algún intento de desordenarlo más de una vez. Vamos a terminar este debate.

Sra. Estenssoro.– Señor presidente: ¿puedo decir algo?

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: por favor..,

Sra. Estenssoro.– ¡El senador Pichetto está mintiendo y quiero dejar aclarado por qué!

Sr. Pichetto. – Gracias, presidente. Si pone orden en la sala, puedo seguir hablando.

La señora nos trata de traidores a la Patria y el senador Castillo acaba de ratificarlo y eso no es una ofensa para ella. Ella cree que puede decir cualquier cosa alegremente y cree que no ofende. ¿Qué le vamos a hacer?

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – El pasado; le preocupa el pasado.

Sra. Estenssoro.– ¡El senador Pichetto tiene miedo de que diga la verdad, porque el que miente es usted, señor senador!

Sr. Pichetto. – No. Quiero que le pida que se calle, presidente.

Sr. Presidente. – Por favor, senadora. No se la tocó; se la nombró como integrante de un partido.

Sra. Estenssoro.– ¡Pero el senador Pichetto miente, porque yo no tenía nada que ver con ese partido!

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Presidente. –Continúe, senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Bueno, está bien; no tenía nada que ver con la Unión por la República, no tenía nada que ver con Cavallo, nunca tuvo nada que ver con la Coalición Cívica tampoco, ahora no tendrá que ver con Macri, con López Murphy tampoco... En fin...

Lo que quiero decir, señor presidente, es que acá ha habido actitudes y situaciones en la historia reciente de dirigentes importantes que enviaban cartas al exterior para tratar de que no se refinanciara la deuda y de que se sancionase a la Argentina; y de ninguna manera fueron sometidos al artículo 29 que nos relataba el senador Castillo como si nosotros fuéramos analfabetos funcionales y no hubiéramos leído alguna vez la Constitución Nacional.

Acá no estamos construyendo ninguna epopeya y tampoco estamos haciendo ningún hecho revolucionario. Tampoco se va a caer la República por estas leyes, como dicen por ahí. He escuchado declaraciones de fiscales que se purificaron en el altar del juicio a las Juntas, y que además transitaban las etapas de la dictadura –como se dijo acá–, en el sentido de que se cae la República. No se cae nada. Tampoco es un proceso revolucionario ni para cooptar la Justicia; son todas consignas que se lanzan y, por supuesto, los medios de comunicación las reproducen.

Estamos en la esfera de nuestras facultades legislativas que la Constitución nos ha delegado. El artículo 114 dice que el Consejo de la Magistratura se sancionará mediante una ley que dicte el Congreso por mayoría absoluta, como mencionó recién el senador

Giustiniani. Así que, desmitifiquemos el debate, desdramaticémoslo y pongámonos en el plano de una discusión institucional; una más.

Este es un esfuerzo del Poder Ejecutivo con un conjunto de leyes. Seguramente que faltan muchas. Yo coincido con que hay leyes que son importantes. Creo que hay que ir a un procedimiento más corto; creo que hay que ir a un sistema acusatorio; creo que hay que ir a un sistema de acuerdo de penas para tener respuestas rápidas; creo que hay que ir al juicio por jurados en los grandes temas. Con un juicio por jurados, el caso Marita Verón se hubiera resuelto conforme al sentido común, y también algunos otros casos de esos que en las provincias abundan.

No estoy descalificando a nadie en particular. Digo que hay un conjunto de temas para avanzar; el acceso de los pobres es otro. Últimamente, hemos escuchado a un montón de poderosos hablar de los pobres. Me hace acordar a la foto que se sacó Macri con la chiquita pobre de una villa. Estamos de acuerdo en que hay que permitir la accesibilidad, consolidar la mediación; en fin, todos los procedimientos que den eficacia.

También hay un diagnóstico, que además lo asume la propia Corte que ha trabajado en este tema. La actual jueza de la Corte Elena Highton reconoce que el Poder Judicial está deslegitimado, que tiene problemas de eficacia. Es decir, hay reconocimiento de la crisis.

Cuando ocurren hechos aberrantes y un juez suelta a un asesino... Hoy volvió a ocurrir un hecho terrible: un sujeto que había estado condenado salió, violó y mató a una chica. Esto sucede cotidianamente y se reproduce por los medios de comunicación policial, porque ya no son canales sino medios de comunicación policial atados a la radio policial.

Estamos intentando, estamos dando algunos pasos, que se complementarán con otros. Y creo que acá hubo acciones del Poder Ejecutivo; hubo una invitación de la presidenta y toda la oposición no fue.

Sr. Rodríguez Saá. – A nosotros no nos invitaron.

Sr. Pichetto. – Fueron invitados, y hay una cuestión de respeto a la institucionalidad cuando invita un presidente, pero ustedes no fueron.

Sr. Rodríguez Saá. – No fue así. A nosotros no nos invitaron.

Sr. Pichetto. – Invitó a todos los presidentes de bloques.

Sra. Negre de Alonso. – A nosotros no.

Sr. Pichetto. – Bueno, lamento que no haya llegado la invitación.

Le recomiendo al senador Cano que lea al filósofo Lipovetsky –que le pregunte a Cabanchik, que sabe quién es– que escribió sobre lo que significa la teoría del vacío. El vacío de las ideas, la nada; es como una estación de tren desde donde no se parte a ningún lado; es la inexistencia de la idea; es la falta de vocación para decirle a la sociedad lo que piensan. Eso es lo que hicieron en la Comisión: el vacío. ¿Acto de repudio a qué? Hubieran venido a discutir. No es la primera vez que se pierde una votación, y muchas veces se gana a la opinión pública con la discusión, y además, se construye un camino.

Si mañana tiene vocación de poder esta oposición, que tiene una *capitisdiminutio* mental... Lo digo sinceramente. Crean que el tiempo en el poder va a ser eterno. ¡Ustedes son los que consolidan la eternidad del poder por parte de este gobierno! ¡Ustedes creen que dentro de dos años en las elecciones vamos a ganar nosotros, que dentro de cuatro también y que vamos a ganar siempre, y la verdad que es lamentable la falta de vocación y de actitud política!

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – No doy interrupciones.

Sr. Presidente. – El resto de las alocuciones fueron escuchadas, así que por favor, les pido silencio.

Sr. Pichetto. – Lo que yo sostengo es que le tienen miedo a la voluntad popular. Creen que van a perder; y, entonces, como creen que van a perder, no quieren una ley que finalmente deposita en el pueblo, en la ciudadanía, la elección de los consejeros. Entonces, como creen que van a perder, no quieren la ley.

Mañana se van a votar con las presidenciales; si construyen un liderazgo político, si construyen ideas en el debate político, si no hacen seguidismo a los grandes medios y construyen...

Sr. Marino. – ¿Qué pasó en Viedma?!

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – Les pido que me dejen...

Sr. Presidente. – Discúlpeme, senador Pichetto.

Hasta ahora, todas las alocuciones de cada uno de los senadores y senadoras fueron escuchadas; es más, cuando en algún momento el resto habló, yo los hice callar. Entonces, les pido por favor que nos dejen terminar el debate. Esta Cámara quiere terminar el debate.

Muchas gracias.

Sr. Pichetto. – Hacen una táctica de la interrupción. Cuando le pedí una interrupción al senador Sanz y me dijo que le sacaban la ilación, lo entendí y no lo molesté más...

Sr. Marino. – Solo piense lo que pasó en Viedma.

Sr. Pichetto. – En Viedma ganó la Unión Cívica Radical; no era novedad, senador Marino, quédese tranquilo. Venían gobernando la ciudad, había muerto el intendente, que era un hombre valorable, y ganaron la elección. ¿De qué estamos hablando? Fue una elección municipal. Ojalá se recuperen como partido.

¿Sabe qué? La democracia argentina necesita una estructura de partidos políticos sólidos y la Unión Cívica Radical tiene una historia en la Argentina. Y el sistema político funciona cuando hay partidos de oposición y existe alternancia. Ojalá se recuperen. Yo no quiero que les vaya mal. Siempre lo he dicho. No es algo nuevo. Ojalá construyan un liderazgo moderno, inteligente, con pensamiento propio y que esté afuera, a veces, de hacerle seguidismo a los medios de comunicación o que la agenda se la construyan desde afuera. Ojalá ocurra eso con la Unión Cívica Radical.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – Pida, señor presidente, que me dejen hablar porque no estoy agraviando a nadie ni ofendo a nadie. Reflexiono políticamente.

Creo que no haber asistido al debate de la comisión fue un error de la oposición. Faltó la voz y la discusión política dentro del seno de la comisión. No somos responsables de las acciones y omisiones que les caben como oposición.

Quiero aclarar que no voy a dar interrupciones y pido, además, que me respeten ya que me interrumpen permanentemente.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Morales. – Está faltando al Reglamento. Léalo.

Sr. Pichetto. – No estoy faltando a ningún orden...

Sr. Presidente. – Se han escuchado consideraciones políticas de todo tipo. Entonces, dejen cerrar el debate.

Sr. Pichetto. – Está bien. Senador Cano, le cedo la palabra.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.

Sr. Cano. – Honestamente, a pesar de algunos excesos del senador, cada uno de los bloques se ha manifestado en el sentido que ha querido.

Entonces, a modo de que la sesión termine como corresponde, que el senador haga uso de la palabra para que esto no termine en lo que nadie quiere que termine.

Sr. Presidente. – Además, hay que seguir con otro tema.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Le agradezco la reflexión. Pero no creo haber incurrido en excesos.

Ha sido un debate apasionado. Se han expresado voces muy duras y muy críticas y me parece que he reflexionado en este terreno. Además, pienso que tengo derecho a reflexionar sobre lo que significó el concepto del vacío.

La verdad es que a mí el vacío no me gusta. Creo que los espacios hay que llenarlos.

En cuanto al tema del Consejo de la Magistratura, hay una cuestión de origen que nace con el entramado del Pacto de Olivos.

En este tema daré mi propia opinión ya que, además, me ha tocado transitar la vida parlamentaria de los últimos veinte años como diputado nacional y como senador nacional y, encima, he estado en ambos debates sobre el Consejo de la Magistratura.

El primer debate, en 1995, en la Cámara de Diputados fue sumamente largo. Intervinieron diputados de relieve de distintas fuerzas. Por ejemplo, Juan Octavio Gauna, de la Unión Cívica Radical, un hombre que fue Procurador de Alfonsín, un hombre de prestigio, la propia diputada Carrió, la actual ministra de Seguridad, Nilda Garré, Melchor Cruchaga, un gran abogado, un hombre de trayectoria y correcto, de Adrogué, Provincia de Buenos Aires, y perteneciente a la Unión Cívica Radical, que luego fue secretario de Justicia. En fin, participaron muchos legisladores y hubo un gran esfuerzo del Parlamento para tratar de construir esa ley con equilibrios y contrapesos. Sin embargo, el tiempo demostró que el organismo no funcionaba, se bloqueaba, tenía problemas de lentitud y complejidades que eran inherentes a la propia organización.

La segunda reforma, que ya me tocó en el ámbito del Senado, tenía la intención del Poder Ejecutivo de agilizar los trámites y reducirlos y de ver si con un número menor se podía llegar a un proceso más rápido en la selección y acusación. Y quiero hacer algunas aclaraciones en este último caso.

Se dicen muchas tonterías a nivel de la comunicación y en lo que hace a la acusación a los jueces que tienen mala conducta, mal desempeño o cometen ilícitos.

Pero la experiencia ha demostrado en estos últimos dos años o año y medio la cuestión del bloqueo. Por distintas situaciones, la estructura de los jueces y de los abogados bloqueó decisiones y no se pudieron nombrar nuevos jueces. Entonces, indudablemente, el órgano se encuentra paralizado. Y este problema no solamente lo tiene el Consejo de la Magistratura de la Argentina sino también de otros países. Realmente, se trata de un órgano que tiene una gran complejidad.

La experiencia europea mediante la judicatura y el Consejo de la Magistratura indica que hubo más de veinte años de bloqueo. Incluso, eso determinó el gobierno de los jueces. Es decir, la traba permanente.

El Consejo de la Magistratura de España, con una composición de jueces y representantes de los abogados, se encontraba trabado y, finalmente, era el rey quien dirimía las cuestiones. El zanjaba los conflictos y remitía los pliegos de los jueces.

La última actuación del Consejo de la Magistratura fue la destitución del juez Garzón por querer abrir la situación de la guerra del 36. Es verdad que había una ley de amnistía, pero también es verdad que había un reclamo de muchas familias en el sentido de revisar esa historia.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Pichetto. – Le pido que no deje que me interrumpan.

Más que nunca estoy en el tema. Estoy diciendo que, además, creo que muchos de quienes están aquí, que fueron convencionales constituyentes, han cometido un grave error al incorporar una institución de esta naturaleza, de corte europeo, en una Constitución liberal, al estilo americano, como fue la de 1853 y 1860, que colocaba a la política y al poder político en la definición de los candidatos a jueces. Así funcionó el sistema hasta 1994. Incluso, un funcionamiento correcto, al igual que el sistema americano.

¿Sabe cómo funciona el sistema americano? El presidente envía a la Corte jueces que pertenecen a su partido. Y nadie en la sociedad americana se rasga las vestiduras y sale a decir que se violenta la República o se atenta contra la división de poderes. Los jueces tienen filiación política y nadie se ofende por ello.

Un presidente republicano, si debe nombrar a un juez, va a elegir a un juez republicano y no uno demócrata. En los estados ocurre exactamente lo mismo. Hay una fuerte partidización en términos de la decisión política de la elección. Esto no significa que luego se enojen si hay un fallo equivocado o que lo quieran destituir o que el juez elegido no actúe con la independencia y el criterio con que debe hacerlo. Pero la decisión del envío es eminentemente política y de corte partidario en Estados Unidos.

Hay un libro interesante de Ernesto Bianchi, un constitucionalista que se refiere a la historia constitucional americana. ¿Sabe cómo define al sistema democrático argentino de los últimos años? Como un sistema adolescente. Nadie se rasgaría las vestiduras en Estados Unidos si un juez tuviera una filiación política.

En cambio, acá lo ven como un hecho repudiable o maléfico si pertenece a un partido.

Sr. Castillo. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pichetto. – No voy a dar interrupciones. Además, hoy usted no se la merece. Sea justo. *(Risas.)*

Estudí en la Universidad Nacional de La Plata. Juntamente con la de Córdoba y la UBA eran lugares donde la abogacía tenía buenos profesores.

La cátedra de La Plata como la de la UBA, Santa Fe y Córdoba fueron cátedras realmente importantes. Había gente de mucho prestigio. Procesalistas famosos como Morello o profesionales como Borda, Molinario, Ambrossioni, Linares Quintana, que falleció hace pocos meses luego de una larga vida, Marienoff o Trigo Represas.

Pero en el caso de Morello es muy interesante la visión que tiene sobre los jueces de la Corte. En Estados Unidos también la tienen incorporada. Recién, el señor senador Rodríguez Saá recordaba al juez Marshall. Es cierto que eran las etapas de la organización, que había terminado el mandato de Washington y John Adams era el segundo presidente. Hoy los jueces son abogados pero no necesariamente juristas. En realidad, hubo un solo

jurista en la historia de la Corte de los Estados Unidos que se llamaba Stone; los demás son hombres públicos.

Morello decía que el juez de la Corte tiene que ser un hombre público. Les recomiendo rescatar mi discurso cuando designamos a los jueces de la Corte, porque en este tema tengo coherencia. Yo tengo una mirada crítica sobre algunas figuras que hemos elegido. Creo que tienen prestigio, que son honestos y que su designación ha sido también necesaria en un momento histórico. Hay que comprender al ex presidente Néstor Kirchner por el momento y por las circunstancias que se daban en la toma de decisión sobre jueces que son honorables —nadie discute eso—; yo creo que algunos carecen de la visión de lo público —esta es una mirada personal que no los descalifica. Pero Morello decía que el juez, además de saber y conocer derecho, tenía que acompañar el proceso de la historia, tenía que acompañar al gobierno y al proceso de la sociedad de la manera más razonablemente posible y de la manera más institucionalmente inteligente, para no ir a contramano de los procesos de cambio y de transformación de la sociedad.

En su momento esto le pasó a Roosevelt. En el momento del *New Deal*, cuando Roosevelt asume la Presidencia, había una Corte que era contraria a la reactivación y a la aprobación de una política keynesiana. Recuerden la depresión: había que generar políticas de activación y de generación de empleo y la Corte, que era conservadora, no le permitía avanzar en leyes de promoción y desarrollo y se las declaraba inconstitucionales. Roosevelt, que después fue presidente tres veces más, que murió en el final de la Segunda Guerra y que fue un gran presidente avanzó con todo contra el Tribunal y planteó la ampliación del número de jueces y una nueva reformulación de la organización de la Corte. ¿Por qué? Porque había una Corte que le frenaba el proceso histórico. Yo no digo eso de esta Corte, porque yo confío en la Corte Suprema de Justicia porque creo que tiene jueces de trayectoria. Algunos deberían arraigar más el concepto de lo público, pero son buenos jueces, son honestos.

Ahora bien, hay una situación que nadie revisó en el proceso democrático argentino con respecto a lo que ha ocurrido con las dictaduras y con las salidas democráticas: en general, cuando ha habido interrupción de procesos democráticos inmediatamente lo primero que hacía dictadura de turno —Onganía, Levingston, Lanusse, la dictablanda, la dictadura, Videla— lo primero que hacía era el abordaje y el desembarco en el marco de la Justicia Penal. Porque, lógicamente, tenían que consolidar y convalidar los peores actos: eliminaban prácticamente o revocaban en el cargo a los jueces de la jurisdicción penal, especialmente del ámbito federal y también en el marco de la Justicia Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando reaparecía la democracia volvía a restituir en el cargo a muchos de ellos, a hombres democráticos que habían sido echados o expulsados, o designaba a jueces con vocación democrática, con más nivel de participación en la vida pública de la sociedad, gente más adepta incluso a los procesos políticos que se vivían. Pero nunca en la Argentina se avanzó sobre las cámaras civiles y comerciales, sobre la Justicia Comercial, sobre la Cámara Comercial, que son verdaderos espacios conservadores que han persistido, que han durado en el tiempo y que, muchas veces, han cruzado muchos ríos, gobiernos civiles y dictaduras, y se han mantenido en el cargo; algunos todavía hoy funcionan como jueces subrogantes o jubilados en algunos espacios realmente muy sensibles donde se discute la cuestión económica de la Argentina, la discusión de los grandes intereses económicos, los litigios entre empresas, las cuestiones que resuelven los

procesos de quiebra y de cooptación de empresas. En fin, esta es la verdadera historia. Esto no lo dice nadie o muy pocos, pero ha habido una continuidad prácticamente en el tiempo de determinados fueros que han durado y han perdurado por encima de las dictaduras y de los sistemas democráticos.

Yendo entonces a analizar qué es lo que estamos proponiendo, yo creo que las dos experiencias han sido frustrantes: tanto la primera composición de veinte miembros como la actual, de trece. Creo que en el tema del número se intentó y se buscó tratar de contener respuestas de eficacia, pero indudablemente había una falencia estructural en el sistema de elección. Lo único que tiene realmente de importante la Constitución de 1994 —yo no tengo una valoración positiva, sinceramente, de esa reforma; creo que el jefe de gabinete, tal como fue concebido por los constituyentes se quedó a mitad de camino; creo que el Consejo de la Magistratura dislocó el funcionamiento histórico de la Constitución liberal del 53; considero que hay un montón de instituciones que vinieron con el espacio de la social democracia europea a meterse en un sistema que era totalmente distinto; pero este es otro debate que algún día vamos a dar— es el mantenimiento de la estructura central de la Constitución y que los cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, tienen que ser elegidos por el voto popular. La Constitución del 94 termina con el sistema indirecto de elección de los senadores y plantea la vigencia plena del artículo 33, que habla claramente del principio de la soberanía popular. Yo me pregunto por qué, cuál es la razón por la que se tacha a este proyecto de inconstitucional si está en el espíritu de la Constitución, si el artículo 114 le define al Congreso que se haga cargo de legislar en esta materia y el Congreso lo hace sobre la base del espíritu del artículo 33, que es una cláusula central que pone en la soberanía del pueblo el principio central de la elección popular. ¿Dónde está la inconstitucionalidad, la traición a la Patria y todos los argumentos que se vertieron en este tema?

También digamos esto: los constituyentes no se pusieron de acuerdo en este tema. Fue un debate inconcluso, no se animaron a cerrarlo; tal vez, no tuvieron tiempo, porque a lo mejor estaban preocupados por el proceso de la reelección, que era el corazón central de la reforma y del Pacto de Olivos. Pero la verdad es que al artículo 114 lo construyeron y lo dejaron a mitad de camino. Esto no viene de un día para el otro; el tema del Consejo de la Magistratura no apareció en la noche oscura de las tinieblas del mundo jurídico argentino, sino que apareció al compás de un proceso que iniciaron muchas provincias que se pusieron a legislar con este espíritu de incorporación de institutos europeos en las constituciones provinciales; defensores del pueblo y demás que después no sirven para nada porque se la pasan haciendo denuncias o cumplen el mismo rol del fiscal. Son institutos que, realmente, llenaron de contenido y de páginas a muchos constitucionalistas pero que en la praxis, desde el punto de vista del gobierno, dejan mucho que desear en cuanto a su efectividad. Las provincias empezaron con este debate de instalar el Consejo de la Magistratura, el sistema de selección de los jueces, el jurado —todo este verso— empezó en muchos estados provinciales. En mi provincia lo hicimos en 1988: si bien yo no fui constituyente, ya en 1988 en la provincia de Río Negro se instaló este sistema. En algunas provincias, como en Chubut y en Santa Cruz, los consejeros se eligen por el voto popular. Les recomiendo leer las leyes de estas dos provincias. El consejero de Santa Cruz se elige por el voto popular y en la provincia del Chubut —aquí está presente el señor senador Guinle— los consejeros también se eligen por el voto popular...

Sr. Cimadevilla. – Algunos; no todos.

Sr. Pichetto.– Bueno, algunos, pero es un paso en la línea de la que estoy hablando; es una línea que abre un sistema de representación mucho más abierto. Por acá tenía un papel con las cifras exactas, pero creo que lo perdí: si no recuerdo mal al titular del Colegio Público de Abogados lo eligieron tres mil abogados. Y en la representación de los jueces no sé si llegaron a 300.

¿Y cuál es el sentido de equilibrio con los legisladores que tienen que someterse al voto popular y son parte del Consejo de la Magistratura? ¿Qué equilibrio hay en ese artículo 114 con abogados que son elegidos por 3.000 abogados, o con jueces que son elegidos por 300, cuando los legisladores tienen que someterse al escrutinio popular cada cuatro años y deben ser votados por la ciudadanía?

El equilibrio está dado en que tienen que ir a elecciones también. Si pregunto a cualquiera en la calle quién es el presidente del Consejo de la Magistratura, nadie sabe. ¿Los integrantes? Tampoco.

Estamos tratando de abrir la estructura. No estamos eligiendo jueces por el voto popular.

Coincido en que a lo mejor en algún momento, cuando tengamos sistema acusatorio puro en la Argentina y podamos modelar un sistema rápido y eficaz con acuerdos judiciales, con transacciones de penas para que la condena llegue rápido y se cumpla... Porque en la Argentina no es que falten penas. Existe un sistema donde indudablemente hay personas que cometen delitos aberrantes y salen rápidamente en libertad. No hay ninguna condena perpetua en este país. Entonces, creo que son parte del debate que tenemos que dar. Porque es allí donde la sociedad se sensibiliza.

Y estoy de acuerdo con eso de que sujetos que fueron condenados por delitos aberrantes cumplan la pena. Hay algunos que aun cumpliendo la pena, o los dos tercios, tampoco se resocializan, como creo que tiene que ver con los delitos infamantes de violación. Pero esto es de sentido común.

Lo que estoy diciendo es que el equilibrio también está en el sistema de elecciones. ¿Y dónde se da este sistema electoral? ¿En un club de barrio, representando a una sociedad de fomento o a una liga independiente? Se da dentro del vehículo natural que también establece la Constitución en los artículos 37 y 38: los partidos políticos. No hay otro lugar para ser candidato más que el partido político.

Lo concreto es que estamos abriendo para que entre aire. Estamos democratizando un organismo que no sé si va a funcionar bien. Ahora, eso de que lo tomamos y nos vamos a apoderar y a echar a todos los jueces que queramos no es así. El artículo 115 establece el *Jury* de Enjuiciamiento, que es la parte que juzga a los jueces. Y eso no se modifica, queda integrado como está, con un sistema de proporcionalidad y donde, además, hay que tener dos tercios para echar a un juez. Hay una facultad de acusar; es una mayoría distinta, la estamos modificando.

Muchos se quejan de algunos jueces –los han nombrado–, pero el proceso de bloqueo impide incluso el sistema acusatorio, es decir, que se haga la acusación.

Me ha tocado ser fiscal en el Consejo de la Magistratura. También tuve algunos juicios importantes. Estuve de fiscal en el primer juicio que se hizo a un juez de Santa Fe, que había atropellado a alguien con una lancha. Era uno de los secretarios en la dictadura que iba a tomar las declaraciones al cuartel, el juez Brusa. Y me han tocado otros casos

también.

Me parece que el Consejo de la Magistratura va a tener una herramienta para evaluar la conducta y con un sistema de mayoría puede acusar. Después, el *Jury*, que es el espacio de equilibrio, para destituir requiere dos tercios. Hay garantía suficiente.

¿Sabe cuál es la mejor garantía para los jueces? Ir a juicio político en la Cámara de Diputados. Siempre funcionó correctamente, con un sentido de mucha prudencia.

También me tocó, como diputado, venir a acusar en la Cámara de Senadores. Aquí venía el juez acusado y se sentaba en una de las sillas ahí adelante, con su abogado. Venía el fiscal designado por la Comisión de Juicio Político. Me tocó venir a hacer la acusación ante todo el pleno del Senado. Creo que el senador Romero en ese momento también era senador.

Luego de las exposiciones de los alegatos y de la valoración de la prueba, el Senado pedía que se retiraran tanto el imputado como el abogado defensor y resolvía.

Ese es el sistema americano, el que tanto pontificamos y ponemos como ejemplo. Así funciona en los Estados Unidos, con un fuerte sentido de pertenencia política y nadie se ruboriza. Nadie se asusta y dice que la República se cae a pedazos. Nadie va a decir nada si un presidente de origen demócrata elige un juez demócrata. En los Estados es exactamente lo mismo. Ahora les han incorporado algún comité de evaluación, pero finalmente el poder está en el gobernador que propone y en el Senado que ratifica; en los Estados y en el sistema central del Poder Ejecutivo Nacional de los Estados Unidos. Esto es, en Obama y en el actual Senado de Estados Unidos. Allí reside el poder.

Creo que con la construcción que se ha realizado, lo que estamos tratando de hacer es incorporar oxígeno democrático en una estructura que es históricamente corporativa. No todos los jueces son corporativos. Tampoco quiero caer en el disvalor de generalizar. La Argentina tiene buenos jueces que trabajan mucho y lo hacen sin capacidad técnica ni logística. Hacen un gran esfuerzo. Creo que tenemos una muy buena Corte. Y hay situaciones donde muchas veces los sectores poderosos gravitan en la toma de decisión.

Hoy ha salido un fallo importante. Hay que leerlo bien, porque plantea la constitucionalidad de distintos artículos de la ley de medios y la inconstitucionalidad respecto de un párrafo del artículo 45. ¿Pero qué otra cosa podía hacer esta Cámara más que declarar la constitucionalidad del 161? Transcurrieron casi tres años y medio desde la sanción de la ley. Una ley votada por amplias mayorías tuvo una dilación de tres años y medio. Será la Corte, como máximo tribunal, la que resolverá todo el plano de la constitucionalidad.

Tengo una visión que también quiero transmitir acá. Es un pensamiento que no está reflejado en la ley de cautelares. Mañana vamos a debatir el tema de cautelares.

Creo que la ley es un proyecto moderado y responsable que fija un procedimiento. No se eliminan para nada las cautelares.

La ley que sanciona el Congreso tiene una base de legitimidad impresionante. Se la presume constitucional, válida y legítima, porque fue dictada por la mayoría que fija el Reglamento del cuerpo, o la ley, o la Constitución. Y se presume que esa ley es legítima y no puede ser volteada por la decisión y por el sistema difuso de constitucionalidad que tiene el sistema argentino, donde un juez de provincia o algún juez de paz de una sociedad de fomento puede decir que algún artículo de una ley es inconstitucional. Frente a ese tipo de situaciones, cuando se plantea una inconstitucionalidad de una ley o de un artículo, los

jueces inmediatamente debieran declarar la cuestión como de puro derecho. No hay prueba. El juez debe interpretar la norma y decir si el artículo mencionado como inconstitucional, o la propia ley, son inconstitucionales. Debe resolver rápido en un proceso sumarísimo. Porque además no hay ninguna discusión desde el punto de vista probatorio. Si un artículo o una ley son inconstitucionales, indudablemente está toda la doctrina de la Corte para resolverlo y aplicar esos principios, tanto por los jueces inferiores como por las cámaras. De ninguna manera procede la medida cautelar contra una ley.

Esto no es lo que vamos a tratar mañana. Es mi visión sobre este tema.

Creo que también ha habido en la Argentina un desarrollo de la justicia cautelar. Es cierto que fue entre sectores privados, que hubo una tarea de la Justicia realmente protectora y que se ha desarrollado toda una doctrina de las cautelares, de las autosatisfactorias, de las precautelares y de todo un proceso extraordinario que se ha vivido. Pero la Justicia no puede ser únicamente una cautelar. La Justicia tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con los jueces que elegimos. ¿Saben qué? Porque yo también opino como los americanos y opino como Morello. Creo que los jueces tienen que tener una visión de lo público. Como decía un profesor mío de Derecho Penal II, tienen que tener algo de calle, de estaño, de sentido común, de haber pasado por la vida, porque hay algunos que solamente se dedican a juntar papelitos en los cursos; ¡como tienen tiempo! Además, van a todos los cursos y entonces están preparados para asumir nuevos cargos frente a abogados que, a lo mejor, tienen que trabajar todo el día para poder ganarse la vida. Esto también está pasando, este perfil, este modelo de juez, donde los antecedentes valen el 50 por ciento y el otro 50 por ciento es la prueba oral. Bueno, estamos perdidos. Si algún abogado de la calle, un hombre que lucha todos los días, que no tiene tiempo de hacer un pequeño *master*, un doctorado, quiere ser juez, por más que tenga experiencia, vivencia en la vida, visión de la política institucional, respeto por el ser humano, ese tipo nunca va a ser juez en la Argentina, porque el sistema lo excluye, lo expulsa y no le permite serlo, porque los antecedentes en este modelo son el 50 por ciento. Entonces, vale juntar papeles, vale juntar certificados. No está mal estudiar, yo no desvalorizo el estudio, ¿eh? No quiero que se confunda esto. Porque mañana van a decir que Pichetto está en contra de los que se forman, de lo que estudian. Lo que estoy diciendo es que el sistema de selección no está pivotando sobre lo central, sobre lo importante.

Entonces, no hay inconstitucionalidad. Le contesto al senador Cano que dijo que no había escuchado nada que determinara que esto que estábamos votando no era inconstitucional.

Hay una apertura, un nuevo sistema de elección que nos permite el artículo 114 y que garantiza la Constitución. Además, tiene equilibrio porque esos abogados, esos jueces van a tener que ser conocidos, van a tener que decir quiénes son, van a tener que mostrarse ante la sociedad y también van a estar insertados en procesos políticos en donde las sociedades cambian, mutan, donde nada es terminante, donde el que gobierna hoy puede no gobernar mañana, en donde los procesos en la sociedad también van mutando. Entonces, se requieren jueces que estén preparados para los cambios sociales, que no sean retardatarios. Esto también es seguridad jurídica.

Fíjense qué hubiera pasado si Néstor Kirchner hubiera permitido que la Corte anterior hubiese dolarizado la economía. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hubiese

sido un verdadero desastre, porque además iba a contramano de una política totalmente distinta de salida de la convertibilidad, de salir del uno a uno, de salir de la dolarización.

Señor presidente: creo que no me queda mucho más para decir. El tema de los académicos es interesante. Creo en la apertura porque le incorpora otra visión, no solamente del mundo de lo jurídico sino del mundo de la calle. Hay académicos que van a tener otra formación y no está mal que la tengan, es importante. Puede haber ingenieros, que además tienen formación, son académicos. Puede haber sociólogos, filósofos, otra mirada de la vida. No solamente la corporación de abogados y de jueces.

Esto lo digo sintiéndome parte porque yo he ejercido la profesión de abogado y no tengo un desprecio hacia el mundo de los abogados y de los jueces. Lo digo como un intento más, porque ¿saben qué pasa? Esta cláusula está en la Constitución. Si usted me apura en una definición, me gustaría volver al sistema anterior, pero para eso hay que hacer otra cosa y todos los sabemos. Yo creo que este camino es un esfuerzo que estamos haciendo para ver si podemos lograr que este organismo funcione, que se oxigene, que entre la calle, que entre la mirada de otros sectores que no son del mundo jurídico, que entre la sociedad. Que la sociedad diga a quién vamos a elegir, que esta persona nos merece confianza o no la merece, que nos gusta este partido porque tiene estas ideas. Nos gusta el FAP porque la tiene a Victoria Donda, qué sé yo. (*Risas.*) Es interesante. Es un poco de humor, nada más, para que no se pongan tensos.

Señor presidente: el proyecto significa un esfuerzo más, el tercer esfuerzo que hace el Congreso para tratar que este organismo sea eficaz, para que no se trabe, para que funcione y para que se abra a la sociedad y creo que es totalmente constitucional, no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad.

Sr. Giustiniani. – Le pido que se retracte.

Sr. Pichetto. – Sí, senador Giustiniani. De ninguna manera la ofendí, la respeto mucho a la diputada. Estuvo con nosotros. Me retracto y además ustedes tienen una historia en la vida del país como Partido Socialista y usted sabe bien que siempre lo he respetado. Además, el Socialismo es uno de los pilares del sistema de partidos. Así que me retracto, era una cuota de humor. Fui incorrecto.

Sra. Estenssoro. – Pido una interrupción.

Sr. Presidente. – La senadora Estenssoro le pide una interrupción.

Sr. Pichetto. – Sí, senadora, le concedo la interrupción.

Sra. Estenssoro. – Gracias, señor presidente y gracias, por su intermedio, al senador Pichetto.

Quiero aclarar que cuando Domingo Cavallo entró al gobierno de la Alianza, como ministro de Economía, yo ya no pertenecía a Acción por la República y, además, había rechazado una banca que me correspondía como diputada. Cuando renunció Guillermo Franco, que era diputado de Acción por la República, me correspondía sucederle y rechacé esa banca porque justamente iba como director de Relaciones Públicas de Aeropuertos Argentina 2000, una privatización que había sido convalidada por la Corte Suprema adicta a Menem, a pesar de que tenía un montón de sentencias judiciales en contrario y yo estaba en contra de ese monopolio de Aeropuertos Argentina 2000 y me parecía, además, que no se podían utilizar las bancas para después hacer *lobby* y darle cobertura a las corporaciones. Hoy sabemos que Eurnekian es un gran socio y aliado de este gobierno, porque como dije antes, las corporaciones están dentro del gobierno y no afuera y por eso Rafael Bielsa es

hoy el presidente de Aeropuertos Argentina 2000. Por eso, yo no tuve nada que ver con el ingreso de Cavallo y renuncié por una cuestión de principios éticos que mantenía entonces y mantengo ahora. Gracias.

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: le pide una interrupción el senador Artaza.

Sr. Pichetto. – Ya termino, senador.

Sr. Presidente. – Dice que es para distender, un pequeño comentario.

Sr. Pichetto. – Bien.

Sr. Artaza. – He luchado mucho tiempo con mucha gente –algunos ya murieron– por sus ahorros, ya hace mucho tiempo de esto. No solamente se cambió la Corte sino que el propio ministro Lavagna le dijo a Néstor Kirchner: “cámbiame la Corte porque esto se nos cae”. Escucharlo de usted, no hace más que ratificarlo, independientemente de los idóneos jueces de la Corte que fueron cambiados. En aquel momento luchamos mucho y no era para redolizar la economía sino por los depósitos de aquella gente que había sido estafada por los banqueros.

Usted decía que hay jueces que tienen que actuar pensando en lo público y de alguna manera lo que tuvo que resolver la política fue indemnizar a los bancos con los Boden 2012. Alguna vez, desde el Congreso tenemos que reparar aquel daño que se le hizo a los argentinos y a este propio Estado argentino que va a tener que enfrentar dentro de poco los doscientos millones que tenemos de deuda. Mucho es lo que hemos compensado a los banqueros; en algún momento vamos a tener que poner un impuesto para los banqueros. Cómo lo resolvió la política fue grave pero hoy a través de su palabra estoy ratificando que aquella Corte fue también para detener los ahorros en dólares que se iban a pagar.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Para terminar y para hacer un breve comentario sobre lo del senador Artaza. Creo que la legislación de emergencia que ha dictado este Congreso ha sido realmente impresionante. Incluso, pienso que podría ser de lectura obligada para algunos países que están en crisis en Europa, como España y como Italia, donde la gente humilde pierde las viviendas, y las pierde en manos de los bancos. Creo que ha habido un esfuerzo del gobierno y de la presidenta de pagar todas las deudas contraídas a partir de esa situación injusta que vivieron los ahorristas. Hace poco se terminaron de pagar y cancelar los BODEN.

Así que en virtud de estos fundamentos referidos a la cuestión jurídica en tratamiento, y cumpliendo con los requisitos de constitucionalidad, pluralismo, eficacia y equilibrio que fijan los artículos 114 y 33 de la Constitución, nosotros vamos a votar positivamente este proyecto.

Como aclaración final, quiero decir que hubo una confusión por parte del senador Fuentes porque había algunas ligeras modificaciones y él leyó todos los artículos de nuevo. Nosotros vamos a ratificar el texto como está redactado. Nunca hubo ningún intento de cambiar nada. Había, en cambio, una incorporación que tenía que ver con la reelección; pero se quedarán sin reelección. ¿Qué se va a hacer? Era la posibilidad de que los actuales consejeros pudieran ser reelectos nuevamente, en el marco de las listas y de la voluntad popular. Pero ahora, esto no va a poder ser porque hemos ratificado el texto que se ha escrito.

Así que vamos a votar positivamente; y después, vamos a votar artículo por artículo, si usted lo dispone.

Sr. Presidente. – Señores senadores: dado lo que hemos escuchado de los distintos bloques, me parece que luego de votar las inserciones, lo más correcto sería realizar una votación única, en general y en particular, salvo que haya alguna opinión en contrario.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. – Señor presidente: quiero realizar una pregunta al solo efecto formal. Deseo saber si este proyecto está dentro de los recaudos del artículo 126 del Reglamento. Pido que se lo lea. Si lo está, no hay problema. Pero pido que se lea.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: el artículo 126 habla de presupuesto.

El tema del Consejo de la Magistratura también tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto. Tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto. En realidad, de las tres comisiones. Es un plenario...

Sr. Presidente. – Es un plenario de tres comisiones.

Entonces, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.

– *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. – Aprobadas las inserciones por unanimidad.¹

Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación electrónica el proyecto en consideración.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). – Falta el voto de la senadora Montero.

Sra. Montero. – Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39 votos por la afirmativa y 31 por la negativa. En consecuencia, se ha superado la mayoría exigida por el segundo párrafo del artículo 77 y por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

– *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

¹ Ver el Apéndice.